



Partido de la Revolución Democrática

ACTOR.

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

VS.

ÓRGANOS LEGISLATIVOS Y  
EJECUTIVO QUE HUBIERAN EMITIDO  
Y PROMULGADO LAS NORMAS  
GENERALES IMPUGNADAS.

- H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
- H. JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACIÓN

2022 JUN 30 PM 5:55

OFICINA DE  
CERTIFICACIÓN JUDICIAL  
Y CANCELACIÓN

NORMA GENERAL  
CUYA INVALIDEZ SE  
RECLAME.

DECRETO POR EL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

ASUNTO.

SE INTERPONE  
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Ciudad de México, a 30 de junio de 2022.

CC. MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.  
PRESENTE.

JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, Presidente de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, personalidad que se acredita en términos de la certificación de fecha 13 de octubre del 2021, emitida por la C. Lic. Daniela Casar García, Directora del Secretariado, del Instituto Nacional Electoral,

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



Partido de la Revolución Democrática

documento que en original se acompaña al escrito de cuenta, señalo domicilio para recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en [REDACTED],

[REDACTED] autorizando en términos del párrafo segundo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como delegados para que hagan promociones, concurren a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley, a los [REDACTED]

[REDACTED] para efectos únicamente de recibir notificaciones a las CC. [REDACTED]

[REDACTED] y [REDACTED] comparecemos de manera en los siguientes términos:

Por esta vía, con fundamento en los artículos 1,14,104, fracción IV; y 105, fracción II, Inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9 Bis; 19, fracción II; 59; 60; 61; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 71; 72; 73; de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a promover **ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD**, en contra del Inconstitucional **"DECRETO POR EL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL**



ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



**INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO**", publicado en la página de internet [https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal\\_old/uploads/gacetas/8724b308265dc871df88e2ae5016ab16.pdf](https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8724b308265dc871df88e2ae5016ab16.pdf), de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 2 de junio de 2022, con el número de No. 864 Bis, por violaciones a diversas disposiciones que se precisan en los capítulos respectivos.

En cumplimiento a los requisitos de procedibilidad contenidos en el artículo 61 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito señalar lo siguiente:

**I. NOMBRE Y FIRMA DE LOS PROMOVENTES.**

- ❖ Obra al calce del presente escrito de Acción de Inconstitucionalidad.

**II. ÓRGANOS LEGISLATIVOS Y EJECUTIVO QUE HUBIERAN EMITIDO Y PROMULGADO LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS.**

❖ **ÓRGANO LEGISLATIVO.**

- **H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura**, Órganos encargado de emitir el ilegal e inconstitucional Decreto; con domicilio oficial en Donceles esq. Allende S/n, Col. Centro Histórico, Ciudad de México.

❖ **ÓRGANO EJECUTIVO.**

- **Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México**, Órganos encargado de publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el ilegal e inconstitucional Decreto; con domicilio oficial en Avenida Plaza de la

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."





Constitución 2, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

### III. LA NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAME Y EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERE PUBLICADO.

- ❖ "DECRETO POR EL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

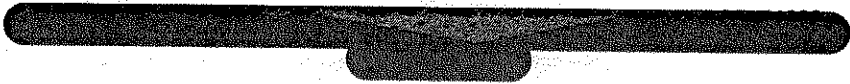


ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUIES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUIES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PARRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, publicado en la página de internet [https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal\\_old/uploads/gacetas/8724b308265dc871df88e2ae5016ab16.pdf](https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8724b308265dc871df88e2ae5016ab16.pdf), de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 2 de junio de 2022, con el número de No. 864 Bis.

**IV. LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMEN VIOLADOS Y, EN SU CASO, LOS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE MÉXICO SEA PARTE QUE SE ESTIMEN VULNERADOS.**

“En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.”.

- ❖ El Decreto cuya invalidez se reclama, viola lo dispuesto en los artículos 14; 41, Base V, apartado C; 116, Fracciones II y IV, incisos a), b), c) y p); y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, apartado A, inciso e) y 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México.





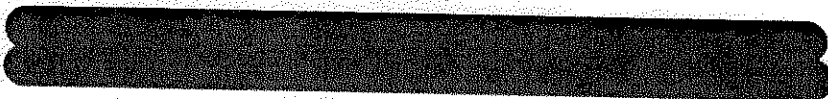
## PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAL.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer, sustanciar y resolver la presente Acción de Inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que el Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 2 de junio de 2022, en la vigésima primera época, No. 864Bis a través de la cual se publicaron las reformas y derogaciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México dictadas por el Congreso de la Ciudad de México del cual se demanda su invalidez dado que se trata de una reforma prohibida por el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que determina la condición de no reformabilidad de los artículos a los que se refiere la reforma que por este medios se reclama.

Esto en virtud de que la pretendida reforma interviene en la vida interna de los órganos autónomos que constitucionalmente son reconocidos como lo es el Instituto Electoral de la Ciudad de México, dado que la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México la cual deroga a las Comisiones de Fiscalización, Vinculación con Organismos Externos e Igualdad de Género y Derechos Humanos.

También elimina a la Unidad de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados, Formación y Desarrollo, la de Formación y Desarrollo, así como la de Vinculación con Organismos Externos.

Igual de grave es la reforma en donde deroga la facultad del Consejo General para



"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



crear unidades técnicas adicionales para el adecuado funcionamiento y logros de los fines del Instituto, transgrediendo con ello el derecho político electoral del ejercicio del cargo dado que imposibilita a las y los consejeros integrantes del Consejo General el cumplimiento de sus atribuciones encomendadas constitucional y legalmente.

En ese sentido, la presente vía es procedente, porque la actividad del poder reformador violenta las decisiones jurídico-políticas fundamentales o valores supremos del estado social-democrático de derecho de nuestra Ley Fundamental.

Lo anterior es así porque el Congreso en la Ciudad de México aprobó reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales en la entidad, las cuales fueron publicadas en la Gaceta de la Ciudad de México, el 2 de junio del presente año, al derogar y reformar disposiciones que quitan las facultades del Consejo General del Instituto como órgano autónomo con la capacidad y naturaleza de auto organizarse, pues las mismas se realizan de tal forma que infieren en la conformación y desaparición de los órganos internos del instituto electoral que le permiten el desarrollo de las tareas que le han sido constitucionalmente encomendadas con la finalidad de ejercer sus funciones bajo los principios electorales de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, Independencia, seguridad jurídica que como órgano autónomo está obligado a realizar, reformas que se traducen en violaciones a los artículos 1, 16, 41, 116 base IV incisos b) y c) y 133 de nuestra Carta Magna.

Dado que las reformas que se propone son de carácter electoral, resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia del Pleno de esa Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se menciona, respecto al control constitucional:

**"LEYES ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. En el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su ley**

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



*reglamentaria, se establece que las leyes electorales federal y locales deben promulgarse y publicarse cuando menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse; que durante éste no pueden someterse a modificaciones fundamentales, así como el sistema de su impugnación, conforme al cual la única vía para plantear la no conformidad de dichas leyes con la Constitución es la acción de inconstitucionalidad, que puede promoverse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la respectiva publicación y que la única autoridad competente para conocer y resolver dichas acciones es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las que deben tramitarse y resolverse en plazos breves, a fin de que el legislador esté en posibilidad de llevar a cabo las modificaciones pertinentes, en caso de que la norma impugnada sea declarada inconstitucional. Por tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no puede, en ningún caso, pronunciarse acerca de la constitucionalidad de leyes electorales, por no ser impugnables ante él con motivo de los actos y resoluciones en los que se hubieran aplicado, porque por un lado, en atención a su naturaleza, en cuanto a que están destinadas a regir un proceso electoral, es imprescindible partir de su firmeza, ya que de otra forma se vulneraría el equilibrio del proceso electoral, pues no sería lógico que conforme a un sistema de contienda electoral entre partidos políticos, se cuestionara la constitucionalidad de una norma relativa a ese proceso, con motivo de actos y resoluciones producidos en él; y por el otro, que está fuera de las facultades de ese tribunal cotejar la norma electoral frente a la Constitución, aun a pretexto de determinar su posible inaplicación."*

Como lo señala el criterio previamente transcrito, la inconstitucionalidad de las leyes electorales solamente podrá ser decretada por el máximo órgano jurisdiccional del país por lo que la reforma que por medio de la presente acción de inconstitucional se reprocha se refiere al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, la cual es contraria a las bases constitucionales lo que afecta a la naturaleza jurídica del Instituto Electoral de la Ciudad de México dado que tiene la característica de un organismo público y autónomo como lo plasmo el poder constituyente en la Carta Magna, la cual se ve afectada con las reformas realizadas.

Al existir afectación al organismo público autónomo electoral en la Ciudad de México,

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



se ven mermadas las atribuciones que tiene encomendadas desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual dispone en el artículo 41 que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las bases que la misma determina en la que los partidos políticos promueven la participación del pueblo en la vida democrática, fomentan el principio de paridad de género, contribuyen a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacen posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.

Además, señala que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales en los términos que establezca la Constitución.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga legitimidad a los Partidos Políticos Nacionales, a través de sus dirigentes nacionales para acudir en Acción de Inconstitucionalidad para solicitar la invalidez del Decreto que reforma y deroga diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, porque son contrarios a ella, y porque tiene interés en que las actuaciones de los organismos públicos electorales se les respete la autonomía de que gozan dado que de ella depende el ejercicio óptimo y profesional, independencia y funcionalidad que se requiere para realizar los trabajos que le son encomendados.

Lo expresado encuentra respaldo en la Tesis Jurisprudencial P./J. 7/2007, **ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVELA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA.**

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



*La fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera limitativa y expresa quiénes son los sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad; sin embargo, no todos ellos pueden plantear ese medio de control constitucional contra cualquier ley, sino que **su legitimación varía en función del ámbito de la norma que pretende impugnarse**, es decir, si se trata de leyes federales, locales, del Distrito Federal o de tratados internacionales. Así, tratándose de la impugnación de leyes federales, están legitimados: 1. El 33% de los Diputados del Congreso de la Unión; 2. El 33% de los Senadores del Congreso de la Unión; 3. El Procurador General de la República; 4. Los partidos políticos con registro federal, si se trata de leyes de naturaleza electoral; y 5. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Por su parte, contra leyes locales están legitimados: 1. El 33% de los Diputados de la Legislatura Local que corresponda; 2. El Procurador General de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro en el Estado de que se trate, siempre y cuando se impugne una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los órganos estatales protectores de derechos humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Cuando la impugnación verse contra leyes del Distrito Federal, tendrán legitimación: 1. El 33% de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 2. El Procurador General de la República; 3. **Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, siempre que se trate de la impugnación de una ley electoral**; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuando se trate de leyes que vulneren los consagrados en la Constitución Federal. Finalmente, tratándose de tratados internacionales, pueden impugnarlos: 1. El 33% de los Senadores del Congreso de la Unión; 2. El Procurador General de la República; y 3. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de un tratado internacional que vulnere los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal.*

*Recurso de reclamación 340/2006-PL, derivado de la acción de inconstitucionalidad 44/2006. Movimiento Civilista Independiente, A.C. 23 de noviembre de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.*

*El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 7/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.*

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



Con la personalidad que ostentamos acudimos para hacer notar que, el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 2 de junio del presente año, en la Vigésima primera época, No- 864 Bis; en las páginas 4 a la 13 de la mencionada publicación por medio de la cual reforma diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales en la Ciudad de México, la cual violenta la Supremacía Constitucional dado que el poder constituido en la Ciudad de México no toma en cuenta las bases y parámetros contenidas en la norma Constitucional Federal fragmentando el pacto federal y consecuentemente la existencia del verdadero estado democrático en el país.

En este sentido, bien sabido que la Acción de Inconstitucionalidad, es el medio de defensa legal idóneo y de control constitucional que sirve para expulsar del orden jurídico las normas generales que sean contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y/o a los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país es Parte; bajo estas circunstancias, el sistema mexicano de control de constitucionalidad en la materia electoral recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien realiza tal control mediante las Acciones de Inconstitucionalidad que interponen los partidos políticos nacionales y que en su mayoría versan sobre materia electoral.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

Conforme a lo anterior, acorde a lo establecido en lo establecido en los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Carta Magna y 62, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho humano irrenunciable de los partidos políticos nacionales, con registro vigente ante el Instituto Nacional Electoral a interponer los escritos de Acción Inconstitucionalidad contra en contra de leyes electorales federales o locales que se presume contrarias a las norma constitucional, como lo es el asunto que nos ocupa.







Con base en estas premisas, atendiendo a lo preceptuado en la normatividad invocada con anterioridad, el instituto político que se representa cuenta con la legitimación activa, personalidad e interés jurídico para interponer la presente Acción de Inconstitucionalidad, para Impugnar el contenido del "DECRETO POR EL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUIES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUIES,

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, Instrumento jurídico que a todas luces, no es acorde a lo preceptuado en tanto por las normas constitucionales federales y locales.

Esto es así, en virtud de que, el decreto que se demanda su invalidez, a través del presente medio de defensa legal, atenta directamente con lo preceptuado en los artículos 14; 41, Base V, apartado C; 116, Fracciones II y IV, incisos a), b), c) y p); y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, apartado A, inciso e) y 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en relación con el artículo 1, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, emanado de dichas disposiciones constitucionales, precepto normativo que, determina que dicho Código Comicial, es un instrumento jurídico normativo que contienen disposiciones de orden público y de observancia general, además de que tiene por objeto establecer las normas aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, las cuales garantizan que se realicen elecciones libres, periódicas y auténticas mediante sufragio efectivo, universal, libre, directo, secreto; obligatorio, personal e intransferible en la Ciudad de México, privilegiando la tutela de:

“En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.”.



- ❖ La promoción, respeto, protección y garantía de los derechos y obligaciones político-electorales de la ciudadanía y de las personas originarias, así como de los pueblos, barrios y las comunidades indígenas todos ellos residentes en la Ciudad de México.
- ❖ Las prerrogativas y obligaciones de los Partidos Políticos Nacionales, Locales, candidaturas de los partidos y candidaturas sin partido (independientes).
- ❖ La constitución, derechos y obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales.
- ❖ La sustanciación de las elecciones para la titularidad de la Jefatura de Gobierno, de Diputaciones al Congreso, Alcaldías y Concejales, todos los cardos de la Ciudad de México.
- ❖ Las bases del régimen sancionador electoral y el régimen sancionador en materia de participación ciudadana.
- ❖ Los procedimientos de investigación y fiscalización electoral, en el supuesto de que el Instituto Nacional Electoral delegue dicha facultad.
- ❖ Acciones para el fortalecimiento de la educación cívica y formación de ciudadanía.
- ❖ La estructura y atribuciones del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral, ambos de la Ciudad de México, entre otras.

Con base en esta cadena argumentativa, al analizar el contenido del Decreto que se impugna por considerarlo inconstitucional, es dable considerar que de manera

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



flagrante se trastocar directamente las premisas reguladas y contempladas en el artículo 1, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, anteriormente enunciadas y emanadas de lo preceptuado en los 14; 41, Base V, apartado C; 116, Fracciones II y IV, incisos a), b), c) y p); y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, apartado A, inciso e) y 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México, ante la apreciación del buen derecho, lo que lo hace un decreto de reforma electoral, sujeto a su revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de las Acciones de Inconstitucionalidad que lleguen a presentar los partidos políticos nacionales, como lo es el medio de defensa legal que se representa.

Conforme a lo anterior, no se debe perder de vista que, el Decreto que se impugna a través de la presente Acción de Inconstitucionalidad, si bien, se realiza con el pretexto de una austeridad, lo cierto es que, sin una planeación adecuada, elimina áreas técnicas conocidas como Unidad Técnica de Fiscalización, Centro de Formación y Desarrollo, Unidad de Vinculación con Organismos Externos, Unidad de Género y Derechos Humanos y Unidad Técnica de Archivo, Logística y Atención a Órganos Desconcentrados, del Instituto Electoral de la Ciudad de México; lo que trae como consecuencia una afectación directa a la autonomía propia en su funcionamiento y/o autoorganización del dicho órgano electoral, conducta con la que se trastoca de manera directa la función y principios rectores de la norma electoral.

Bajo estas circunstancias, al realizar una interpretación sistemática y funcional al Decreto del que se solicita su invalidez, es dable concluir que a todas luces es inconstitucional, en virtud de que, todas y cada uno de las disposiciones jurídico normativas contenidas en el cúmulo de los artículos que componen el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, debe de verse y catalogarse como un todo, dado que, con este conjunto de normas electorales que

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



rigen la conducta y la vida interna e institucional el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues, con ellas se garantiza que se realicen elecciones libres, periódicas y auténticas mediante sufragio efectivo, universal, libre, directo, secreto; obligatorio, personal e intransferible, premisas que, junto con los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas, objetividad, paridad e interculturalidad rigen la función electoral, en el entendido de que, para que la autoridad electoral cumpla cabalmente con ese fin, así como para el debido cumplimiento de sus funciones, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento sus obligaciones y adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, por lo que, cualquier cambio en la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México como lo es la que se indica en el Decreto que se impugna y por mínima que sea, afecta en un todo la función electoral, tutelada por el conjunto de normas contenidas en el código comicial antes invocado.

Bajo esta mirada, en lo particular, con cualquier reforma parcial o total que se efectuó a algún artículo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, como lo es el Decreto que se solicita su invalidez, de manera directa trastoca los principios y premisas invocados en el párrafo inmediato anterior, que rigen la función electoral, nace el derecho a impugnar a través de la Acción de Inconstitucionalidad dicha reforma electoral, acorde a lo establecido en los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Carta Magna y 62, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, creándose la legítima activa, la personalidad y el interés jurídico del instituto político que se representa para interponer el presente medio de defensa legal.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



**V. PARA CONTEXTUALIZAR EL ACTO QUE POR ESTA VÍA SE IMPUGNA, ES DABLE HACER ALUSIÓN A LOS SIGUIENTES:**

Para contextualizar el acto que por esta vía se Impugna, es dable hacer alusión a los siguientes:

**ANTECEDENTES**

1. 1.- El diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el Diputado Carlos Hernández Mirón del Grupo Parlamentario del Partido Político MORENA, presentó una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

En dicha reforma se propuso, entre otros temas, elimina 5 áreas especializadas del Instituto y reasignar sus atribuciones en otras áreas que no tienen dicha especialidad, así como la atribución del Consejo General para crear los órganos técnicos que considere necesario para el debido cumplimiento de sus atribuciones y objetivos, a pesar de que el Instituto goza, constitucionalmente, de autonomía en su funcionamiento y la capacidad de determinar su organización interna.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

Las Unidades Técnicas que se propone eliminar son las siguientes:

- De Archivo y Logística
- De Vinculación con Órganos Externos,
- De Género y Derechos Humanos,
- De Formación y Desarrollo,
- De Gestión de Calidad,
- De Fiscalización.

Además, propuso desaparecer 2 Subcontraloras de la Contraloría interna.



2. En igual fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Asuntos Político-Electorales la iniciativa referida, para efecto de emitir el dictamen correspondiente.
3. La Comisión de Asuntos Políticos Electorales dio cuenta que se cumplió con el principio de máxima publicidad al haberse considerado un plazo no menor de diez días hábiles, que establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para que las y los ciudadanos propusieran modificaciones a las iniciativas, materia del presente dictamen.
4. El siete de abril siguiente, la comisión dictaminadora del Congreso de la Ciudad de México solicitó prórroga para dictaminar el proyecto de reforma, la cual fue concedida por el pleno del congreso en sesión ordinaria de ese día.
5. El nueve de mayo de dos mil veintidós, la consejera del IECM, solicitó el presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México, una mesa de trabajo con las y los integrantes de la comisión dictaminadora, con la finalidad de analizar en conjunto la propuesta de reforma multirreferida.
6. El día trece de mayo de dos mil veintidós, se celebró la mesa de trabajo con las personas diputadas integrantes de la Comisión de Asuntos Político-Electorales con las personas consejeras electorales del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
7. El veinte de mayo, en la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México, se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos electorales de la Ciudad de México.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



8. El 20 de mayo del 2022, en sesión extraordinaria la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México, se aprobó el DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES SOBRE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
9. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en sesión plenaria, el Congreso de la Ciudad de México, con treinta y siete votos a favor, aprobó en sentido positivo con modificaciones, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, presentada por el diputado Carlos Hernández Mirón y se ordenó remitir a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su publicación.
10. El 2 de junio de 2022, en la página de página de internet [https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/porta1\\_old/uploads/gacetas/8724b308265dc871df88e2ae5016ab16.pdf](https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/porta1_old/uploads/gacetas/8724b308265dc871df88e2ae5016ab16.pdf), con el número 864 Bis de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se publicó el DECRETO POR EL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."





DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUIES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUIES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; instrumento jurídico del que se demanda su invalidez.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



11. El veintidós de junio de dos mil veintidós, la Sala Superior del Tribunal Electoral emitió el acuerdo general en el expediente SUP-JDC-486/2022 y sus acumulados, promovidos por Erika Estrada Ruíz y otras personas en contra del Congreso y Jefa de Gobierno ambos de la ciudad de México, por la publicación del Decreto de Reforma entre otras cuestiones, a través del cuál eroga las Comisiones de Fiscalización y Vinculación de organismos Externos, así como la eliminación de las Unidades técnicas de Género y Derechos Humanos, Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados, así como Formación y Desarrollo, además cuestionaron la eliminación de la facultad del Consejo General para crear unidades técnicas adicionales para el adecuado funcionamiento y logro de los fines del Instituto.

En el cual Acordó lo siguiente:

**PRIMERO.** La Sala Superior es competente para conocer de los juicios presentados.

**SEGUNDO.** Se acumulan los medios de impugnación en los términos precisados.

**TERCERO.** Son improcedentes los juicios promovidos por la parte actora.

**CUARTO.** Se reencauzan las demandas al Tribunal Electoral de la Ciudad de México para los efectos precisados en el presente acuerdo.

**QUINTO.** Remítanse las constancias a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, para que realice el trámite correspondiente.

**NOTIFÍQUESE** como corresponda.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias y archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Así, por unanimidad de votos lo acordaron la magistrada y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con ausencia de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. El

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



secretario general de Acuerdos autoriza y da fe que se firma de manera electrónica.

12. El quince de junio de dos mil veintidós, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México resolvió el expediente TECDMX-JEL-387/2021, en el Juicio Electoral promovido por el Instituto Electoral de la Ciudad de México en contra de la Jefatura de Gobierno, mediante la cual reclamaron la modificación, reducción y aprobación del Presupuesto de Egresos para su Ejercicio Fiscal 2022 y las consecuencias jurídicas derivadas de ello, así como, la violación a las leyes del procedimiento regulador del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2024. Sentencia que puede visualizarse en la siguiente liga <https://www.tecdmx.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/VERSION-PUBLICA-SENTENCIA-TECDMX-JEL-387-2021.pdf>.

#### “RESUELVE

**PRIMERO.** Son fundados los agravios planteados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

**SEGUNDO.** Se ordena a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, y al Congreso, todos de la Ciudad de México, procedan conforme a los efectos precisados en la presente sentencia.

**TERCERO.** Hágase del conocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el contenido de la presente sentencia para los efectos constitucionales y legales conducentes.

NOTIFÍQUESE conforme a Derecho corresponda.

Publíquese en el sitio de Internet de ese Tribunal Electoral, ([www.tecdmx.org.mx](http://www.tecdmx.org.mx)), una vez que esta Sentencia haya causado estado.

“En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.”.



Así lo resolvieron y firman las Magistradas y los Magistrados del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, los puntos resolutivos PRIMERO y SEGUNDO y sus partes considerativas por unanimidad de votos, con el voto concurrente que emite el Magistrado Juan Carlos Sánchez León, mismo que corre agregado a la presente Sentencia como parte integrante de esta. En tanto el punto resolutivo TERCERO y su parte considerativa por mayoría de tres votos a favor de las Magistradas Martha Alejandra Chávez Camarena y Martha Leticia Mercado Ramírez, así como del Colegiado Armando Ambríz Hernández, con el voto en contra del Magistrado Juan Carlos Sánchez León. Todo lo actuado ante el secretario general, quien autoriza y da fe.

13. El documento que se describen en el numeral inmediato anterior, a todas luces es inconstitucional, por lo que genera los siguientes:

### CONCEPTOS DE INVALIDEZ

#### PRIMERO.

**CONCEPTO DE INVALIDEZ.**- Lo constituye el decreto que deroga el párrafo segundo del artículo 98, así como las fracciones V, VII y IX del artículo 59 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (CIPE) consistente en la eliminación de la facultad del Consejo General para crear unidades técnicas adicionales para el adecuado funcionamiento y logro de los fines del Instituto y la eliminación de tres comisiones permanentes (Igualdad de Género y Derechos Humanos, Fiscalización y Vinculación con Organismos Externos).

**PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS.** Artículos 1, 16, 41, párrafo primero, base V, y Apartado C; 122, fracción VII en concordancia con el artículo 116, fracción IV, inciso b), y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, Apartados A, inciso e) y B numeral 1, 29, apartado A, numeral 4 de la Constitución

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



Política de la Ciudad de México y los artículos 31, 33 y 36 párrafo tercero del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

**CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-** Las reformas que se deben tildar de inconstitucionales son porque violan a la autonomía en el funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el Dictamen que dio origen a la Iniciativa se establece que las reformas propuestas están encaminadas a la optimización de competencias, al gasto eficiente y los costos de la democracia y a la necesidad de contar con autoridad administrativa austera, racional y eficaz que organice procesos electorales menos onerosos.

Aduce el considerando segundo del dictamen que dio origen a la iniciativa de reforma que esto implica la disminución de la estructura electoral y redistribución de competencias y funciones para optimizar el gasto aplicado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Para ello, el Congreso de la Ciudad de México, reformó diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales que **tiene 3 objetivos fundamentales:**

- **Eliminar la facultad del Instituto Electoral de la Ciudad de México para crear Unidades Técnicas distintas a las legalmente establecidas en la ley;**
- **Eliminar cinco Unidades Técnicas (Igualdad de Género y Derechos Humanos, de Fiscalización, de Vinculación con Organismos Externos, Archivo, Logística y Apoyo a los Órganos Desconcentrados, y Centro de Formación y Desarrollo) y trasladar sus funciones a cuatro órganos ejecutivos (Secretaría Ejecutiva, Secretaría Administrativa, Asociaciones Políticas y Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía), lo cual, tiene como consecuencia la desaparición de plazas; y**
- **Eliminar tres Comisiones Permanentes (Igualdad de Género y Derechos Humanos, Fiscalización y Vinculación con Organismos Externos).**

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



Sin embargo, esta reforma es contraria al principio de autonomía de los órganos estatales constitucionales autónomos, se viola su independencia e implica una merma al ejercicio de la función electoral eficiente, tal como se expondrá a continuación:

Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la soberanía popular se ejerce a través de los poderes de la unión (legislativo, ejecutivo y judicial), lo cierto es que ciertas funciones estatales, están encomendadas a órganos constitucionales autónomos, lo cual tienen el objetivo de defender o hacer efectivo el ejercicio de derechos fundamentales y así controlar la constitucionalidad de ciertos actos que originalmente estaban depositados en algún poder de la Unión.

Su propio origen, naturaleza, andamiaje (presupuestal y orgánico), funcionamiento y fin, los hace independientes de los demás poderes u órganos del Estado.

Tesis: P./J. 20/2007 ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: **1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado.** 3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades totales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Tesis: P./J. 12/2008

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo,

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en **atender necesidades totales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.** Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: **a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; v, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.**

Los artículos 41, Base V, párrafo primero y Apartado C; 122, fracción VII en relación con el artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 31, 33 y 36 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen:

CPEUM

Artículo 41. (...)

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.

(...)

**Apartado C.** En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
2. Educación cívica;
3. Preparación de la jornada electoral;
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

fb2338c0a5fa06486e6c2dc6f11f6bca82798a8a62b58e0fa5650af1c54d6a8



## Partido de la Revolución Democrática

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y
11. Las que determine la ley.

En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá:

- a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales;
- b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o
- c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.

(...)

**Artículo 122.** La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

(...)

VII. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que esta Constitución prevé para las entidades federativas.

**Artículo 116.** (...)

(...)

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

(...)

Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, **gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones**, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes:

El artículo 98, numeral 1 de la LGIPE, prevé:

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."





Artículo 98.

1. Los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. **Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones**, en los términos previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Constitución Política de la Ciudad de México.

La CPCM establece:

#### Artículo 46 Organismos Autónomos

##### A. Naturaleza jurídico-política.

Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; **cuentan con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes.** Estos serán:

(...)

e) Instituto Electoral de la Ciudad de México;

(...)

##### B. Disposiciones comunes.

1. Los organismos autónomos ajustarán sus actuaciones a los principios reconocidos en el derecho a la buena administración, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones. Contarán con estatutos jurídicos que lo garanticen. Las leyes y estatutos jurídicos garantizarán que exista equidad de género en sus órganos de gobierno. **Tendrán facultad para establecer su normatividad interna, presentar iniciativas de reforma legal o constitucional local en la materia de su competencia**, así como las demás que determinen esta Constitución y las leyes de la materia.

(...)

#### Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. CIPE.

Por último, el CIPE establece:

Artículo 31. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, son órganos de carácter permanente y profesionales en su desempeño, **gozan de autonomía presupuestal en su funcionamiento**

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y este Código.

Artículo 33. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral se rigen para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, las leyes generales de la materia, la Constitución Local, la Ley Procesal y este Código. Asimismo, sin vulnerar su autonomía, les son aplicables las disposiciones relativas de la Ley de Presupuesto.

Artículo 36. (...)

(...)

Gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones de acuerdo a lo previsto en las Leyes Generales, este Código y la Ley de Participación. Sus fines y acciones se orientan a:

(...)

Los órganos constitucionales autónomos, tienen como característica fundamental pertenecer al Estado y ser independiente a los tres poderes en que se divide el ejercicio del poder soberano en nuestro país (Poder ejecutivo, legislativo y judicial).

Su propia denominación es el rasgo fundamental para ejercer una función estatal de forma autónoma. El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), se encarga de organizar las elecciones para la renovación periódica de la Jefatura de Gobierno, el Congreso de la Ciudad de México y sus Alcaldías, así como en los ejercicios de participación ciudadana reconocidos en su Constitución Local y Ley de Participación Ciudadana.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

La **autonomía de funcionamiento** regulada en el artículo 116 de la Constitución Federal, significa la capacidad de realizar, sin restricción o impedimento alguno, todas las actividades inherentes a sus atribuciones o facultades e involucra los siguientes tipos de autonomía:

- **Autonomía técnica.** Capacidad de los organismos para decidir en los asuntos propios de la materia que les ha sido asignada;



- **Autonomía orgánica:** La no dependencia jerárquica de algún otro poder o entidad;
- **Autonomía financiera-presupuestaria:** para definir y proponer sus propios presupuestos y disponer planificada y libremente de los recursos económicos que les sean asignados para el cumplimiento de sus fines;
- **Autonomía normativa:** para dictar y aprobar los reglamentos, lineamientos, manuales y, en general, todo tipo de normas relacionadas con su organización y administración internas;

Para ejercer sus funciones con **autonomía plena**, ningún otro poder debe acotar o suprimir alguno de los cuatro tipos de autonomía antes enunciados, pues hacerlo, limita la posibilidad de gobernarse sin acotación o injerencia de otro poder estatal.

En el caso concreto, la legislatura local al eliminar la facultad del Consejo General del IECM para crear unidades técnicas adicionales para el adecuado funcionamiento y logro de los fines de la Institución, **se entromete en asuntos que corresponde dilucidar con autonomía técnica y de gestión, orgánica y normativa al IECM.**

La eliminación de esta atribución (párrafo tercero del artículo 98 del CIPE) no se vincula a la austeridad alegada en la exposición de motivos (contenida en el dictamen que dio origen a la iniciativa) de la reforma aprobada por el Congreso de la Ciudad de México, ni mucho menos existe razonamiento objetivo alguno, por el cual se demuestre que eliminar dicha facultad, generará eficiencia y modernización de la estructura organizativa y funcional del IECM.

Eliminar el párrafo tercero del artículo 98 del CIPE, representa un vicio de inconstitucionalidad dentro del marco normativo bajo el cual el IECM está obligado a hacer cumplir la ley<sup>1</sup>. La eliminación de su independencia auto organizativa implica una

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

<sup>1</sup> LGIPE.

Artículo 4.

1. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de esta Ley. (LGIPE)

Artículo 6.

(...)

3. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y de las demás dispuestas en esta Ley.

(...)

Artículo 27.



decisión arbitraria y subjetiva del poder legislativo y constituye un antecedente peligroso para vulnerar, a través de una reforma legal, su autonomía de funcionamiento.

Esa pérdida de capacidad de auto organización, pone en riesgo las elecciones y los ejercicios de participación ciudadana, pues el IECM no podrá crear áreas que atiendan nuevas demandas o nuevas atribuciones que por ley, por delegación del Instituto Nacional Electoral o por resoluciones jurisdiccionales se le encomienden, con lo cual, esta reforma **crea normas de imposible aplicación al hacer nugatorias las facultades** establecidas en los artículos 37, párrafo primero, 38, 50, fracción LI y 80, fracción VII del CIPE<sup>2</sup>, para:

- Modificar su estructura conforme a sus necesidades, suficiencia presupuestal y por atribuciones de delegación que otorgue el INE; y
- Para elaborar, al año siguiente de la elección con apoyo de especialistas, los estudios respecto a la eficiencia y modernización de la estructura organizativa y funcional del IECM.

Lo anterior es así, porque al IECM le rige el principio general de derecho "*las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite*", y al quitarle la facultad expresa de poder crear Unidades Técnicas para el adecuado cumplimiento de las

(...)  
2. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la correcta aplicación de las normas correspondientes en cada entidad.

<sup>2</sup> Artículo 37. El Instituto Electoral se integra conforme a la siguiente estructura misma que podrá ser modificada de conformidad a las necesidades del propio Instituto y/o atribuciones de delegación que otorgue el Instituto Nacional Electoral:

(...)  
Artículo 38. Los Órganos Ejecutivos, Desconcentrados, Técnicos y con Autonomía de Gestión tendrán la estructura orgánica y funcional que apruebe el Consejo General, atendiendo a sus atribuciones y la disponibilidad presupuestal del Instituto Electoral. El Consejo General, en la normatividad interna, determinará las relaciones de subordinación, de colaboración y apoyo entre los órganos referidos.

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo General:

(...)  
LI. Aprobar a propuesta de la Junta Administrativa, la estructura orgánica del Instituto Electoral, conforme a las previsiones generales de este Código, las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal, y

(...)  
Artículo 80. Son atribuciones de la Junta Administrativa:

(...)  
VII. Elaborar al año siguiente de la elección con apoyo de especialistas, siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, los estudios respecto a la eficiencia y modernización de la estructura organizativa y funcional del Instituto Electoral y proponer al Consejo General los dictámenes correspondientes;

VIII. Someter a la aprobación del Consejo General, la propuesta de estructura orgánica del Instituto Electoral, conforme a las previsiones generales de este Código, el Estatuto del Servicio, las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal;

(...)

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



funciones conferidas, hace imposible la aplicación de los artículos 37, párrafo primero, 38, 50, fracción LI y 80, fracción VII del CIPE, violándose así la autonomía de funcionamiento garantizada en los artículos 122, fracción VII en concordancia con el artículo 116, fracción IV, inciso c) de la CPEUM; 98 numeral 1 de la LGIPE; 46, Apartados A, inciso e) y B numeral 1 de la CPCM y los artículos 31, 33 y 36, párrafo tercero del CIPE.

Al hacer imposible esas facultades, se elimina la autonomía de funcionamiento, pues el IECM no podrá crear las Unidades Técnicas que se requieran para el cumplimiento eficaz de la función electoral.

Es decir, la eliminación de esta facultad, además de vulnerar la autonomía de funcionamiento del IECM, hace que pierda capacidad operativa para el ejercicio eficaz de la función electoral, poniendo en riesgo las elecciones y los ejercicios de participación ciudadana.

Dicha intromisión a la autonomía de funcionamiento queda de manifiesto porque:

- i. Existía la **presunción legal** de que la actual estructura del IECM se organizó, conformó y ajustó desde el 7 de junio 2017<sup>3</sup>, con base en los principios de racionalidad, austeridad y eficacia previstos para el ejercicio del gasto público y a un modelo de conformación compacta, brindando desde esa fecha eficacia en el ejercicio de la función estatal encomendada, por tanto, esta reforma es injustificada;
- ii. Rompe con la lógica que el sistema nacional de elecciones regula para la interacción entre los organismos constitucionales autónomos y el poder legislativo, a partir de la cual, se puede reestructurar la organización interna del IECM, sin vulnerar su autonomía;
- iii. A partir de la reforma de 2014, el constituyente local sentó las bases bajo las cuáles el IECM debía conformarse en su estructura orgánica y las únicas causales bajo las cuales puede modificarse autónomamente.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

<sup>3</sup> Fecha en que se publicó el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.



**Presunción Legal de un modelo de conformación estructural compacta del IECM conforme a los principios de racionalidad, austeridad y eficacia.**

Una presunción legal hace prueba plena, en virtud de que la ley le ha atribuido ese carácter.

En el caso concreto, el poder legislativo de la Ciudad de México fue quien conformó la actual estructura del IECM. La composición orgánica del IECM no fue una decisión arbitraria de este organismo electoral; ésta se efectuó conforme a lo que establecían los artículos 37, 83, 84, 87, 89, 93, 98, 102 y 110 del CIPE vigentes hasta antes de la reforma.

A partir de la entrada en vigor del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales en la Ciudad de México (7 de junio de 2017) y hasta antes de la reforma que ahora se impugna, la estructura orgánica y funcional se hizo con base en las atribuciones y responsabilidades previstas en dicho ordenamiento y la **reestructuración** que se hizo—para dar cabal cumplimiento a la reforma constitucional de 2014—se sujetó a los principios de racionalidad, austeridad y eficacia previstos para el ejercicio del gasto público, previendo un modelo de organización compacto, tal y como se dio a conocer oportunamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con lo cual, **existe la presunción legal de que la estructura orgánica vigente** hasta antes de la reforma que ahora se impugna, brinda una mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones encomendadas al IECM, tal y como se prevé en el artículo DÉCIMO TERCERO transitorio del Decreto por el cual se expidió el CIPE:

**CIPE**

Transitorios.

(...)

**DÉCIMO TERCERO:** A partir de la entrada en vigor del presente decreto las autoridades electorales contarán con un plazo de 60 días naturales para adecuar y aprobar toda la normatividad interna, su estructura orgánica y funcional con base en las atribuciones y responsabilidades previstas en este Código. Este proceso de reestructuración deberá sujetarse a los principios de racionalidad, austeridad y eficacia previstos para el ejercicio del gasto público, previendo un modelo de organización compacto que brinde una mayor calidad en el servicio; hecho lo anterior, dará a conocer lo anterior a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

(...)



"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



Por tanto, no existe justificación constitucional, argumento legal (debida fundamentación y motivación), ni parámetro racional y objetivo por parte del Congreso de la Ciudad de México, para determinar y desvirtuar la presunción legal de racionalidad, austeridad y eficacia en la actual estructura orgánica del IECM contemplada en el artículo DÉCIMO TERCERO transitorio, con lo cual, existe razón suficiente para que se **invaliden** todos y cada uno de los artículos adicionados, modificados y derogados del CIPE del decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 2 de junio 2022; Vigésima Primera Época, No. 864 Bis. En páginas 4 a la 13 de la publicación señalada.

**La interacción entre el IECM y el poder legislativo debe ser fuente originaria para la modificación legal de la estructura orgánica del organismo constitucional autónomo.**

Como se reconoce la creación de los órganos constitucionales autónomos electorales, tienen como fin encomendar la realización de una función estatal a un órgano ajeno a los tres poderes constituidos (ejecutivos, legislativos y judiciales), con el fin de evitar cualquier injerencia e influencia de estos en la organización de las elecciones y en los ejercicios de participación ciudadana.

La reforma constitucional en materia político-electoral del 10 de febrero de 2014, trajo como consecuencia el dictado de Leyes Generales en la materia<sup>4</sup>, la modificación de Constituciones y la modificación o dictado de nuevas de leyes electorales locales, conforme al ámbito de atribuciones y competencias.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

En el caso de la Ciudad de México, el 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Carta Magna, en materia de reforma política de la Ciudad de México en la que se reconoció como entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

<sup>4</sup> Aquellas que inciden válidamente en todos los órdenes jurídicos que integran al Estado Mexicano. Estas leyes tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan al Congreso de la Unión a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, de la Ciudad de México y municipales conforme al ámbitos de atribuciones y competencias delimitadas en la misma.



De esta reforma constitucional derivó que el poder constituido en la Ciudad de México creara la Constitución Política de esta entidad federativa y la publicara en el Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017.

A partir de dicha Constitución, el Congreso local reglamentó todo lo concerniente a la renovación periódica de elecciones, a la organización de procesos de participación ciudadana y al diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía, a través del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado el 7 de junio de 2017 en la Gaceta de la Ciudad de México.

Por otro lado, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales regula la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como los supuestos y competencias para su modificación

El párrafo tercero del artículo 41 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone lo siguiente:

Artículo 41. El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral. Sus decisiones se asumen de manera colegiada en sesión pública y por mayoría de votos.

El Consejo General se integrará por una persona Consejera que preside y seis personas Consejeras Electorales con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o local, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. La conformación del mismo deberá garantizar el principio de paridad de género.

**Participarán también como personas invitadas permanentes a las sesiones del Consejo, sólo con derecho a voz, una diputada o diputado de cada Grupo Parlamentario del Congreso de la Ciudad de México.**

(...)

De dicha disposición se desprende que, la participación de una diputada o diputado de cada Grupo Parlamentario como personas invitadas permanentes, tiene como fin la interacción de dos órganos del Estado: el poder legislativo y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para identificar las áreas de oportunidad que permitan modificar, adicionar o mejorar las normas electorales o los procedimientos para el ejercicio de la función electoral.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."





Esa lógica de acercamiento institucional e interacción directa, permiten al poder legislativo identificar conductas o actos que sean susceptibles de atención legislativa, pero también, permite identificar si los procedimientos y estructura del órgano constitucional autónomo es eficaz. Se trata pues, de una evaluación conjunta sobre la efectividad del marco normativo electoral.

Esa participación directa del poder legislativo en el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se permite conforme a una interpretación funcional y sistemática de los artículos 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

Esta participación permanente en el Consejo General por parte de quienes integran los Grupos Parlamentarios del Congreso, es armónica con las disposiciones constitucionales y orgánicas que facultan al IECM (organismo constitucional autónomo) a iniciar leyes o decretos en materia electoral:

#### Constitución Política de la Ciudad de México.

#### Artículo 30 De la Iniciativa y formación de las leyes.<sup>5</sup>

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:

(...)

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.

#### Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

**Artículo 13.** El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes:

(...)

XCIII. Recibir las propuestas de reforma en materia electoral acordadas por el Consejo General del Instituto Electoral;

<sup>5</sup> Esta atribución también se regula en el artículo 12, fracción VI de la LOCCM

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



Las anteriores disposiciones, interpretadas armónicamente, permiten mantener un diálogo permanente para que, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en caso de ejercer su facultad de promover iniciativas de ley, lo haga coordinadamente y conforme al intercambio de opiniones, puntos de vista o señalamientos que el Poder Legislativo haga en su participación al seno del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

La participación permanente de integrantes del Poder legislativo tiene como finalidad que los distintos grupos parlamentarios, al ser representantes del pueblo, alleguen al Congreso de elementos objetivos sobre la eficacia de las normas electorales y del ejercicio de la función electoral. Su naturaleza es de acercar la representación popular a las actividades de la autoridad electoral, para sensibilizarse sobre los procedimientos que implementa y sobre las normas que dicta en cumplimiento a sus atribuciones.

Asimismo, esa participación permanente en el seno del Consejo General, es el elemento idóneo para intercambiar opiniones y diseñar con visión y razón de estado, cualquier modificación o reforma a la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, misma que se diseñó en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales desde el 7 de junio de 2017 y que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 122, fracción VII en relación con el artículo 116, base IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dota de autonomía en su funcionamiento, por tanto, cualquier cambio a la estructura orgánica de un órgano constitucional autónomo, no puede quedar al arbitrio de uno solo de los poderes, sin que haya existido interacción previa, sobre todo, cuando existe una actuación permanente del órgano legislativo al seno del máximo órgano de dirección del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el cual permite planear conjuntamente esa propuesta de modificación a su estructura orgánica.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



La participación permanente de las fracciones parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México en el Consejo General del Instituto Electoral, es la fuente originaria para que, en caso de que el poder legislativo quiera realizar modificaciones a la estructura del órgano electoral, lo haga sin afectar su autonomía.

Permitir que el poder legislativo, a través de una reforma legal, modifique la estructura de un organismo constitucional autónomo, sin la debida planeación y diseño de ambos órganos del Estado, abre la puerta a que, con reformas legales, un poder soberano viole la autonomía de funcionamiento de otro órgano del estado, con el objetivo de minar el eficaz ejercicio de la función electoral, al sobrecargar de funciones a un menor número de personas servidoras públicas, lo cual va en detrimento de todos los derechos político-electorales y de participación ciudadana.

Esto es razón suficiente para que se **invalide** el actual decreto de reforma y en armonía con la natural Interacción que debe darse entre el poder legislativo y un órgano constitucional autónomo (artículo 37, párrafo tercero Código de Instituciones y Procedimientos Electorales), se establezca qué, tratándose de reformas legales que puedan atentar contra la autonomía de un instituto electoral, la opinión y participación de dichas autoridades es necesaria para cualquier modificación y sobre todo en sus estructuras orgánicas.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

Esa ausencia de intercambio, hace que la reforma a la estructura orgánica al Instituto Electoral de la Ciudad de México carezca de estudios y análisis objetivos para lograr los fines por los que supuestamente busca, que son la eficiencia y estructura óptima, sobre todo, porque las modificaciones, adiciones y derogaciones legales, solo traslada funciones de las cinco unidades técnicas que son desaparecidas (junto con su personal adscrito), para que éstas sean absorbidas por cuatro órganos ejecutivos del Instituto,



que no cuenta con el personal suficiente ni capacitado para desplegar dichas actividades, e incluso pudiera llegar el momento que debido al cumulo de tareas a desempeñar porque la carga de trabajo, al ser disminuidas y cohesionadas las tareas entre comisiones o unidades), se verían mermadas en la eficacia y profesionalismo con las que se deben desarrollar.

Se debe dejar clara la importancia, relevancia y afectación de las tareas que le han sido encomendadas al Instituto Electoral de la Ciudad de México por lo que se mencionan las disposiciones constitucionales legales federales y locales:

#### CPEUM

Artículo 41, V, apartado C:

Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
2. Educación cívica;
3. Preparación de la jornada electoral;
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



11. Las que determine la ley.

## LGIFE

### Artículo 104.

1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes materias:

- a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, establezca el Instituto;
- b) Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos;
- c) Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a los Candidatos Independientes, en la entidad;
- d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda, de paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral;
- e) Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales;
- f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral;
- g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto;
- h) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales y municipales;
- i) Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo;

j) Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la entidad de que se trate;

k) Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto;

l) Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se trate;

m) Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que emita el Instituto;

n) Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto;

ñ) Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate;

o) Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral;

p) Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral;

q) Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás disposiciones que emita el Consejo General, y

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente.

## CLCDMX

### ARTÍCULO 25, APARTADO A:

5. En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral de la Ciudad de México vigilará el cumplimiento y acreditación de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo, y será responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, de conformidad con lo que establezca la ley.

6. Esta Constitución reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, residentes a ser consultadas en los términos de esta Constitución y tratados internacionales.

### Artículo 26:

A. Gestión, evaluación y control de la función pública.

2. Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y accesible en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos, en los términos que establezca la ley.

3. Los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías están obligados a informar, consultar, realizar audiencias públicas deliberativas y rendir cuentas ante las personas y sus comunidades sobre la administración de los recursos y la elaboración de las políticas públicas.

### Artículo 46:

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



## A. Naturaleza jurídico-política

Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Estos serán:

- a) Consejo de Evaluación de la Ciudad de México;
- b) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;
- c) Fiscalía General de Justicia;
- d) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
- e) Instituto Electoral de la Ciudad de México;
- f) Instituto de Defensoría Pública; y
- g) Tribunal Electoral de la Ciudad de México

## B. Disposiciones comunes

1. Los organismos autónomos ajustarán sus actuaciones a los principios reconocidos en el derecho a la buena administración, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones. Contarán con estatutos jurídicos que lo garanticen. Las leyes y estatutos jurídicos garantizarán que exista equidad de género en sus órganos de gobierno. Tendrán facultad para establecer su normatividad interna, presentar iniciativas de reforma legal o constitucional local en la materia de su competencia, así como las demás que determinen esta Constitución y las leyes de la materia.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."





## Artículo 50

1. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía, son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.
2. Este Instituto contará con un órgano superior de dirección, integrado por una persona Consejera o Consejero Presidente y seis personas Consejeras Electorales, con derecho a voz y voto, designadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se integrará con un Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o local, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. Participarán también como invitadas e invitados permanentes a las sesiones del Consejo, sólo con derecho a voz, una o un diputado de cada grupo parlamentario del Congreso de la Ciudad.
3. En el ejercicio de esta función, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.
4. El Instituto Electoral de la Ciudad de México ejercerá las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes de la materia.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

## CIPE

**Artículo 30.** El Instituto Nacional y el Instituto Electoral son las autoridades electorales depositarias de la función estatal de organizar las elecciones locales en la



Ciudad de México; asimismo, el Tribunal Electoral es el órgano jurisdiccional especializado para la solución de controversias en esta materia, cuyas competencias se establecen en la Constitución Federal, las Leyes Generales, la Constitución Local, la Ley Procesal, este Código y demás leyes aplicables a cada caso en concreto.

**Artículo 31.** El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, son órganos de carácter permanente y profesionales en su desempeño, gozan de autonomía presupuestal en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y este Código.

**Artículo 32.** El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y su domicilio estará en la Ciudad de México. Su patrimonio es inembargable y se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto, las partidas del presupuesto que anualmente apruebe el Congreso de la Ciudad de México y demás ingresos que reciban de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Presupuesto. En ningún caso, podrán recibir donaciones de particulares. Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos no formarán parte del patrimonio del Instituto, por lo que éste no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten conforme al presente Código.

**Artículo 33.** El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral se rigen para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, las leyes generales de la materia, la Constitución Local, la Ley Procesal y este Código. Asimismo, sin vulnerar su autonomía, les son de observancia obligatoria las disposiciones relativas de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; por lo que su presupuesto, ejercicio del gasto y manejo administrativo deberá sujetarse a los principios de racionalidad, austeridad, transparencia, eficacia y rendición de cuentas.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



**Artículo 34.** Para el debido cumplimiento de sus funciones y de acuerdo con su ámbito de competencia, establecido en la Constitución Federal, Leyes Generales, la Constitución Local y este Código, el Instituto Electoral debe:

- I. Observar los principios rectores de la función electoral.
- II. Velar por la estricta observancia y cumplimiento de las disposiciones electorales, debiendo sancionar en el ámbito de sus atribuciones cualquier violación a las mismas;
- y
- III. Limitar su intervención en los asuntos internos de los partidos políticos, conforme lo dictan las normas aplicables.

**Artículo 35.** Las autoridades electorales podrán requerir el apoyo y colaboración de los órganos de gobierno y autónomos de la Ciudad de México, así como de las autoridades federales, estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, para lo cual se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable.

**Artículo 36.** A través del Instituto Electoral se realiza la organización, el desarrollo y la vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y de las alcaldías en la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana; también tendrá a su cargo el diseño y la implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.

En el ejercicio de esta función, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, de acuerdo con lo previsto en las Leyes Generales, este Código y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, incorporando como principios rectores la racionalidad, austeridad, eficacia, eficiencia, economía y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público; por lo que sus fines y acciones se orientan

a:

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



- I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática; II. Fortalecer el régimen de asociaciones políticas;
- III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
- IV. Garantizar la celebración periódica, auténtica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, al Jefe de Gobierno y de las Alcaldías;
- V. Garantizar el principio de paridad de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral;
- VI. Garantizar la realización de los procesos electivos de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación;
- VII. Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio;
- VIII. Promover el voto, la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía;
- IX. Difundir la cultura cívica democrática y de la participación ciudadana; y
- X. Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, en su ámbito de atribuciones;
- XI. Impulsará la democracia digital abierta, basada en tecnologías de información y comunicación. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al Instituto Electoral, a los partidos políticos y sus candidatos, en los términos que establezca el Instituto Nacional. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad de género, perspectiva intercultural, igualdad y no discriminación, y se realizarán con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

Adicionalmente a sus fines el Instituto Electoral tendrá a su cargo las atribuciones siguientes:

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



- a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General, el Reglamento de Elecciones, establezca el Instituto Nacional;
- b) Reconocer y garantizar los derechos, el acceso a las prerrogativas y la ministración oportuna del financiamiento público a los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular en la Ciudad de México;
- c) Registrar a los Partidos Políticos locales y cancelar su registro cuando no obtengan el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones de la Ciudad de México en las que participen, así como proporcionar esta información al Instituto Nacional para las anotaciones en el libro respectivo;
- d) Desarrollar e implementar, las estrategias, los programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y construcción de ciudadanía en la Ciudad de México aprobados por su Consejo General, así como suscribir convenios en esta materia con el Instituto Nacional y demás entes que tengan interés en fomentarlas; Asimismo, establecer el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar en la observación electoral y en los procesos de participación ciudadana, así como en la toma de decisiones públicas que afecten su desarrollo y entorno.
- e) Orientar a los ciudadanos de la Ciudad de México para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales;
- f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral y determinará con base en los criterios de población y configuración geográfica, así como de identidad social, cultural, étnica y económica las circunscripciones en las demarcaciones territoriales;
- g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales que se utilizarán en los procesos electorales locales, en términos del Reglamento de Elecciones y demás lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional;

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



- h) Verificar que las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales en la Ciudad de México cumplan con los lineamientos que emita el Instituto Nacional;
- i) Garantizar el derecho de la ciudadanía a realizar labores de observación electoral en la Ciudad de México, de acuerdo al Reglamento de Elecciones y demás lineamientos que emita el Instituto Nacional;
- j) Garantizar el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar en la observación electoral y en la toma de las decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de su interés;
- k) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones de Jefatura de Gobierno, alcaldías, concejales, y diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos;
- l) Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral local, de conformidad con el Reglamento de Elecciones y demás lineamientos que emita el Instituto Nacional;
- m) Implementar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones de la Ciudad de México, de conformidad con el Reglamento de Elecciones y demás lineamientos que emita el Instituto Nacional;
- n) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones y emitir la declaración de validez y el otorgamiento de constancias de mayoría en las elecciones de Jefe de Gobierno, alcaldías, concejales y diputaciones del Congreso de la Ciudad de México;
- ñ) Fiscalizar el origen, monto y destino de los recursos erogados por las agrupaciones políticas locales y las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político local.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



- o) Asignar a las diputaciones electas del Congreso de la Ciudad de México y los concejales electos en cada alcaldía, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señale este Código;
- p) Garantizar la realización, difusión y conclusión de los procesos electivos de los órganos de representación ciudadana, así como de los mecanismos de participación ciudadana y la consulta sobre el presupuesto participativo conforme a la Ley de Participación.
- q) Convenir con el Instituto Nacional para que éste asuma la organización integral de los procesos electorales de la Ciudad de México, en los términos que establezcan las leyes respectivas.
- r) Realizar campañas de difusión en diversos medios de comunicación y redes sociales, que explique la figura de candidatos sin partido y el procedimiento para recabar el apoyo ciudadano previo y durante el periodo de recolección de éste.
- s) Determinar el uso parcial o total de sistemas de votación electrónica en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana para recibir y computar la votación de la ciudadanía de la Ciudad de México, incluyendo la residente en el extranjero, con base en las medidas de certeza y seguridad que estime pertinentes y, en su caso, en los parámetros que para los procesos electorales establezca la Ley General y el Instituto Nacional a través de sus acuerdos.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

Además, en los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral, además, vigilará y ejecutará el cumplimiento, acreditación de los requisitos, organización, desarrollo, publicación y validación de los resultados derivados de los mismos.

Por otra parte, el Instituto Electoral, promoverá y velará por el cumplimiento de otros mecanismos de participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación, como la colaboración ciudadana, la rendición de cuentas, la difusión pública, la red de



contralorías ciudadanas, la audiencia pública, los recorridos de la o el Alcalde y las o los concejales, las organizaciones ciudadanas, las asambleas ciudadanas, así como los observatorios ciudadanos, los comités y comisiones ciudadanas temáticas, la silla ciudadana y el presupuesto participativo.

Las atribuciones del Instituto Nacional que, en su caso, se deleguen por disposición legal o por acuerdo de su Consejo General, consistentes en:

- a) Fiscalizar los ingresos y egresos de los Partidos Políticos y candidatos;
- b) Impartir la capacitación electoral y designar a los funcionarios de las Mesas Directivas.
- c) Ubicar las casillas electorales;
- d) Determinar la geografía electoral, así como el diseñar y determinar los distritos electorales y la división del territorio de la Ciudad de México en secciones electorales;
- e) Elaborar el Padrón y la lista de electores de la Ciudad de México; y
- f) Aplicar las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales.

Las atribuciones adicionales para:

- a) Aplicar dentro del ámbito de su competencia, las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el Instituto Nacional;
- b) Organizar los mecanismos de participación ciudadana de la Ciudad de México;
- c) Organizar la elección de los dirigentes de los Partidos Políticos locales, cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la legislación local de la materia;

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."





- d) Llevar a cabo el registro las candidaturas, de convenios y gobiernos de Coalición, fusión y otras formas de participación o asociación para los procesos electorales de la Ciudad de México;
- e) Establecer las bases y criterios a fin de brindar atención e información a las y los visitantes extranjeros interesados en conocer el desarrollo de los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana, en cualquiera de sus etapas;
- f) Llevar la estadística electoral local y de los mecanismos de participación ciudadana, así como darla a conocer concluidos los procesos;
- g) Colaborar con el Instituto Nacional para implementar los programas del personal de carrera que labore en el Instituto Electoral, de conformidad con el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional.
- h) Elaborar, aprobar e implementar los programas del personal de la rama administrativa del Instituto;
- i) Elaborar y difundir materiales y publicaciones institucionales relacionadas con sus funciones;
- j) Conocer del registro y pérdida de registro de las agrupaciones políticas locales;
- k) Sustanciar y resolver los procedimientos ordinarios sancionadores que se instauren por faltas cometidas dentro o fuera de los procesos electorales, en términos de la ley local de la materia;
- l) Tramitar los procedimientos especiales sancionadores, integrar los expedientes de los mismos y remitirlos al Tribunal Electoral para su resolución, y sustanciar los procedimientos especiales sancionadores, en términos de la ley local de la materia;
- m) Remitir al Instituto Nacional las impugnaciones que reciba en contra de actos realizados por ese instituto relacionados con los procesos electorales de la Ciudad de México, para su resolución por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conforme lo determina la Constitución Federal y las leyes generales de la materia;

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



- n) Aplicar las sanciones a los Partidos Políticos por el incumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a información pública y protección de datos personales, conforme a lo establecido en este Código;
- ñ) Implementar los programas de capacitación educación cívica y construcción de ciudadanía a los órganos de representación ciudadana en la Ciudad de México;
- o) Celebrar convenios de apoyo, colaboración y coordinación con el Instituto Nacional y demás entes públicos federales y locales para la realización de diversas actividades relacionadas con sus atribuciones;
- p) Ejercer la función de oficialía electoral; y
- q) Difundir durante los procesos electorales en los tiempos del Estado que le corresponden y que sean de mayor audiencia, promocionales que vayan encaminados a incentivar el voto, en donde se resalte la secrecía y la libertad para ejercerlo, así como las restricciones relativas a la compra o coacción del voto. r) Las demás atribuciones que establezcan, la Constitución Local y las leyes locales no reservadas expresamente al Instituto Nacional.

**Artículo 44.** Durante el periodo de su encargo, los Consejeros Electorales deberán acatar las prescripciones siguientes:

- I. Desempeñar su función con autonomía, probidad e imparcialidad;
- II. Recibir la retribución y prestaciones señaladas en el Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral. Su remuneración será similar a la de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;
- III. No podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo, cargo o comisión de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México o de particulares, salvo los casos no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación, de beneficencia o periodísticas, así como las que deriven de su ejercicio de libertad de expresión;

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



IV. Podrán promover y divulgar la cultura democrática, dentro o fuera del Instituto Electoral, observando los principios rectores de su actividad;

V. Guardar absoluta reserva sobre toda la información que reciban en función de su cargo, particularmente en materia de fiscalización y procedimientos sancionadores o de investigación, observando los principios de reserva y confidencialidad previstos en las Leyes en materia de transparencia y protección de datos personales.

VI. Observar los principios de reserva y confidencialidad previstos en las Leyes en materia de transparencia y protección de datos personales;

VII. Excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en que los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar un beneficio para las y los Consejeros Electorales, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que las y los Consejeros electorales o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

**Artículo 50.** Son atribuciones del Consejo General:

I. Implementar las acciones conducentes para que el Instituto Electoral pueda ejercer las atribuciones conferidas en la Constitución Federal, la Constitución Local, las Leyes Generales y el presente Código.

II. Aprobar, con base en la propuesta que le presenten los órganos competentes del Instituto Electoral, lo siguiente:

- a) El Reglamento Interior del Instituto Electoral;
- b) Las normas que sean necesarias para hacer operativas las disposiciones del Estatuto del Servicio Profesional Nacional, Reglamento de Elecciones y demás disposiciones que emanen de las leyes locales en la materia;
- c) Los reglamentos para el funcionamiento de la Junta Administrativa, sesiones del Consejo General, Comisiones, Comités y Consejos Distritales, integración y funcionamiento de los Consejos Distritales; liquidación de las Asociaciones Políticas;

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.".



trámite y sustanciación de quejas y procedimientos de investigación; y registro de partidos políticos locales y de organizaciones ciudadanas;

d) La normatividad y procedimientos referentes a la organización y desarrollo de los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana; así como para la elección de los dirigentes de los partidos políticos locales, cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas. El Instituto promoverá el uso e implementación de instrumentos electrónicos o tecnológicos con el fin de fomentar la participación democrática de los ciudadanos, con base en las medidas de certeza y seguridad que estime pertinentes y, en su caso, en los parámetros que para los procesos electorales establezca la Ley General y el Instituto Nacional a través de sus acuerdos.

e) Los programas, materiales, estrategias, y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.

Dichas acciones deberán estar orientadas a promover la plena inclusión y participación social, y el ejercicio de los derechos político-electorales. Así mismo, aprobará la normatividad relacionada con el empleo de sistemas e instrumentos tecnológicos de votación y voto de las ciudadanas y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero, en términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional;

f) La normatividad que mandata la legislación local en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, entre otras; y

g) Los acuerdos y la normativa que sea necesaria para el ejercicio de las funciones que le delegue el Instituto Nacional, para ello podrá administrativas necesarias para la delegación, atracción, asunción y reasunción de funciones, así como, en su caso, para auxiliar a la autoridad electoral nacional.

III. Presentar al Congreso de la Ciudad de México y en su caso al Congreso de la Unión, propuestas de reforma en materia electoral y de participación ciudadana en temas relativos a la Ciudad de México; El Instituto Electoral de la Ciudad de México expedirá

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



la normatividad relativa al procedimiento para el ejercicio de esta atribución la que contendrá, al menos, los siguientes aspectos:

- a) Funcionarios o instancias legitimados para promover.
- b) Presentación del anteproyecto y estructura del mismo.
- c) Turno del anteproyecto a la Comisión que corresponda en virtud del tema.
- d) Dictamen u observaciones al anteproyecto.
- e) En caso de dictamen favorable, turno a la Comisión de Normatividad y Transparencia para aprobar su remisión al Consejo General.
- f) En su caso, presentación del dictamen y proyecto de iniciativa al Consejo General.
- g) Aprobación por parte del Consejo General para remitir la iniciativa al Congreso de la Ciudad de México o al Congreso de la Unión, según corresponda.

IV. Designar a quien presida e integre las Comisiones Permanentes, Provisionales y Comités;

V. Crear Comisiones Provisionales y Comités para el adecuado funcionamiento del Instituto Electoral;

VI. Autorizar las licencias y resolver sobre la procedencia de las excusas de las Consejeras y los Consejeros Electorales;

VII. Aprobar, cada tres años, el Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral, con base en la propuesta que presente la respectiva Comisión Provisional y supervisar su cumplimiento;

VIII. Aprobar a más tardar el último día de octubre de cada año, los proyectos de Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual del Instituto Electoral que proponga el Consejero Presidente para el siguiente ejercicio fiscal; ordenando su remisión al Jefatura de Gobierno para que se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México; así como solicitar los recursos financieros que le permitan al Instituto Electoral cumplir con las funciones que le sean delegadas por el Instituto Nacional o por disposición legal;

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



Aprobar, en su caso, en enero de cada año el ajuste al Presupuesto de Egresos y al Programa Operativo Anual del Instituto Electoral, con base en la propuesta que le presente la Junta Administrativa, por conducto de su presidente;

X. Ordenar la realización de auditorías que se consideren necesarias a los órganos del Instituto Electoral;

XI. Nombrar, a propuesta del Consejero Presidente, de conformidad con los criterios y procedimientos establecidos en el Reglamento de Elecciones:

a) A las y los titulares de la Secretaría Ejecutiva, Secretaría Administrativa, Direcciones Ejecutivas por el voto de las dos terceras partes de las y los Consejeros Electorales; y

b) A las y los titulares de las Unidades Técnicas, por el voto de las dos terceras partes de las y los Consejeros Electorales;

c) Se deroga.

XII. Remover, por mayoría calificada del Consejo General a los titulares de la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas, y las Unidades Técnicas;

XIII. Conocer y opinar respecto a los Informes que deben rendir las Comisiones Permanentes y Provisionales, los Comités, la Junta Administrativa, el Consejero Presidente y los titulares de las Secretarías Ejecutiva y Administrativa;

XIV. Aprobar o rechazar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución que, respectivamente, propongan las Comisiones, los Comités, la Junta Administrativa, la presidencia del Consejo y las titularidades de las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, así como la Contraloría Interna y, en su caso, ordenar el engrose que corresponda;

XV. Requerir a través del Secretario del Consejo, informes específicos a las áreas del Instituto Electoral;

XVI. Resolver en los términos de este Código, sobre el otorgamiento o negativa de registro de Partido Político local, Agrupación Política o Candidatos sin partido. Y de la acreditación de los Partidos Políticos locales. XVII. Determinar el financiamiento público para los Partidos Políticos y Candidatos sin partido, en sus diversas modalidades;

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



- XVIII. Otorgar los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de las representaciones de los Partidos Políticos;
- XIX. Garantizar a los Partidos Políticos y las Candidaturas sin partido el ejercicio de sus derechos y asignación de las prerrogativas que les corresponden.
- XX. Vigilar que las Asociaciones Políticas y Candidaturas sin partido cumplan las obligaciones a que están sujetas, contenidas en este Código, la Ley General de Partidos Políticos, así como los Lineamientos que emita el Consejo General para que prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, incluyendo las obligaciones relativas al principio constitucional de paridad de género.
- XXI. Formular, en su caso, la propuesta de división del territorio de la Ciudad de México en Distritos Electorales uninominales locales y proponer, dentro de cada uno, el domicilio que les servirá de cabecera, para remitirlo a la consideración del Instituto Nacional.
- XXII. Formular la división de circunscripciones de las demarcaciones territoriales a efecto de establecer la representación de los Concejales por cada alcaldía, basada en lo establecido en las fracciones I, II y III del numeral 10, inciso A del artículo 53 de la Constitución Local, en criterios de configuración geográfica, así como de identidad social, cultural, étnica y económica, considerando niveles socioeconómicos de las colonias y pueblos originarios que las conformen.
- XXIII. Aprobar el marco geográfico para los procesos de participación ciudadana;
- XXIV. Designar para los procesos electorales a los Consejeros Distritales; XXV. Resolver sobre los convenios de Fusión, Frente, Coalición o Candidatura Común que celebren las asociaciones políticas;
- XXVI. Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral presenten los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos sin partido, así como el Convenio de Coalición de Gobierno, señalado en este Código
- XXVII. Aprobar previo cumplimiento de los requisitos legales, el registro de las candidaturas a Jefe de Gobierno y las listas de candidatos a Diputados de

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



representación proporcional y, en forma supletoria, a los candidatos a Diputados de mayoría relativa y a Alcaldes;

XXVIII. Determinar los topes máximos de gastos de campaña y precampaña; XXIX. Aprobar el formato de boleta electoral impresa que será utilizada por la ciudadanía residente en el extranjero para la elección de la Jefatura de Gobierno, los formatos de las actas para escrutinio y cómputo y los demás documentos y materiales electorales; así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Instituto Nacional para la recepción del voto. En general, proveer lo necesario para su cumplimiento.

En caso de que se instrumente el voto electrónico, aprobar el modelo de boleta electoral electrónica, documentación, instructivos, herramientas y materiales que se requieran para el ejercicio del voto electrónico.

XXX. En su caso, autorizar el uso parcial o total de sistemas e instrumentos en los procesos electorales y de participación ciudadana, con base en la propuesta que le presente la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística;

XXXI. Aprobar, en coordinación con el Consejo General del Instituto Nacional para la asunción de la organización integral, el formato de boleta electoral impresa, boleta electoral electrónica, que será utilizada por los ciudadanos residentes en el extranjero para la elección de la Jefatura de Gobierno, así como el instructivo para su uso, las herramientas y materiales que se requieran para el ejercicio del voto electrónico, los formatos de las actas para escrutinio y cómputo y los demás documentos y materiales electorales; así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Instituto Nacional para la recepción del voto de los ciudadanos residentes en el extranjero. En general, proveer lo necesario para su cumplimiento. Para los efectos del párrafo anterior, se podrán celebrar convenios con autoridades federales, instituciones académicas, así como con organizaciones civiles para la promoción del voto;

XXXII. Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto Nacional en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales,

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."





que deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo cada tipo de estudios en la Ciudad de México;

XXXIII. Determinar la viabilidad de realizar conteos rápidos y ordenar su realización con base en las actas de escrutinio y cómputo de casilla, a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, tratándose de las elecciones de Diputaciones al Congreso Local y de Alcaldías. Será obligatoria su realización en el caso de la elección de Jefatura de Gobierno.

XXXIV. Efectuar el cómputo total de las elecciones de la Jefatura de Gobierno, Diputaciones de representación proporcional, Alcaldías y Concejales de representación proporcional, así como otorgar las constancias respectivas;

XXXV. Emitir los acuerdos generales, y realizar el cómputo total de los procesos de participación ciudadana, conforme a lo previsto en la normatividad de la materia;

XXXVI. Aprobar los informes anuales sobre la evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos y barrios originarios, y ordenar su remisión al Congreso de la Ciudad de México y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, conforme a lo previsto en la normatividad de la materia;

XXXVII. Vigilar el cumplimiento de las reglas sobre el uso, características y colocación de propaganda electoral, así como su oportuno retiro; Ordenar, a solicitud de los Partidos Políticos, Coaliciones o Candidatos sin partido, la investigación de hechos que afecten de modo relevante los derechos de los Partidos Políticos, Coaliciones o Candidatos sin partido en los procesos electorales, conforme a lo establecido en la Ley General y este Código;

XXXIX. Sancionar las infracciones en materia administrativa electoral;

XL. Emitir la declaratoria de pérdida de registro de Partido Político local o Agrupación Política local;

XLI. Aprobar las bases y lineamientos para el registro de Organizaciones Ciudadanas, conforme a lo establecido en la Ley de Participación;

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



XLII. Aprobar el Programa Anual de Auditoría que presente la persona titular de la Contraloría Interna;

XLIII. Aprobar, en su caso, por mayoría de votos, la solicitud al Instituto Nacional para que asuma la organización integral, total o parcial del proceso electoral respectivo, conforme a lo establecido en la Ley General;

XLIV. Solicitar al Instituto Nacional atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia del Instituto Electoral, cuando su trascendencia así lo determine o para sentar un criterio de interpretación, en términos del Inciso c) del Apartado C, de la base V del artículo 41 de la Constitución Federal;

XLV. Instruir el ejercicio de las facultades delegadas por el Consejo General del Instituto Nacional sujetándose a lo previsto por la Ley General, la Ley de Partidos, los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que se emitan;

XLVI. Para promover los juicios constitucionales a que se refiere el artículo 36, Apartado C, numerales 1, 2 y 3 de la Constitución Local, en los asuntos de su competencia y en los términos, plazos y procedimientos que establezca la ley de la materia.

XLVII. Establecer los términos en los que el Instituto Electoral deberá asumir y desarrollar las funciones de fiscalización que sean delegadas por el Instituto Nacional, observando los lineamientos que a efecto emita la referida autoridad nacional.

XLVIII. Resolver el Recurso de Inconformidad del Procedimiento Laboral Disciplinario de los integrantes del Servicio Profesional Electoral; y

XLIX. Desempeñar las atribuciones que le confiere el Estatuto del Servicio en relación a la gestión del Servicio Profesional Electoral Nacional. L. Designar al área u órgano del Instituto Electoral que fungirá como Órgano de Enlace para asuntos del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como al funcionario que fungirá como autoridad instructora para efectos del Procedimiento Laboral Disciplinario previsto en el Estatuto del Servicio;

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



LI. Aprobar a propuesta de la Junta Administrativa, la estructura orgánica del Instituto Electoral, conforme a las previsiones generales de este Código, las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal, y

LII. Las demás señaladas en este Código.

Por lo anterior si una autoridad diversa, partido político, poder o inclusive una persona que integra la misma autoridad electoral no se puede obstruir la actividad electoral porque se vería afectada en primer término las actividades que esta obligada a realizar y como consecuencia se encontraría mermada la autonomía de gestión.

En ese sentido, las reformas realizadas por un órgano externo como lo es el Congreso de la Ciudad de México con la reforma y derogación que realiza al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales que se recurre han fragmentado la autonomía del Instituto Electoral de la Ciudad de México por lo que se ha llegado a desnaturalizar la composición jurídica y reconocida a los órganos autónomos, por lo que corresponde al máximo órgano jurisdiccional del país impedir que se afecte la división de poderes que se ha dado el país mexicano, declarando la invalidez de la reforma que agrede a las tareas encomendadas al Instituto Electoral de la Ciudad de México.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

## SEGUNDO.

**CONCEPTO DE INVALIDEZ.-** Lo constituye el decreto que deroga el párrafo segundo del artículo 98, así como las fracciones V, VII y IX del artículo 59 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (CIPE) consistente en la eliminación de la facultad del Consejo General para crear unidades técnicas adicionales para el adecuado funcionamiento y logro de los fines del Instituto y la eliminación de tres comisiones permanentes (Igualdad de Género y Derechos Humanos, Fiscalización y Vinculación con Organismos Externos).



**PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS.** Artículos 1, 16, 41, párrafo primero, base V, y Apartado C; 122, fracción VII en concordancia con el artículo 116, fracción IV, inciso b), y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, Apartados A, inciso e) y B numeral 1, 29, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México y los artículos 31, 33 y 36 párrafo tercero del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

**CONSIDERACIONES JURÍDICAS.** - Esta reforma electoral tiene como principal fin eliminar la facultad del Instituto Electoral para crear Unidades Técnicas y para desaparecer cinco áreas especializadas del Instituto.

Afectará a la ciudadanía, a los partidos políticos, a las organizaciones ciudadanas y en general a la vida democrática en la Ciudad.

Desaparecen las áreas de Igualdad de Género y Derechos Humanos (IGyDH), Vinculación con Organismos Externos (VOE); Archivo, Logística y Atención a los Órganos Desconcentrados (ALyAOD); Fiscalización y Centro de Formación y Desarrollo (FyCFyD).

Adicionalmente, al eliminar las comisiones permanentes de estos ámbitos, se impediría el seguimiento de las y los consejeros e inclusive, de las representaciones partidistas, un tramo de control democrático fundamental.

A nivel global, expertas y expertos coinciden en las cinco condiciones mínimas que una reforma electoral debe cumplir para ser viable<sup>6</sup>:

1. **Solucionar** un problema, analizar los alcances y efectos, esto es, evaluar desde las garantías para cuidar nuestra democracia sustantiva.

<sup>6</sup> Foro Internacional en defensa del INE y la democracia, minuto 1:00:018  
<https://www.youtube.com/watch?v=8taMFs9couU&t=4041s>

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



- 2. Generar un **consenso** mediante un debate abierto entre actores políticos y la ciudadanía.
- 3. Escuchar voces **expertas**, quienes den una opinión objetiva, crítica y técnica sobre las consecuencias previsibles de los cambios normativos.
- 4. Garantizar **integridad electoral** para comicios libres y competidos, y también para los procesos de participación ciudadana.
- 5. Fomentar la **credibilidad** con base en la función técnica que de espacios equitativos a los actores y garantice la participación ciudadana.

La eliminación de Comisiones Permanentes implica una violación a la autonomía de funciones y para no obviar en repeticiones, afectando la naturaleza autónoma del IECM, a su independencia respecto de otros órganos y a su facultad de auto organización para quedar de la forma siguiente:

Area absorbente	Area absorbida	Artículos Reformados
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas	Unidad Técnica de Fiscalización	<p><b>-Artículo 36</b>, numeral IV: Se descarta la Unidad Técnica Especializada de fiscalización y se menciona la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización.</p> <p><b>-Artículo 50</b>, apartado C: Se deroga, se le daba la atribución al Consejo General de nombrar a la o al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización de conformidad al procedimiento establecido.</p> <p><b>-Artículo 59</b>, numeral V: Se cambia la Comisión de fiscalización a quejas.</p> <p><b>-Artículo 60</b>: Cambia el nombre de la Comisión a "Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización" y con esto se deroga el apartado III y X, se agrega el X Bis con 6 nuevos apartados con atribuciones en materia de fiscalización que ahora llevará la nueva área.</p>

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."





## Partido de la Revolución Democrática

Area absorbente	Area absorbida	Artículos Reformados
		<p><b>-Artículo 64:</b> Desaparece la atribución de la Comisión de Fiscalización para lo referente al tema delegado por el Instituto Nacional.</p> <p><b>-Artículo 95:</b> Cambia el nombre de la Dirección a "Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización" Y se agregan las atribuciones en materia de fiscalización.</p> <p><b>-Artículo 102:</b> Se derogan los numerales referentes a la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.</p> <p><b>-Artículo 103:</b> Se modifica lo referente a la Contraloría Interna del Instituto.</p> <p><b>-Artículo 107:</b> Se modifican y derogan los numerales referentes a la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.</p> <p><b>-Artículo 108:</b> Se deroga. Materia de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.</p> <p><b>-Artículo 109:</b> Se deroga, sobre las atribuciones de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.</p> <p><b>-Artículo 251:</b> Sobre ante quién tienen dar cuenta las agrupaciones políticas locales, ahora sería a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización.</p> <p><b>-Artículo 265:</b> Se agrega el tema de fiscalización.</p> <p><b>-Artículo 273:</b> Sobre las obligaciones de los Partidos Políticos, se agrega la fiscalización al nombre de la dirección.</p> <p><b>-Artículo 348.</b> Se agrega al nombre, fiscalización y las atribuciones de la dirección.</p> <p><b>-Artículo 350:</b> Se modifican los numerales referentes a la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.</p>

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



Partido de la Revolución Democrática

Area absorbente	Area absorbida	Artículos Reformados
		<p>-<b>Artículo 351:</b> Se agrega al nombre, fiscalización y las atribuciones de la dirección.</p> <p>-<b>Artículo 352:</b> Se agrega al nombre, fiscalización y las atribuciones de la comisión.</p> <p>-<b>Artículo 353:</b> Se agrega al nombre, fiscalización y las atribuciones de la dirección.</p> <p>-<b>Artículo 383:</b> Se agrega al nombre, fiscalización y las atribuciones de la dirección.</p> <p>-<b>Artículo 406:</b> Se agrega al nombre, fiscalización y las atribuciones de la dirección.</p> <p>-<b>Artículo 408:</b> Se agrega al nombre, fiscalización y las atribuciones de la dirección.</p>
Secretaría Administrativa	Centro de formación y desarrollo	<p>-<b>Artículo 83:</b> Se deroga el apartado n sobre la evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos y se agregan atribuciones en materia de equidad, igualdad sustantiva, derechos humanos y en el numeral XVII se descarta la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.</p> <p>-<b>Artículo 88:</b> Se la da a la Secretaría Administrativa las atribuciones del Centro de Formación y desarrollo.</p> <p>-<b>Artículo 98:</b> Se deroga el numeral V respecto a las tareas de Formación y Desarrollo.</p> <p>-<b>Artículo 162:</b> Sobre a quién tienen que acudir los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, además de las obligaciones previstas en general para los servidores públicos del Instituto Electoral, ahora sería a la Secretaría Administrativa.</p>
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía	Unidad de Género y Derechos Humanos	<p>-<b>Artículo 59,</b> numeral IV: Se agrega género a la Comisión de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, numeral IX, se deroga desapareciendo la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos.</p>

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."





Area absorbente	Area absorbida	Articulos Reformados
		<p>- <b>Artículo 63:</b> Cambia el nombre de la Comisión a "Comisión de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana", se modifica el numeral IV, se agrega Género y Derechos Humanos al programa institucional de la dirección y se agregan 10 apartados de la a) a la j) sobre las atribuciones en materia de género.</p> <p>-<b>Artículo 67,</b> se incorpora el IV Bis, en el cual pasa a la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional el supervisar las acciones, competencia del Instituto relativas a la difusión, promoción y formación en materia de Derechos Humanos y género, dirigidas a los miembros del Servicio Profesional Electoral.</p> <p>- <b>Artículo 68</b> en materia de atribuciones de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, <b>se deroga.</b></p> <p>-<b>Artículo 94:</b> Cambia el nombre de la dirección a "Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana" y se agregan las atribuciones en materia de género y derechos humanos.</p>
Secretaría Ejecutiva	Unidad de Vinculación con Organismos Externos	<p>-<b>Artículo 59,</b> numeral VII: Se deroga, dejando inexistente a la Comisión de Vinculación con Organismos Externos.</p> <p>-<b>Artículo 65,</b> en materia de atribuciones de la Comisión de Vinculación con Organismos Externos, <b>se deroga.</b></p> <p><b>Artículo 84:</b> Se deroga la atribución de la Secretaría Ejecutiva para el seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad Electoral a través de la Oficina de Gestión de Calidad.</p> <p>-<b>Artículo 86:</b> en materia de vinculación será a través de la Secretaría Administrativa el seguimiento y se agregan 3 apartados sobre atribuciones en materia de vinculación con Organismos Externos.</p>

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."







Área absorbente	Área absorbida	Artículos Reformados
		<b>-Artículo 98:</b> Se deroga el numeral sobre las tareas de Vinculación con Organismos Externos.
	Unidad Técnica de Archivo, Logística y Atención a Órganos Desconcentrados	<b>-Artículo 98:</b> Se deroga el numeral III en materia de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados.

Eliminar comisiones permanentes, implica eliminar la supervisión para el adecuado desarrollo de las actividades (funciones) especializadas de los órganos ejecutivos y técnicos del IECM.

**CIPE.**

Artículo 52. Para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Electoral, el Consejo General cuenta con el auxilio de Comisiones de carácter permanente y provisional.

Las funciones que venían desarrollando tres de las cinco Unidades Técnicas desaparecidas con esta reforma, solo se trasladaron a cuatro órganos ejecutivos del Instituto. Esto implica que tendrá que seguir existiendo deliberación, opinión o propuesta por parte de las personas consejeras y los partidos políticos en estos temas (salvo en los temas de fiscalización).

Las Comisiones no implican la existencia de una estructura burocrática distinta a la ya existente. Si bien son instancias colegiadas (integradas por tres Consejeras y Consejeros, representantes de partidos políticos—salvo en la ahora comisión de asociaciones políticas y fiscalización—y una secretaría técnica), esto no implica la existencia de una estructura distinta a la existente, puesto que sus trabajos, actividades y organización se realiza con el apoyo y colaboración de los órganos ejecutivos y técnicos del propio Instituto.

**CIPE**

Artículo 53. Las Comisiones son instancias colegiadas con facultades de deliberación, opinión y propuesta. Se integrarán por Consejera o Consejero Presidente y dos Consejeras o Consejeros Electorales bajo el principio de paridad de género, contando con derecho a voz y voto; y serán integrantes con derecho a voz las y los representantes de los partidos políticos y Candidatos sin partido, a partir de su registro y exclusivamente durante el proceso electoral, con excepción de las Comisiones de Asociaciones Políticas y Fiscalización, y no conformarán quórum. La presidencia de cada una de las Comisiones se determinará por acuerdo del Consejo General.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



## Partido de la Revolución Democrática

Contarán con un Secretario Técnico sólo con derecho a voz, designado por sus integrantes a propuesta de su Presidente y tendrán el apoyo y colaboración de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Electoral.

Los Consejeros Electorales y los titulares de los Órganos Ejecutivos y Técnicos deben asistir personalmente a las sesiones de las Comisiones a que sean convocados.

Por tanto, es falsa la premisa de que la eliminación de esas tres comisiones permanentes, sean para optimizar competencias, por el contrario, esta medida hará que la distribución del trabajo de supervisión de las y los consejeros esté distribuida entre menos integrantes, rompiendo así con la naturaleza de los órganos colegiados y que es, distribuir equitativamente las cargas laborales para su mejor atención, análisis, discusión y aprobación.

Artículo 58. Las Comisiones Permanentes tienen facultad para, en el ámbito de su respectiva competencia, supervisar el cumplimiento de acciones y ejecución de proyectos a cargo de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Electoral, así como vigilar la realización de las tareas específicas que haya determinado el Consejo General.

Las Comisiones Permanentes tendrán la integración que apruebe el Consejo General para un periodo de dos años. Al concluir ese lapso, deberá sustituirse a quien asuma la Presidencia y a uno más que la integre.

Eliminar tres Comisiones Permanentes, resulta antinatura a la naturaleza de la colegiación en la composición de órganos del Estado, pues saturar de atribuciones y funciones en menos personas, merma el ejercicio de la función estatal en detrimento de la ciudadanía y sus derechos.

Razón por la cual, se deben **invalidar** la derogación de las fracciones V, VII y IX del artículo 59 del CIPE y demás relativos y aplicables al caso concreto.

### **VIOLACIÓN A LA AUTONOMÍA POR SOBRECARGA EN LA ESTRUCTURA DEL IECM Y LA AFECTACIÓN EN LA EFICACIA PARA EL EJERCIO DE SUS FUNCIONES (OBLIGACIONES) CONSTITUCIONALES.**

Mediante la reforma político-electoral del año 2014, el Congreso Federal estableció un sistema nacional para el ejercicio de la función electoral. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, base V de la Constitución Política de los Estados Unidos

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



Mexicanos, la organización de las elecciones se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales (OPLES).

Lo anterior implica la existencia de un ámbito normativo que distribuye atribuciones y competencias, las cuales deben realizarse coordinadamente entre el INE y los OPLES.

De conformidad con lo establecido por el Artículo 41, base V, Apartado B, al INE le corresponde realizar, tanto para procesos electorales federales y locales:

1. La capacitación electoral;
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales;
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y
7. Las demás que determine la ley.

Por su parte, la base V, Apartado C del artículo 41 de la Carta Magna, establece que, en las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, **estarán a cargo de organismos públicos locales** y ejercerán funciones en las siguientes materias:

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
2. Educación cívica;
3. Preparación de la jornada electoral;
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
8. Implementar y operar el programa de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los **mecanismos de participación ciudadana** que prevea la legislación local;
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y
11. Las que determine la ley.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



Las funciones estatales que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) debe ejercer, conforme a la Ley General, la Constitución Local y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México son las siguientes:

- La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio (artículo 6, numeral 1 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales LGIPE);
- Garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres (artículo 6, numeral 2 LGIPE);
- Cuando así lo soliciten los partidos políticos con registro local, organizar las elecciones de sus dirigencias (artículo 44, numeral 1, inciso ff);
- Oficialía electoral (artículo 98, numeral 3 LGIPE);
- Solicitar los tiempos de radio y televisión que se requieran para el cumplimiento de sus funciones (artículo 164, numeral 1 LGIPE);
- Votación de las personas residentes en el extranjero;
- La sustanciación de Procedimientos Administrativos Sancionadores;
- La fiscalización de las Agrupaciones Políticas Locales;

Todas esas atribuciones señaladas en la Constitución Federal y en la LGIPE, el poder constituyente de la Ciudad de México las aglutinó en tres grandes funciones conforme a lo que establece el artículo 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM):

1. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México;
2. Los procesos de participación ciudadana en la Ciudad; y
3. El diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.

Por su parte, de manera específica, el IECM, de conformidad a lo establecido en el artículo 36 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, realiza las siguientes funciones:

**Artículo 36.** A través del Instituto Electoral se realiza la organización, el desarrollo y la vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y de las alcaldías en la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana; también tendrá a su cargo el diseño y la implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.

En el ejercicio de esta función, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



## Partido de la Revolución Democrática

Gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones de acuerdo a lo previsto en las Leyes Generales, este Código y la Ley de Participación. Sus fines y acciones se orientan a:

- I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática;
- II. Fortalecer el régimen de asociaciones políticas;
- III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
- IV. Garantizar la celebración periódica, auténtica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, al Jefe de Gobierno y de las Alcaldías;
- V. Garantizar el principio de paridad de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral;
- VI. Garantizar la realización de los procesos electivos de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación;
- VII. Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio;
- VIII. Promover el voto, la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía; IX. Difundir la cultura cívica democrática y de la participación ciudadana; y
- X. Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, en su ámbito de atribuciones;
- XI. Impulsará la democracia digital abierta, basada en tecnologías de información y comunicación.

La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al Instituto Electoral, a los partidos políticos y sus candidatos, en los términos que establezca el Instituto Nacional.

Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad de género, perspectiva intercultural, igualdad y no discriminación, y se realizarán con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

Adicionalmente a sus fines el Instituto Electoral tendrá a su cargo las atribuciones siguientes:

- a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General, el Reglamento de Elecciones, establezca el Instituto Nacional;
- b) Reconocer y garantizar los derechos, el acceso a las prerrogativas y la ministración oportuna del financiamiento público a los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular en la Ciudad de México;
- c) Registrar a los Partidos Políticos locales y cancelar su registro cuando no obtengan el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones de la Ciudad de México en las que participen, así como proporcionar esta información al Instituto Nacional para las anotaciones en el libro respectivo;
- d) Desarrollar e implementar, las estrategias, los programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y construcción de ciudadanía en la Ciudad de México aprobados por su Consejo General, así como suscribir convenios en esta materia con el Instituto Nacional y demás entes que tengan interés en fomentarlas; Asimismo, establecer el derecho de las

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar en la observación electoral y en los procesos de participación ciudadana, así como en la toma de decisiones públicas que afecten su desarrollo y entorno.

e) Orientar a los ciudadanos de la Ciudad de México para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político electorales;

f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral y determinará con base en los criterios de población y configuración geográfica, así como de identidad social, cultural, étnica y económica las circunscripciones en las demarcaciones territoriales;

g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales que se utilizarán en los procesos electorales locales, en términos del Reglamento de Elecciones y demás lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional;

h) Verificar que las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales en la Ciudad de México cumplan con los lineamientos que emita el Instituto Nacional;

i) Garantizar el derecho de la ciudadanía a realizar labores de observación electoral en la Ciudad de México, de acuerdo al Reglamento de Elecciones y demás lineamientos que emita el Instituto Nacional;

j) Garantizar el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar en la observación electoral y en la toma de las decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de su interés;

k) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones de Jefatura de Gobierno, alcaldías, concejales, y diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos;

l) Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral local, de conformidad con el Reglamento de Elecciones y demás lineamientos que emita el Instituto Nacional;

m) Implementar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones de la Ciudad de México, de conformidad con el Reglamento de Elecciones y demás lineamientos que emita el Instituto Nacional;

n) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones y emitir la declaración de validez y el otorgamiento de constancias de mayoría en las elecciones de Jefe de Gobierno, alcaldías, concejales y diputaciones del Congreso de la Ciudad de México;

ñ) Fiscalizar el origen, monto y destino de los recursos erogados por las agrupaciones políticas locales y las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político local.

o) Asignar a las diputaciones electas del Congreso de la Ciudad de México y los concejales electos en cada alcaldía, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señale este Código;

p) Garantizar la realización, difusión y conclusión de los procesos electivos de los órganos de representación ciudadana, así como de los mecanismos de participación ciudadana y la consulta sobre el presupuesto participativo conforme a la Ley de Participación.

q) Convenir con el Instituto Nacional para que éste asuma la organización integral de los procesos electorales de la Ciudad de México, en los términos que establezcan las leyes respectivas.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



r) Realizar campañas de difusión en diversos medios de comunicación y redes sociales, que explique la figura de candidatos sin partido y el procedimiento para recabar el apoyo ciudadano previo y durante el periodo de recolección de éste.

s) Determinar el uso parcial o total de sistemas de votación electrónica en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana para recibir y computar la votación de la ciudadanía de la Ciudad de México, incluyendo la residente en el extranjero, con base en las medidas de certeza y seguridad que estime pertinentes y, en su caso, en los parámetros que para los procesos electorales establezca la Ley General y el Instituto Nacional a través de sus acuerdos.

Además, en los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral, además, vigilará y ejecutará el cumplimiento, acreditación de los requisitos, organización, desarrollo, publicación y validación de los resultados derivados de los mismos

Por otra parte, el Instituto Electoral, promoverá y velará por el cumplimiento de otros mecanismos de participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación, como la colaboración ciudadana, la rendición de cuentas, la difusión pública, la red de contralorías ciudadanas, la audiencia pública, los recorridos de la o el Alcalde y las o los concejales, las organizaciones ciudadanas, las asambleas ciudadanas, así como los observatorios ciudadanos, los comités y comisiones ciudadanas temáticas, la silla ciudadana y el presupuesto participativo.

Las atribuciones del Instituto Nacional que, en su caso, se deleguen por disposición legal o por acuerdo de su Consejo General, consistentes en:

- a) Fiscalizar los ingresos y egresos de los Partidos Políticos y candidatos;
- b) Impartir la capacitación electoral y designar a los funcionarios de las Mesas Directivas.
- c) Ubicar las casillas electorales;
- d) Determinar la geografía electoral, así como el diseñar y determinar los distritos electorales y la división del territorio de la Ciudad de México en secciones electorales;
- e) Elaborar el Padrón y la lista de electores de la Ciudad de México; y
- f) Aplicar las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales.

Las atribuciones adicionales para:

- a) Aplicar dentro del ámbito de su competencia, las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el Instituto Nacional;
- b) **Organizar los mecanismos de participación ciudadana de la Ciudad de México;**
- c) Organizar la elección de los dirigentes de los Partidos Políticos locales, cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la legislación local de la materia;
- d) Llevar a cabo el registro (sic) las candidaturas, de convenios y gobiernos de Coalición, fusión y otras formas de participación o asociación para los procesos electorales de la Ciudad de México;

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



- e) Establecer las bases y criterios a fin de brindar atención e información a las y los visitantes extranjeros interesados en conocer el desarrollo de los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana, en cualquiera de sus etapas;
- f) Llevar la estadística electoral local y de los mecanismos de participación ciudadana, así como darla a conocer concluidos los procesos;
- g) Colaborar con el Instituto Nacional para implementar los programas del personal de carrera que labore en el Instituto Electoral, de conformidad con el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional.
- h) Elaborar, aprobar e implementar los programas del personal de la rama administrativa del Instituto;
  - i) Elaborar y difundir materiales y publicaciones institucionales relacionadas con sus funciones;
  - j) Conocer del registro y pérdida de registro de las agrupaciones políticas locales;
  - k) Sustanciar y resolver los procedimientos ordinarios sancionadores que se instauren por faltas cometidas dentro o fuera de los procesos electorales, en términos de la ley local de la materia;
  - l) Tramitar los procedimientos especiales sancionadores, integrar los expedientes de los mismos y remitirlos al Tribunal Electoral para su resolución, y sustanciar los procedimientos especiales sancionadores, en términos de la ley local de la materia;
  - m) Remitir al Instituto Nacional las impugnaciones que reciba en contra de actos realizados por ese instituto relacionados con los procesos electorales de la Ciudad de México, para su resolución por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conforme lo determina la Constitución Federal y las leyes generales de la materia;
  - n) Aplicar las sanciones a los Partidos Políticos por el incumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a información pública y protección de datos personales, conforme a lo establecido en este Código;
  - ñ) Implementar los programas de capacitación educación cívica y construcción de ciudadanía a los órganos de representación ciudadana en la Ciudad de México;
  - o) Celebrar convenios de apoyo, colaboración y coordinación con el Instituto Nacional y demás entes públicos federales y locales para la realización de diversas actividades relacionadas con sus atribuciones;
  - p) Ejercer la función de oficialía electoral;
  - q) Difundir durante los procesos electorales en los tiempos del Estado que le corresponden y que sean de mayor audiencia, promocionales que vayan encaminados a incentivar el voto, en donde se resalte la secrecía y la libertad para ejercerlo, así como las restricciones relativas a la compra o coacción del voto.
  - r) Las demás atribuciones que establezcan, la Constitución Local y las leyes locales no reservadas expresamente al Instituto Nacional.

Ese cúmulo de obligaciones constituciones y legales, requiere la organización y distribución del trabajo en áreas y personal especializado para la adecuada atención de cada función.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."





La función electoral es tan amplia, especializada y compleja que la multidisciplinariedad es inherente a su ejercicio y por ello, el Constituyente le dotó a los OPLES de autonomía en su funcionamiento y reguló la obligación constitucional y legal de garantizar, no solo suficiencia presupuestaria, sino la facultad de auto organización para asegurar el cumplimiento eficiente de todas las atribuciones conferidas:

**LGIFE.**

Artículo 4.

1. El Instituto y los **Organismos Públicos Locales**, en el ámbito de su competencia, **dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de esta Ley.** (LGIFE)

Artículo 6.

(...)

3. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, **dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y de las demás dispuestas en esta Ley.**

Artículo 27.

(...)

2. El Instituto y los **Organismos Públicos Locales**, en el ámbito de sus respectivas competencias, **garantizarán la correcta aplicación de las normas correspondientes en cada entidad.**

Artículo 98.

1. Los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de **autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones**, en los términos previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

2. Los Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución, esta Ley y las leyes locales correspondientes.

El cumplimiento de todas las atribuciones y facultades (obligaciones constitucionales) no es un acto potestativo para una autoridad. Su carácter vinculante, la obliga a tener eficacia en el cumplimiento de la función estatal.

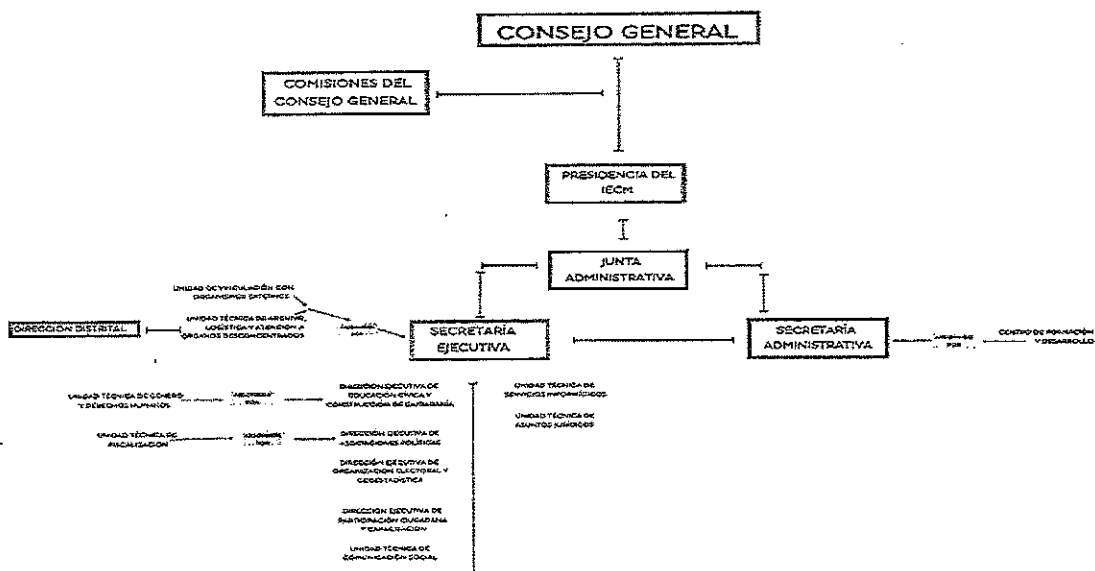
En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.”.



Hasta antes de la reforma que ahora se impugna, el IECM había tenido la capacidad de lograr el efecto que la Constitución Federal y la normatividad local le mandata.

Esto fue así, puesto que la estructura orgánica con la que contaba y la especialización de las personas funcionarias que hasta hoy la componen, generaban una distribución laboral adecuada para el cumplimiento de las funciones estatales encomendadas.

Con la reforma que ahora se impugna y derivado de que el legislador local decidió vulnerar la autonomía del IECM al eliminar cinco Unidades Técnicas (Vinculación con Organismos Externos, Igualdad de Género y Derechos Humanos, Fiscalización, Centro de Formación y Desarrollo y Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados) y trasladar todas sus funciones a cuatro Órganos Ejecutivos, lo único que provocará, será una sobre carga de trabajo y una pérdida en la especialización de las atribuciones que se ejercen, tal y como se demostrará más adelante.



"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

La sobre carga de trabajo operará en automático, puesto que la reforma, tanto en su articulado como en la exposición de motivos del dictamen que dio origen a la iniciativa, **prevé solamente una absorción de funciones** y el recorte del personal de las áreas absorbidas, lo cual, implica una violación directa a los artículos 37, párrafo primero y 38 del CIPE, al inmiscuirse en facultades que no le corresponden.





El dictamen que dio origen a la iniciativa establece, de manera explícita, que 105 plazas será afectadas (considerando noveno, párrafo tercero), lo cual, haría nugatoria la facultad de auto organización del IECM, por medio de la cual, el Consejo General, atendiendo a sus atribuciones y disponibilidad presupuestal, tendrá que aprobar la estructura orgánica y funcional de los cuatro órganos ejecutivos que absorberán las funciones de las unidades técnicas desaparecidas, por lo cual, dicha motivación de eliminación de 105 plazas<sup>7</sup>, debe ser **invalidada** y este órgano jurisdiccional, **deberá determinar**, en caso de que no invalide todas las disposiciones reformadas que ahora se impugnan, **que el IECM está facultado para reestructurar las áreas absorbentes e incluir más personal especializado para las nuevas funciones encomendadas**, de conformidad con lo dispuesto con los siguientes artículos del CIPE:

Artículo 37. El Instituto Electoral se integra conforme a la siguiente estructura **misma que podrá ser modificada de conformidad a las necesidades del propio Instituto y/o atribuciones de delegación que otorgue el Instituto Nacional Electoral:**

(...)

Artículo 38. Los Órganos Ejecutivos, Desconcentrados, Técnicos y con Autonomía de Gestión **tendrán la estructura orgánica y funcional que apruebe el Consejo General, atendiendo a sus atribuciones y la disponibilidad presupuestal del Instituto Electoral.** El Consejo General, en la normatividad interna, determinará las relaciones de subordinación, de colaboración y apoyo entre los órganos referidos.

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo General:

(...)

LI. **Aprobar a propuesta de la Junta Administrativa, la estructura orgánica del Instituto Electoral, conforme a las previsiones generales de este Código, las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal, y**

<sup>7</sup> Considerando noveno, párrafo tercero del dictamen que dio origen a la iniciativa que ahora se impugna.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



(...)

Artículo 80. Son atribuciones de la Junta Administrativa:

VIII. Someter a la aprobación del Consejo General, la propuesta de estructura orgánica del Instituto Electoral, conforme a las previsiones generales de este Código, el Estatuto del Servicio, las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal;

(...)

En el supuesto caso de que este órgano jurisdiccional determine que esta reforma no vulnera la autonomía, además de sentar el precedente peligroso de que con reformas legales se puede vulnerar la autonomía de los OPLES, la sobrecarga laboral, cuantitativa y cualitativa, que se generará en personas servidoras públicas no capacitadas para esas nuevas funciones especializadas, y derivado de una investigación de campo se desprendió lo siguiente:

CARGA LABORA CUANTITATIVA

Personal por área

Tabla 1.

ESTRUCTURA ACTUAL DEAP	ESTRUCTURA ACTUAL UTEF
1 Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas <sup>8</sup>	1Persona Titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.
1 Secretaría de Unidad	1 Secretaría de Unidad
1 Coordinador de Gestión	1 Auxiliar de Servicios
1 Asesor "B"	1 Asistente Administrativo
1 Auxiliar de servicios	1 Director de fiscalización
1 Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos	1 Subdirector de fiscalización
1 Asistente Administrativo	1 Jefe de departamento de análisis contable
1 Jefe de Unidad de prerrogativas y partidos políticos	1 Jefe de departamento de fiscalización a asociaciones políticas y asesoría
1 Jefe de Unidad de Prerrogativas y Partidos políticos I	4 analistas
1 Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos	
1 Jefe de departamento de Prerrogativas y Partidos Políticos II	
5 Analistas	

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

<sup>8</sup> La Dirección cuenta con el apoyo de un chofer



fb2338c085fa06486e5c2dc6f11f6bca82798a62b58e0fa5650affc5dd6a8



ESTRUCTURA ACTUAL DEAP	ESTRUCTURA ACTUAL UTEF
1 Jefe de departamento de prerrogativas y partidos políticos III 1 Jefe de departamento de prerrogativas y partidos políticos IV 1 Director de quejas 1 Asistente Administrativo 1 Subdirector de sustanciación 1 Jefe de departamento de sustanciación 4 Proyectistas 1 subdirector de resolución y dictaminación 1 Jefe de departamento de resolución y dictaminación	
Total: 28 personas	Total: 12 personas

De las 29 personas que se contabilizan en las plazas de la estructura actual en la Dirección de Asociaciones Políticas (DEAP), 28 personas son las que ejecutan las funciones operativas de la Dirección. Por lo tanto, las 28 personas que actualmente trabajan en la DEAP tendrían que realizar las atribuciones que actualmente realizan 12 personas en la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF).

Tabla 2.

ESTRUCTURA ACTUAL DEEGyCC	ESTRUCTURA ACTUAL UTGyDH
1 Director Ejecutivo de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía <sup>9</sup> 1 Coordinador de Gestión 1 Secretaría de Unidad 1 Auxiliar de servicios 1 Coordinador editorial 1 Jefe de departamento de diseño y edición 3 Analistas diseñadores 3 Analistas correctores de estilo 1 Coordinador de educación cívica 1 Asistente administrativo 1 Jefa de unidad de educación cívica I	1 Titular de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos 1 Analista administrativo 1 Secretaría de Unidad 1 Auxiliar de servicios 1 Directora de evaluación en derechos humanos 1 Subdirección de evaluación en derechos humanos 1 Jefe de departamento para el fortalecimiento de los derechos humanos 2 Analistas

<sup>9</sup> La dirección cuenta con el apoyo de un chofer.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."





ESTRUCTURA ACTUAL DEECyCC	ESTRUCTURA ACTUAL UTGyDH
1 Jefe de departamento de educación cívica I	1 Jefe de departamento de evaluación de políticas para el fomento de liderazgos no convencionales
10 Analistas educadores	1 Directora de implementación de políticas de género
1 Jefe de departamento de educación cívica II	1 Subdirectora de implementación de políticas de igualdad
1 Técnico en educación cívica	1 Jefe departamento de implementación de políticas para la igualdad
1 Jefe de departamento de educación cívica III	1 Subdirección de transversalidad de políticas de género
1 Técnica en educación cívica	1 Jefe de departamento de transversalidad de políticas de género
1 Jefe de unidad de educación cívica II	
1 Jefe de departamento de educación cívica IV	
1 Técnico en educación cívica	
1 Jefe de departamento de educación cívica V	
1 Técnico en educación cívica	
Total: 35 personas	Total: 15 personas

Actualmente la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía (DEECyCC) se integra con 36 personas, de las cuales, 35 personas realizan funciones operativas, mientras que la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos se conforma con 15 personas que realizan funciones operativas, es decir, la Unidad de Género realiza funciones especializadas con casi la mitad de las personas que actualmente están en la DEECyCC.

Tabla 3.

ESTRUCTURA ACTUAL DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	ESTRUCTURA ACTUAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO
1 Persona titular de la Secretaría <sup>10</sup>	1 Titular de Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo
1 Coordinador de gestión	1 Auxiliar de servicios
1 Asesor "c"	1 Secretaría de Unidad
1 Asistente administrativo	1 Analista administrativo
1 Director de planeación y recursos financieros	1 Director de reclutamiento y selección
1 Asistente administrativo	1 Subdirector de reclutamiento y selección
1 Jefe de departamento de evaluación y seguimiento	1 Jefe de departamento de ingreso
1 Subdirector de programación y presupuesto	

<sup>10</sup> La Secretaría Administrativa cuenta con el apoyo de las siguientes plazas: 7 choferes, 1 enfermera, 7 personas auxiliares de servicios y 10 personas auxiliares de servicio de mantenimiento.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



<b>ESTRUCTURA ACTUAL DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</b>	<b>ESTRUCTURA ACTUAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO</b>
<p>1 Jefe de departamento de trámites y pagos</p> <p>1 Jefe de departamento de contabilidad presupuestal</p> <p>1 Jefe de departamento de planeación y prospectiva</p> <p>1 Subdirector de contabilidad</p> <p>1 Jefe de departamento de registro contable</p> <p>1 Jefe de departamento de análisis e información contable</p> <p>1 Director de adquisiciones, control patrimonial y servicios</p> <p>1 Asistente administrativo</p> <p>1 Recepcionista</p> <p>1 Recepcionista</p> <p>1 Jefe de departamento de seguridad y protección civil</p> <p>1 Subdirector de adquisiciones</p> <p>1 Jefe de departamento de control e integración de procedimientos</p> <p>1 Jefe de departamento de investigación, análisis y selección de mercado</p> <p>1 Subdirector de patrimonio institucional</p> <p>1 Jefe de departamento de control patrimonial</p> <p>1 Jefe de departamento de mantenimiento y servicios</p> <p>1 Coordinador de recursos humanos auxiliar de servicios</p> <p>1 Jefe de departamento de servicios Médicos</p> <p>Enfermera</p> <p>1 Jefe de departamento de administración de personal</p> <p>22 Analistas</p> <p>1 Jefe de departamento de relaciones laborales</p> <p>1 Jefe de departamento de registro e incorporación</p>	<p>1 Jefe de departamento de control y registro</p> <p>1 Jefe de departamento de promoción e incentivos</p> <p>1 Directora de capacitación y evaluación</p> <p>1 Subdirector de capacitación y evaluación del desempeño</p> <p>1 Jefe de departamento de gestión y seguimiento</p> <p>1 Jefe de departamento de tecnologías educativas</p> <p>1 Jefe de departamento de diseño pedagógico</p> <p>1 Jefa de departamento de evaluación del desempeño</p> <p>7 Analistas.</p>
Total: 52 personas	Total: 22 personas

En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.”



La Secretaría Administrativa tiene en su estructura a 77 personas, de las cuales, sólo 52 personas realizan funciones operativas, mientras que el Centro de Formación y Desarrollo cuenta con 22 personas para realizar sus funciones de capacitación. Con la reestructura, la Secretaría Administrativa además de gestionar los recursos del Instituto, incluyendo el pago de nómina tendría que realizar tareas de capacitación.

Tabla 4.

ESTRUCTURA ACTUAL SE	ESTRUCTURA ACTUAL UTVOE	ESTRUCTURA ACTUAL UTALAOD
1 persona titular de la SE <sup>11</sup> 1 Oficina de gestión de calidad 1 Oficina de Acceso a la Información Pública 1 Oficialía Electoral y de Partes 3 Auxiliares de servicios 5 Asesorías 1 Coordinación de Asesores 3 Subdirecciones 9 Departamentos 10 Analistas Total: 35 personas	1 Titular de Unidad 1 Secretaría de Unidad 1 Analista Administrativo 1 Auxiliar de servicios 2 Direcciones 3 Subdirecciones 4 Departamentos 2 Analistas Total: 15 personas	1 Titular de la Unidad 1 Asesor B 1 Secretaría de Unidad 7 Auxiliares de servicios 1 Analista administrativo 2 Direcciones 1 Subdirección 5 Departamentos 9 Analistas 4 Edecanes Total: 32 personas

La Secretaría Ejecutiva asumiría las atribuciones de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y la Unidad Técnica de Archivo Logística y Atención a los Órganos Desconcentrados. Si se compara con la estructura de la Unidad Técnica de Vinculación y la de Organismos Externos (UTVOE) y la Unidad de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD). Las 35 personas que actualmente laboran en funciones operativas dentro de la Secretaría Ejecutiva tendrían que seguir atendiendo las obligaciones que actualmente tienen, y además realizar las actividades de las 47 personas que actualmente están adscritas a UTVOE y UTALAOD.

CARGA LABORAL CUALITATIVA  
RE-CONFIGURACIÓN DE ATRIBUCIONES

<sup>11</sup> Hay 8 plazas más que apoyan en la secretaría ejecutiva entre las que se encuentran un chofer, auxiliares de servicios y asistentes.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."





Area	Código de Instituciones y Procedimientos Electorales	Reglamento Interior- IECM
Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos		En el artículo 34, se mencionan 13 atribuciones que le corresponden realizara la Unidad de Género y Derechos Humanos.
Educación Cívica y Construcción Ciudadana.	En el artículo 94 del Código, a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía se le dan 23 atribuciones.	
Total de atribuciones que absorberá la Dirección Ejecutiva de Género Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana en el Código reformado: 28 (veintiocho)		
Centro de Formación y Desarrollo		En el artículo 32 del Reglamento Interno, el Centro de Formación y Desarrollo tiene 17 atribuciones.
Secretaría Administrativa	En el artículo 87 y 88 del Código, se mencionan en total 26 atribuciones que tiene la Secretaría Administrativa.	En el artículo 20 del Reglamento Interno, se mencionan otras 12 atribuciones.
Total de atribuciones que absorberá la Secretaría Administrativa en el Código reformado: 28 (veintiocho)		
Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a los Organos Desconcentrados		En el artículo 30 del Reglamento Interno, la UTALAOD tiene encomendadas 3 atribuciones y dentro de estas tres atribuciones, se contemplan 30 actividades que desarrolla esta Unidad Técnica.
Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos		En el artículo 33 del Reglamento Interno se contemplan 19 atribuciones
Secretaría Ejecutiva	Se contemplan 20 atribuciones en total que se encuentran en los artículos 84 y 86 del Código.	En el artículo 19 del Reglamento Interno, se contemplan 27 atribuciones.
Total de atribuciones que absorberá la Secretaría Ejecutiva en el Código reformado: 23 (veintitres)		
Unidad Técnica Especializada de Fiscalización	En el artículo 108, 351 y 355 del Código, se contemplan un total de 9 atribuciones.	En el artículo 24 del Reglamento Interno, se contemplan 10 atribuciones.
Dirección de Asociaciones Políticas	En el artículo 95 del Código, de contemplan 15 atribudones para DEAP.	Se mencionan dos atribuciones en los artículos 19 fracción XXI y 24 fracción VII.
Total de atribuciones que tendría la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización en el Código reformado: 24 (veinticuatro)		

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

AFECCIÓN DE CINCO FUNCIONES SUSTANCIALES, ESTRATÉGICAS Y ESPECIALIZADAS QUE SON ABSORBIDAS POR CUATRO ÓRGANOS EJECUTIVOS.

FUNCIÓN FISCALIZADORA.

De una interpretación funcional y sistemática de los artículos 41, base V, apartado A, párrafo segundo; 74, fracción II; 79; 116, fracción II, párrafo quinto; 122, apartado





A, fracción II, párrafo sexto de la CPEUM, las funciones de fiscalización de los recursos públicos, se encomienda a órganos con autonomía técnica y de gestión, con el fin de evitar injerencia de quienes ejercen los recursos públicos, en los procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Esto constituye un andamiaje constitucional efectivo para el mejor control del origen, destino y aplicación de los recursos públicos.

En materia electoral, el ejercicio de los recursos públicos no solo es un tema de órganos del estado que reciben financiamiento para su funcionamiento, sino que aquí se involucra el uso de recursos públicos como prerrogativas que tienen las entidades de interés público denominadas partidos políticos.

Esa prerrogativa tiene como objetivo financiar sus actividades permanentes, específicas, de precampaña y campaña.

Sin embargo, todo partido político (nacional y local) tienen un origen previo que responde a reglas de constitución.

Para poder constituir un partido político, la ciudadanía debe ejercer su derecho de asociación política. El ejercicio de ese derecho no puede implementarse sin el apoyo de recursos económicos y materiales.

Ante ello, la normatividad electoral local y federal, establece un régimen fiscalizador de los recursos privados que son usados para fines constitutivos de un partido político.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

Ese régimen fiscalizador tiene como objetivo, vigilar que los recursos económicos y materiales usados, tengan una procedencia lícita y la mejor manera de auditar esos recursos, es mediante órganos con autonomía técnica y de gestión, puesto que esa característica les da eficiencia a sus procesos y sobre todo, les permite independencia de actuación en un área especializada que debe estar alejada de injerencias externas.

Ahora bien, la función fiscalizadora electoral en el ámbito local, es una actividad permanente. Si bien el INE tiene la facultad fiscalizadora de los recursos públicos que se otorgan anualmente a partidos políticos nacionales y locales, los OPLES, tienen que fiscalizar los recursos de aquellas organizaciones que pretenden constituirse como



partidos y de aquellas agrupaciones locales que forman parte del sistema político-electoral de las respectivas entidades federativas.

Se trata pues, de una actividad fiscalizadora local que requiere un grado de especialización y de autonomía técnica y de gestión suficiente para poder auditar recursos privados para fines político-electorales y con ello blindar el sistema de partidos y participación política de factores reales de poder de procedencia ilícita.

De conformidad con la CPEUM y la LGIPE, el Instituto Nacional Electoral (INE) puede delegar la facultad fiscalizadora al IECM, conforme a las siguientes reglas:

**CPEUM.**

**Artículo 41. (...)**

**V.** La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.

(...)

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las leyes:

(...)

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales.

En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su órgano técnico será el conducto para superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior.

**LGIPE**

**Artículo 125.**

1. La delegación de funciones del Instituto en los Organismos Públicos Locales que señala el inciso b) del Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución, tendrá carácter

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



excepcional. La Secretaría Ejecutiva someterá al Consejo General los Acuerdos de resolución en los que se deberá fundar y motivar el uso de esta facultad.

2. Para el ejercicio de esta facultad, el acuerdo del Consejo General **deberá valorar la evaluación positiva de las capacidades profesionales, técnicas, humanas y materiales del Organismo Público Local electoral, para cumplir con eficiencia la función.**

3. La delegación se realizará antes del inicio del proceso electoral local correspondiente y requerirá del voto de al menos ocho Consejeros Electorales. Finalizado el proceso electoral de que se trate, cesarán los efectos de la delegación. El Instituto podrá reasumir la función que haya sido delegada antes de que finalice el proceso electoral respectivo, siempre y cuando se apruebe por la misma mayoría de ocho votos.

4. La delegación de facultades se realizará de forma específica en cada caso para un Organismo Público Local determinado. **Los Organismos Públicos Locales deberán ejercitar las facultades delegadas sujetándose a lo previsto por esta Ley, la Ley General de Partidos Políticos, los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que emita el Consejo General.**

LGIFE.

Artículo 195.

1. Los Organismos Públicos Locales que ejerzan facultades de fiscalización por delegación del Instituto **se sujetarán a los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que emita el Consejo General.**

2. En el ejercicio de dichas funciones, los Organismos Públicos Locales deberán coordinarse con de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización.

3. En estos casos, de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización será el conducto para superar las limitaciones de los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

Por diseño constitucional, la fiscalización de los recursos públicos y privados está encomendada a órganos técnicos dependientes de las autoridades electorales (artículo 41, Base V, párrafo tercero de la CPEUM).

Si bien por regla general, la fiscalización es una función encomendada al INE, existe no solo la facultad de delegación, sino también, la fiscalización de recursos en el ámbito local.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."





Dicha función fiscalizadora se encomienda a unidades técnicas especializadas con autonomía técnica y de gestión, por las siguientes razones fundamentales:

Para que las personas consejeras electorales, integrantes de la Comisión y del Consejo General, no intervengan en los trabajos de la Unidad Técnica de Fiscalización, garantizando en todo momento el cumplimiento de los principios rectores en materia de fiscalización y sobre todo la independencia en el desempeño de la función fiscalizadora.

Aunado a ello, esa unidad técnica, para lograr independencia técnica y de gestión, debe contar con personas especialistas en la fiscalización de recursos públicos y privados, con conocimientos en materia de auditoría, rendición de cuentas y contabilidad.

Así, para estar en posibilidades de realizar actividades fiscalizadoras, cuando estas sean delegadas por el INE, se debe contar con un área que tenga la misma naturaleza de autonomía técnica y de gestión establecida a nivel constitucional. De no contar con un área especializada, estaremos desobedeciendo el mandato constitucional.

Contrario a lo que se dice en la iniciativa, la fiscalización en el ámbito local **no se trata de una actividad temporal**. La función fiscalizadora es una actividad permanente, tal y como quedo establecido en el cuadro de carga laboral cualitativa antes desarrollado y que pido se tenga por aquí reproducido lo que respecta a la función fiscalizadora.

Desaparecer la Unidad Técnica además de vulnerar la autonomía del IECM, implica un debilitamiento para el control y vigilancia en el manejo de recursos de organizaciones que solicitan el registro como partido y de candidaturas independientes locales. Lo que se puede traducir en inequidad en la contienda electoral local.

La actual propuesta podrá en vilo alguna de las dos grandes actividades que deberá realizar la persona titular de la nueva Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización. La exhaustividad en cada una de las funciones que ahora deberá desempeñar está en riesgo, puesto que, además de sustanciar quejas y denuncias en materia electoral, deberá registrar nuevos partidos, registrar todas y cada una de las

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



candidaturas que se registren para el proceso electoral 2023-2024 y seguir fiscalizando a:

- **Organizaciones de observación electoral.** Revisión del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades;
- Actividades permanentes que no realiza el INE:

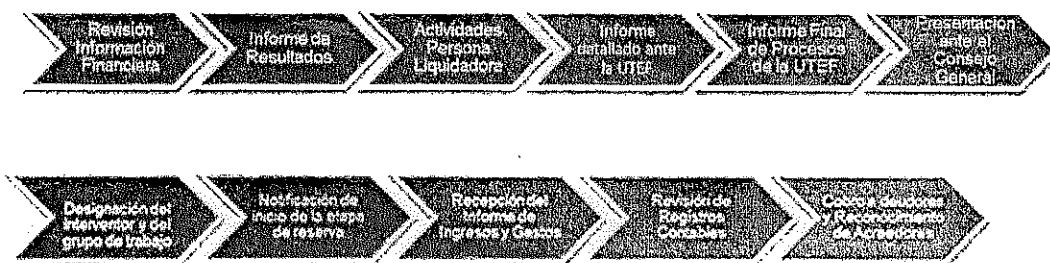
**Asociaciones Civiles constituidas por candidaturas independientes.** Durante proceso electoral se fiscaliza y posterior a la elección se lleva a cabo la disolución y liquidación.

**Organizaciones Ciudadanas para integrar un partido político.** Se fiscalizan los informes mensuales durante todo el proceso de asambleas y constitución.

- **Partidos políticos locales que pierden su registro.** Luego de la celebración de la elección; se lleva a cabo la liquidación del patrimonio de los partidos políticos locales que pierden su registro posterior a una elección. Actualmente el IECM lleva los procesos de liquidación del Partido ELIGE y el Partido Humanista.

Todas las anteriores actividades, tienen un proceso de actividad permanente institucional que se ejemplifica así:

Proceso de la Actividad Institucional



Aunado a ello, deberá efectuar trabajos de auditoría consideran entre otras; el análisis de operaciones inusuales, sospechosas que tienen como riesgo la intromisión de dinero

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



ilegal (en efectivo) al ámbito público, tal y como eficazmente lo detectó en el año 2020, la ahora Unidad Técnica de Fiscalización del IECM en el proceso de fiscalización de la Asociación Civil "Enrédate por México".

La calidad del trabajo desempeñado por el IECM, se puede constatar en el expediente IECM/RS-CG-10/2020,<sup>12</sup> precisamente porque la actual Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con personal profesional y especializado en materia de contable, de auditoría y jurídica. Cabe señalar que la actual Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas carece de experiencia en los ámbitos de auditoría y contabilidad.

Con esta reforma, las representaciones de partidos políticos estarían presentes en las sesiones de la Comisión, elemento que se ha considerado por el legislador como desfavorable para la autonomía técnica de los trabajos.

La carencia de contar con un órgano **fiscalizador permanente con autonomía técnica** y de gestión, no solo hace nugatorio (o de imposible aplicación) la facultad delegatoria establecida en el artículo 41 de la CPEUM, sino que es contrario a las facultades permanentes de fiscalización en el ámbito local establecida en la normatividad electoral local, razón por la cual deben **invalidarse** las normas que eliminan y transfieren las facultades de la Unidad Técnica de Fiscalización a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del IECM.

## FUNCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS.

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, inalienabilidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La interpretación de normas relativas a los derechos humanos será conforme al principio *pro persona*. Dicha disposición constitucional impone la obligación de que las autoridades (incluida el IECM) deben **avanzar** en la instrumentación de políticas

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

<https://www.iecm.mx/www/taip/cg/res/2020/IECM-RS-CG-10-2020.pdf>



públicas, programas **y acciones** que derivan de obligaciones explícitas e implícitas que ha adquirido el Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos.

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece, en el artículo 1, que su objeto es regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los Lineamientos y **mecanismos institucionales** que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado

El 23 de marzo de 1981, México ratificó la CEDAW, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981.

La CEDAW, en su artículo 4, numeral 1, establece que los Estados Parte deberán adoptar **medidas especiales** encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer.

Durante 2003, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el Capítulo 5.3 "Propuestas", del Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México<sup>13</sup>, **propuso** fortalecer los mecanismos públicos responsables de promover la equidad de género (instituciones, coordinaciones, comunicaciones), así como las Unidades sectoriales responsables de incorporar la perspectiva de género en las políticas sectoriales mediante las siguientes acciones:

- **Promover la creación** de comisiones especializadas en los congresos locales **y áreas de género en los** poderes judiciales y **órganos autónomos correspondientes**;
- Desarrollar y apoyar mecanismos de articulación entre todas esas instancias;
- **Promover el establecimiento** de programas, instituciones y servicios para prevenir, atender, y eliminar la violencia sistémica de género en todo el territorio nacional; y
- Adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de sus derechos económicos, sociales y culturales, etcétera.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

<sup>13</sup> [https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc\\_pub/8diagnosticoCompleto.pdf](https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/8diagnosticoCompleto.pdf)





La anterior propuesta (contar con área especializada en materia de género y derechos humanos) es una acción afirmativa que encuentra sustento en nuestro andamiaje constitucional, pues tiene como objetivo tutelar los derechos político-electorales que van desde el principio de paridad, hasta la erradicación de la violencia política de género en los actos político-electorales de los cuales, el IECM tiene participación como autoridad electoral.

Asimismo, la existencia de un área especializada y separada de las demás áreas del IECM, permite garantizar la **transversalidad** de género, el cual tiene por objetivo hacer viables los procesos, implementar las acciones, y hacer efectivas cada una de las acciones afirmativas que se implementen en materia electoral que tengan por objeto garantizar la paridad de género y el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

Es un área estratégica que tutela la protección de los derechos políticos de las mujeres en igualdad de condiciones y libre de violencia, y necesaria la emisión de acuerdos, lineamientos, reglamentos y demás instrumentos jurídicos que, con perspectiva de género, debe aprobar el IECM.

Asimismo, esa área especializada y separada de las demás áreas del IECM, es necesaria para que, con perspectiva de género, sean atendidos los derechos laborales de las mujeres trabajadoras del Instituto, se atiendan los posibles casos de violencia laboral por razón de género, entre muchas otras acciones que permitan el ejercicio de las funciones públicas en condiciones de igualdad.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

El 10 de junio de 2011 en México se constitucionaliza el principio *pro persona*. A partir de la reforma político-electoral de 2014 y la reforma constitucional de 2019, la paridad de género y los derechos político-electorales de las mujeres de maximiza, volviéndose obligación de los órganos constitucionales autónomos dar cumplimiento al capítulo 5.3 "Propuestas" del Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México propuesto por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas **con el fin de crear un área de género en el IECM.**

Mediante acuerdo **IECM/ACU-CG-021/2019** se aprobó la creación de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos (UTGyDH) en apego al mandato constitucional de erradicar la discriminación, desigualdad de género y toda forma de





violencia contra las mujeres, pero también en cumplimiento a los tratados internacionales de los cuáles México es parte y recomendaciones internacionales.

La Unidad especializada de Igualdad de Género y Derechos Humanos se vuelve necesaria en el IECM porque:

- Conforme las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, así como las emitidas a nivel internacional a las cuales estamos obligados a su observancia, es imprescindible incorporar la perspectiva de género en todas las actividades que se desarrollen dentro de las funciones de esta Institución.

El IECM se encuentra obligado a realizar diversas acciones en materia de género y no discriminación. Estas actividades están distribuidas en sus distintas áreas operativas internas, lo cual implica **una visión institucional transversal con perspectiva de género**, como por ejemplo, el registro de candidaturas con paridad de género, la asignación de recursos públicos para los programas anuales de liderazgo político de las mujeres, políticas internas de conciliación, vida laboral y vida personal, uso de lenguaje no sexista en los actos dictados por el IECM; políticas de capacitación interna para la igualdad y no discriminación, de inclusión y diversidad cultura, protocolos o lineamientos contra el hostigamiento sexual y acoso sexual y laboral, entre otras acciones.

En tal sentido, tiene a su cargo el reporte de las acciones institucionales ante el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México y los procesos de certificación de las normas: NMX-R-025-SCFI-2015 en materia de igualdad laboral y no discriminación y NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Aunado a ello, encabeza las acciones en materia de accesibilidad en coordinación con el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (Indiscapacidad).

Cuenta con un nivel jerárquico suficiente para alcanzar resultados de planeación, seguimiento y evaluación de las actividades asociadas a la igualdad y la perspectiva de género dentro del IECM y esto, permite evaluar el impacto de las actividades en cada una de las áreas.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



Esta Institucionalización jerárquica y de transversalización de la perspectiva de género, ha coadyuvado al mejoramiento y remoción de obstáculos para las mujeres y la igualdad de las personas al interior del IECM, con los partidos políticos y con la ciudadanía.

La existencia de un área especializada que no solo forma parte de una estructura orgánica, sino que sirve de enlace para que la ciudadanía esté mejor informada y ejerza sus derechos político-electorales con perspectiva de género, es ya un derecho adquirido que, conforme al artículo 1º constitucional debe ser progresivo y maximizado, por tanto, la desaparición de esta área especializada sería un retroceso para la ciudadanía quien es la principal beneficiaria.

La reforma contempla la unión de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía con la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, dando paso a la *Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción de Ciudadana*. La propuesta hace modificaciones a los artículos 63 y 94 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, con la derogación del artículo 68 en materia de atribuciones de la actual Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, se suman atribuciones a lo que hoy es la Dirección Ejecutiva Cívica y Construcción de Ciudadanía, lo cual es un foco de alarma pues:

- Las tareas de cada área deben implementarse por personal especializado ya que su labor no es mínima, el juntar el trabajo de dos temáticas que desde la pedagogía y enfoque de derechos requieren rigor, restaría valor al material y actividades que desarrollen las áreas.

- Es necesaria la existencia de un área especializada, que esté separada de cualquier otra área ya que no solo forma parte de una estructura orgánica, sino que sirve de enlace para que la ciudadanía esté mejor informada y ejerza sus derechos político-electorales con perspectiva de género.

- Conforme al artículo 1º constitucional los derechos deben ser progresivos y maximizados, por tanto, la desaparición de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos sería un retroceso para la ciudadanía que es una de las principales beneficiadas con su existencia.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



- No contempla el mandato convencional y constitucional establecido en los artículos 1º, párrafos 2, 3 y 5; 4º y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para tener una unidad especializada en materia de género y derechos humanos.

Por otro lado, es preciso mencionar que, se parte de una premisa falsa (indebida motivación y fundamentación), al dar por hecho que la actual Unidad Técnica de Igualdad de Género y Derechos Humanos implicó el engrosamiento de la estructura del IECM, lo cual no fue así.

Mediante acuerdo **IECM/ACU-CG-021/2019**<sup>14</sup> se aprobó la creación de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos (UTGyDH) en apego al mandato constitucional de erradicar la discriminación, desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.

La creación de la UTGyDH no representó un incremento presupuestal al capítulo 1000 (considerandos 21 a 23 del acuerdo **IECM/ACU-CG-023/2019**<sup>15</sup>), las plazas ya operaban y se reconfiguraron a raíz de la decisión de desincorporar de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE) las actividades relativas a la promoción de derechos humanos y género para trasladarlas a la UTGyDH y así dar respuesta a la necesidad de supervisar y administrar la política en materia de desigualdad de Género y Derechos Humanos dentro y fuera del Instituto de manera profesionalizada, tal y como se desprende a continuación:

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

21. Que en virtud de lo anterior, se considera pertinente que la UTVOE cuente con una estructura de 15 plazas presupuestales en términos del organigrama que forma parte integral del presente Acuerdo, y distribuidas en una de Titular de Unidad Técnica, dos Direcciones de Área, tres Subdirecciones, cuatro Jefaturas de Departamento, dos Analistas, un Analista Administrativo, una Secretaría de Unidad, y un Auxiliar de Servicios.

22. Que atendiendo la necesidad de contar con una instancia encargada de supervisar y administrar la política en materia de igualdad de Género y Derechos Humanos, tanto dentro como fuera del Instituto Electoral, **este Consejo General ordenó la creación de la UTGyDH**, la cual, además de las atribuciones que le confiera el Reglamento Interior del Instituto Electoral, tendrá las facultades de vigilar que el Instituto Electoral y sus Órganos desconcentrados actúen de acuerdo a la promoción, respeto y protección de los principios

<sup>14</sup> <https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2019/IECM-ACU-CG-021-2019.pdf>

<sup>15</sup>



## Partido de la Revolución Democrática

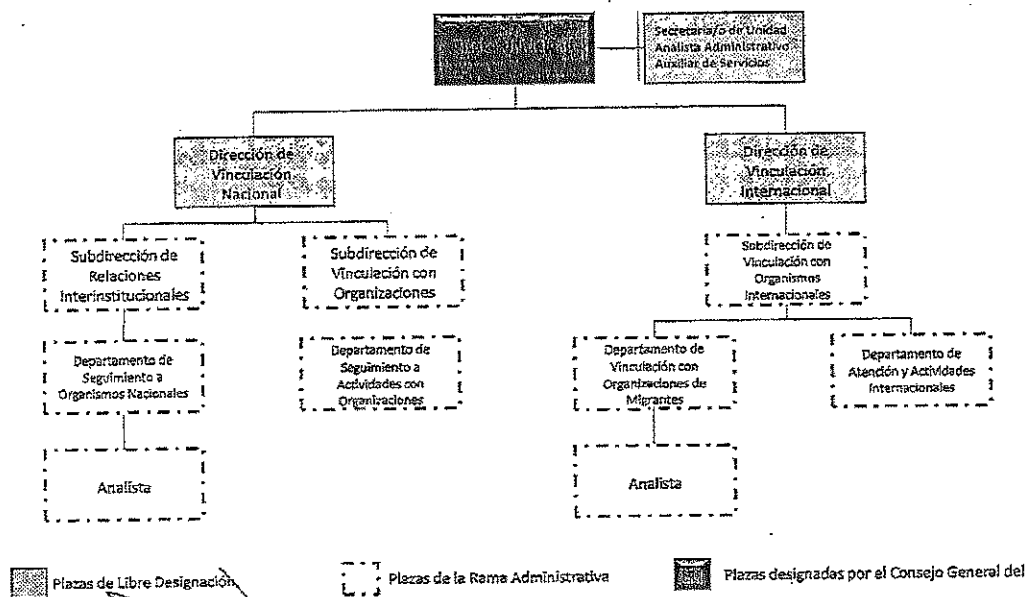
establecidos en las Constituciones Federal y Local; institucionalizando la perspectiva de género y derechos humanos en la planeación, programación, ejecución y evaluación de programas, proyectos, normas, acciones y políticas públicas de todas las Unidades Administrativas y Órganos desconcentrados del Instituto Electoral, y promoviendo mecanismos de coordinación externa con instituciones públicas, privadas, organizaciones civiles y partidos políticos para instrumentar acciones que fortalezcan la cultura político-electoral y contribuyan a una democracia igualitaria e incluyente.

En consonancia con lo expuesto, con la finalidad de dar mayor proyección, profundidad e incluso impacto social a las actividades que realiza el Instituto Electoral en materia de derechos humanos y género, este Consejo General **estima conveniente dotar a la UTGyDH, con una estructura de 15 plazas presupuestales en términos del organigrama que forma parte integral del presente Acuerdo**, y distribuidas en una de Titular de Unidad Técnica, dos Direcciones de Área, tres Subdirecciones, cuatro Jefaturas de Departamento, dos Analistas, un Analista Administrativo, una Secretaría de Unidad, y un Auxiliar de Servicios.

**23. Que la estructura contemplada en los considerandos 21 y 22, no implica un incremento al presupuesto contenido en el capítulo 1000, ya que funcionalmente las plazas propuestas venían operando y lo que se pretende es normar la estructura organizativa del Instituto Electoral.**

SECRETARÍA DE MEXICO

### UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS EXTERNOS



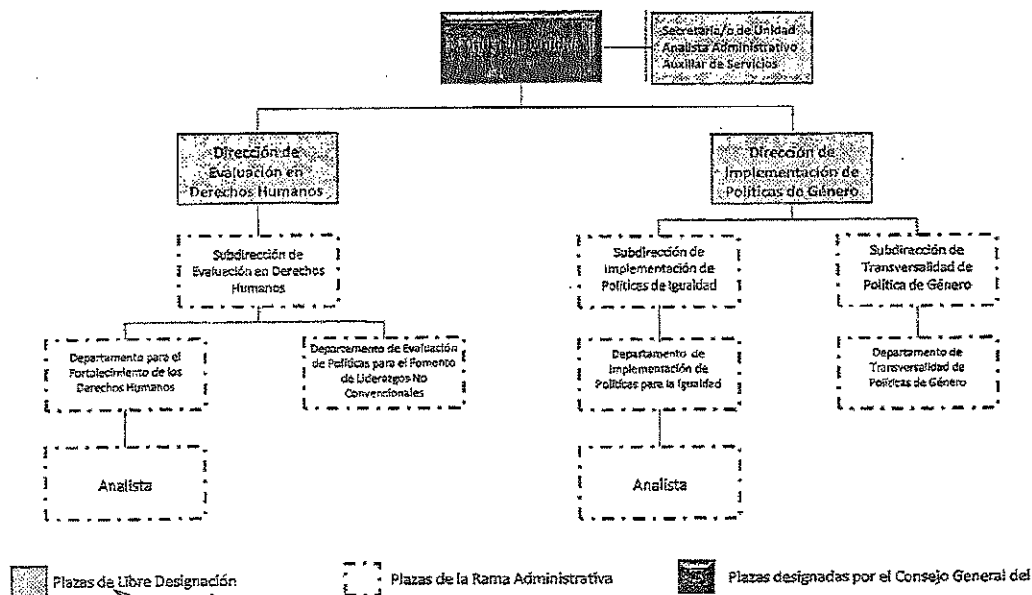
"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

Fuente: Instituto Electoral de la Ciudad de México



© ELECTORAL  
DE MÉXICO

UNIDAD TÉCNICA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS



Fuente: Instituto Electoral de la Ciudad de México

Es por todas estas razones que deben **invalidarse** las disposiciones por las que se elimina la Unidad Técnica de Igualdad de Género y Derechos Humanos y las que trasladan sus funciones a la Dirección de Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía (DEECyCC).

### FUNCIÓN DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS EXTERNOS.

El Reglamento de Elecciones prevé un capítulo especial de Coordinación entre el INE y el IECM (art. 26). Esta coordinación está a cargo de una Unidad Técnica de Vinculación del propio INE.

Además, para la ejecución de las tareas inherentes a la organización de los procesos electorales locales, la coordinación con el IECM se sustenta en convenios generales de coordinación, anexos técnicos, anexos financieros y adendas.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



Por ello, resulta importante la existencia de un área especializada, con su respectiva infraestructura humana y material, que sirva de vínculo entre el INE y el IECM.

De conformidad con el artículo 29, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, los rubros mínimos que deben considerarse como materia de coordinación entre el Instituto y el IECM, son los siguientes:

Artículo 29  
(...)

2. Los rubros que, al menos, deberán considerarse como materia de coordinación entre el Instituto y los opl, son los siguientes:

- a) Integración de consejos municipales y distritales de los opl;
- b) Campañas de actualización y credencialización;
- c) Listas nominales de electores;
- d) Insumos registrales;
- e) Capacitación y asistencia electoral;
- f) Casillas electorales;
- g) Documentación y materiales electorales;
- h) Integración de mesas directivas de casilla;
- i) Observadores electorales;
- j) Candidaturas independientes;
- k) Candidaturas comunes, coaliciones y alianzas de ámbito local;
- l) Registro de candidaturas;
- m) Representantes generales y de casilla;
- n) Encuestas y sondeos de opinión;
- o) Organización de debates;
- p) Desarrollo de jornada electoral; Reglamento de Elecciones
- q) Promoción de la participación ciudadana;
- r) Mecanismos de recolección de paquetes electorales;
- s) Conteos rápidos;
- t) prep;
- u) Cómputo de las elecciones locales;
- v) Sistemas informáticos;
- w) Acceso a radio y televisión;
- x) Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos;
- y) Voto de los mexicanos residentes en el extranjero;
- z) Visitantes extranjeros;
- aa) Medidas cautelares en materia de radio y televisión, y
- bb) Las demás que determine el Consejo General o se acuerden con el OPL.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

## Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE)



La UTVOE opera la vinculación del IECM con más de 3,100 personas e instituciones aliadas a nivel nacional e internacional, con el objeto de fomentar la cultura democrática y contribuir a garantizar y potenciar el ejercicio de derechos de la ciudadanía dentro y fuera de las fronteras nuestra geografía.

De conformidad con el andamiaje constitucional y legal, en la Ciudad de México está regulado el derecho de votar (Jefatura de Gobierno y Diputación Migrante) y ser votado (Diputación Migrante) para la ciudadanía residente en el extranjero.

Asimismo, en la Ciudad de México cada año se organizan votaciones para presupuesto participativo y cada tres años para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOS). Además de que en la Ciudad de México se regulan más de 20 mecanismos de democracia directa, de los cuáles, en su mayoría, el IECM tiene participación una participación directa.

La tutela de los derechos de votar y ser votada de la ciudadanía de la Ciudad de México residente en el extranjero y de participación ciudadana, requiere de acciones focalizadas y especializadas por parte de personas servidoras públicas capacitadas para ello.

Los anteriores derechos, implican una implementación, difusión y materialización que requiere de vínculos directos entre autoridad electoral, ciudadanía y diversas autoridades electorales y de gobierno.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

Esos vínculos son fundamentales sobre todo en materia del voto de residentes en extranjero y de los diversos ejercicios de participación ciudadana.

La necesidad de continuar con las labores de vinculación resulta fundamental bajo una lógica de progresividad de los derechos ciudadanos, misma que se encuentra garantizada por la Constitución Local. La Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE) es un área transversal, pe también tiene tareas específicas que no gestiona ninguna otra área del Instituto.

La UTVOE desarrolla labores que han impactado positivamente al fomento de la cultura democrática con las siguientes alianzas:





- 318 personas académicas especialistas en materia político-electoral provenientes de más de 30 diferentes instituciones de educación superior en la Ciudad de México y en el extranjero.
- 97 personas directoras, coordinadoras y jefas de carreras de 79 áreas de 27 instituciones académicas de la Ciudad de México.
- 83 integrantes de la Red de Observación y de Participación Ciudadana de la Ciudad de México de las cuales 61 personas pertenecen a 49 organizaciones de la sociedad civil y 22 personas son observadoras a título individual.
- 210 personas consejeras de 31 Organismos Públicos Locales Electorales.
- 155 personas magistradas de 31 tribunales electorales locales.
- 22 personas integrantes de organismos públicos autónomos de la Ciudad de México.
- 22 personas titulares de las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México.
- 38 instituciones, divididas en 8 gubernamentales, 5 académicas, 4 electorales, 10 organizaciones de la sociedad civil y 11 organizaciones internacionales, con las que el IECM tiene un convenio suscrito y vigente y la UTVOE es el área responsable operativa.
- 15 organizaciones internacionales.
- 27 organismos electorales en América Latina y el Caribe.
- 14 sedes de la UNAM ubicadas en 9 países de 4 continentes.
- 80 embajadas y 60 consulados de México en el mundo a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
- 69 capítulos de la Red Global MX en 34 países.
- Contacto con 20 capítulos de la Red EXA TEC en el Mundo
- 1,891 contactos de la Red Voto Chilango de los cuales 731 son organizaciones o instituciones relacionadas con temas de la diáspora.

**(Datos de la UTVOE)**

El ejercicio de derechos de la ciudadanía, dentro y fuera del territorio nacional, se compromete gravemente al asignarse a la Secretaría Ejecutiva, ya que, como se ha venido aduciendo, se sobrecarga al personal de funciones y por otro lado, se perdería el enfoque especializado que ha permitido la ampliación de los alcances y capacidades institucionales del IECM a favor de la ciudadanía capitalina y el ejercicio de sus derechos político-electorales y de participación ciudadana.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



Tal y como se adujo en el capítulo de la función de Igualdad de Género y Derechos Humanos, desde 2019 la UTVOE era un área adelgazada estructuralmente hablando, a raíz de la decisión de desincorporar de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE) las actividades relativas a la promoción de derechos humanos y género para trasladarlas a la UTGyDH, de conformidad con los considerados 21 a 23 del acuerdo **IECM/ACU-CG-023/2019**.

Es por todas las anteriores razones y fundamentos que deben **invalidarse** las disposiciones por las que se elimina la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y las que trasladan sus funciones a la Secretaría Ejecutiva del IECM.

#### **UNIDAD TÉCNICA DE ARCHIVO LOGÍSTICA Y APOYO A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (UTALAOB).**

Las actividades que se verían afectadas en su eficacia serían:

#### **Durante procesos electorales y con miras al proceso electoral 2023-2024**

1. Compromete el funcionamiento homogéneo y la calidad del trabajo de las 33 Direcciones Distritales, ya que UTALAOB apoya a:

- Efectuar el cómputo, en tiempo real, la noche de la jornada electoral. Por lo que su desaparición, pone en riesgo el seguimiento de los cómputos distritales.
- Cumplir con la función de Oficialía Electoral, gestionando la designación de un mayor número de personas servidoras públicas de la misma adscripción y con la inspección ocular de propaganda electoral. Su desaparición pone en riesgo dar fe, de manera eficaz, de actos o hechos que pueden constituir conductas infractoras a la ley electoral durante procesos electorales.
- Operar el Sistema de Seguimiento a la Jornada Consultiva (SIJECC) y así garantizar a los partidos políticos y ciudadanía, la transmisión en tiempo real de los reportes de instalación, apertura y cierre de las Mesas y, en su caso,

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



de los incidentes que se pudieran presentar durante la Jornada Consultiva en cada órgano Distrital.

- Elaborar un estudio de los factores de riesgo por Alcaldía a nivel colonia que se remite a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto de solicitar un operativo de apoyo en aquellas zonas con mayor incidencia delictiva y otros factores de riesgo para el día de la Jornada Electoral.
- Prever la obtención y distribución del mobiliario para equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión (en los procesos de participación ciudadana), minimizando y optimizando costos.
- Concentrar las propuestas de las 33 Direcciones Distritales, sobre los lugares para instalar las Mesas Receptoras de Opinión (en los procesos de participación ciudadana), con el fin de unificar criterios de accesibilidad, seguridad e instalación en lugares no prohibidos en ley.
- Durante la jornada electiva en los ejercicios de participación ciudadana, coordina entre las 33 Direcciones Distritales el flujo de información en tiempo real de:
  - ✓ Asistencia del personal adscrito a los Órganos Desconcentrados.
  - ✓ Instalación de las MRVVO.
  - ✓ Apertura de las MRVVO.
  - ✓ Cierre de las MRVVO.
  - ✓ Incidentes presentados.

2. Funge como área concentradora de recursos económicos y materiales y con el fin de no distraer las actividades sustantivas de las 33 Direcciones Distritales:

- Diagnostica objetivamente las necesidades de cada Dirección Distrital y prevé su factibilidad, viabilidad y racionalidad en el anteproyecto de presupuesto, presupuestando lo realmente necesario para su operación y funcionamiento;

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



- Gestionó ante la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México la sanitización de los inmuebles en que se instalaron las Mesas Directivas de Casilla durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, centralizando la estrategia a fin de que las Direcciones Distritales garantizaran a la ciudadanía y a las personas representantes de los partidos político su derecho a votar sin exponer su salud, derivado de la pandemia COVID-19.

### ACTIVIDADES ORDINARIAS

1. *Integración de Órganos Desconcentrados.* Permanentemente supervisa y verifica su debida integración y formula propuestas de encargadurías y/o comisiones, considerando perfiles y necesidades específicas.
2. *Requerimientos de Órganos Desconcentrados.* Se da seguimiento a las diversas necesidades de las Direcciones Distritales, referentes a mantenimiento, adecuaciones, y servicios correctivos de las sedes distritales, lo cual minimiza, unifica y optimiza costos.
3. *Detección y gestión de elementos e insumos, requeridos por los Órganos Desconcentrados.* Se analizan sus necesidades a partir de requerimientos de mobiliario, equipo de oficina, artículos de papelería e insumos sanitarios, lo cual minimiza, unifica y optimiza costos.
4. *Visitas de supervisión de las áreas centrales a los Órganos Desconcentrados.* Se verifica el cumplimiento por parte de los Órganos Desconcentrados, de las actividades ordinarias y, en su caso, de participación ciudadana, mediante la supervisión de los archivos documentales y/o electrónicos respectivos, así como las condiciones de los Inmuebles y mobiliario. También, supervisar que los Órganos Desconcentrados cuenten con el soporte documental de las actividades realizadas y verificar el espacio que ocupa el archivo distrital y las necesidades de mantenimiento.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

Las anteriores razones son suficientes para **invalidar** las disposiciones por las que se elimina la UTVOE y las que trasladan sus funciones a la Secretaría Ejecutiva del IECM.

### UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO (UTCfyD).



La absorción de las funciones de las actividades de la UTCyD a la Secretaría Administrativa es de todos los cambios de la reforma, el más imperfecto no solo en cuanto a su diagnóstico, sino en cuanto a su eficacia en el desarrollo de las funciones.

El actual Centro de Formación y Desarrollo realiza una de las actividades constitucionales que dota de profesionalismo al ejercicio de la función electoral y que es el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), el cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, base V, apartado D de la CPEUM, comprende: la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de las personas servidoras públicas de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los **organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral.**

Esta actividad es sustantiva en el ejercicio de la función electoral del IECM, pues estas personas se encargan de dar certeza, legalidad, transparencia a cada una de las etapas del proceso electoral y ejercicios de participación ciudadana.

Por ello, el órgano que se encargue de hacer efectivo el SPEN, debe ser altamente profesional y especializado.

La UTCyD, conforme al CIPE vigente hasta antes de esta reforma, tiene las siguientes atribuciones:

- La selección, ingreso, profesionalización, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, cambios de adscripción, rotación, permanencia, incentivos y disciplina de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional;
- El Ingreso, inducción, capacitación, evaluación del desempeño, promoción e incentivos del personal de la Rama Administrativa;
- La Capacitación a las Consejeras y los Consejeros Electorales Distritales;
- Aplicar los procedimientos, lineamientos y/o demás normativa relacionada en el Servicio Profesional y la Rama Administrativa del Instituto Electoral;

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



- Organizar la realización de foros, conferencias, talleres, congresos y otros eventos académicos en materia de administración y desarrollo de personal que puedan coadyuvar a la mejora del Servicio Profesional y de la Rama Administrativa del Instituto Electoral;
- Contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática, de los procesos electorales y procedimientos de participación ciudadana

En tanto que, la Secretaría Administrativa del IECM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del CIPE es el órgano ejecutivo que tiene a su cargo **la administración de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto Electoral. Es el responsable de su patrimonio, de la aplicación de las partidas presupuestales y eficiente uso de los bienes muebles e inmuebles.**

Lo cual significa que personal especializado en la administración de recursos humanos, financieros y materiales del IECM, ahora se encargará de capacitar a las personas Consejeras de los órganos distritales para ejercer sus funciones de organización electoral, que son, entre las más importantes (artículos 126 a 130 del CIPE):

- Acreditar a los ciudadanos mexicanos que hayan presentado su solicitud, para participar como observadores durante el proceso electoral;
- Recibir las solicitudes de registro de las fórmulas de las y los candidatos a Diputados de mayoría, Alcaldías, Concejales y resolver sobre su otorgamiento;
- Determinar el número y ubicación de casillas;
- Aprobar las secciones electorales dentro de su Distrito Electoral para instalar Casillas Especiales;
- Supervisar el procedimiento de insaculación de los funcionarios de casilla y su capacitación; así como vigilar que las Mesas Directivas de Casilla se instalen el día de la jornada electoral;

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



## Partido de la Revolución Democrática

- Registrar los nombramientos de los representantes de casilla y generales que los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos sin partido acrediten para la jornada electoral;
- Ordenar la entrega de la documentación y materiales electorales a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, para el debido cumplimiento de sus funciones;
- Aprobar la integración de las Comisiones de Consejeros Distritales que sean necesarias para el seguimiento de la jornada electoral, durante la sesión del Consejo Distrital;
- Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a las elecciones de Jefe de Gobierno, Diputados del Congreso de la Ciudad de México, Alcaldes y Concejales;
- Efectuar el cómputo de la elección de diputaciones de mayoría, declarar la validez de la elección y entregar la constancia correspondiente a la fórmula de candidatos que haya obtenido el mayor número de votos;
- Realizar el cómputo distrital de la votación recibida en las elecciones de la Jefatura de Gobierno, Alcaldías, Concejales y de las y los Diputados de representación proporcional; así como la asignación de las concejalías de representación proporcional;
- Dar cuenta inmediatamente al titular de la Secretaría Ejecutiva sobre el desarrollo de las elecciones, el resultado los cómputos correspondientes a su Distrito Electoral y la entrega de las constancias de mayoría;
- Mantener en custodia la documentación de las elecciones de Jefe de Gobierno, Alcalde, Concejales y Diputados al Congreso de la Ciudad de México por ambos principios, hasta que concluya el proceso electoral correspondiente;
- Enviar de manera inmediata, al titular de la Secretaría Ejecutiva copia certificada de las actas de cómputo distrital de las elecciones de Jefe de Gobierno, Diputados y Concejales de representación proporcional;

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



- Informar inmediatamente al titular de la Secretaría Ejecutiva, sobre los medios de impugnación interpuestos contra actos o resoluciones del Consejo Distrital; y
- Remitir al Tribunal Electoral el expediente integrado con motivo de los medios de impugnación que se interpongan contra actos y resoluciones del Consejo Distrital

De lo anterior se desprende que personal especializado en actividades financieras y de recursos humanos, tendrán la encomienda de **capacitar** a quienes organizan elecciones y tienen encomendadas actividades fundamentales para la certeza, legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia y máxima publicidad de la contienda electoral y para garantizar el sufragio universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía, labores que de hacerse mal, ponen no solo en riesgo la legitimidad de la autoridad electoral, sino de la democracia y la función electoral en la Ciudad de México; razones suficientes para **invalidar** las disposiciones por las que se elimina la UTCyD y las que trasladan sus funciones a la Secretaría Administrativa del IECM.

Todo lo anterior, implica una vulneración a la autonomía de funcionamiento del IECM, al sobrecargar de funciones a menos personal, lo cual es una violación directa a los artículos 14, 16, 41, 116 y 122 de la CPEM, y por ello deben **invalidarse**.

Finalmente y como se ha desarrollado y señalado las violaciones a las reformas realizadas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México, no tomo las bases, directrices para realizar la reforma y violentó la autonomía con la que goza el Instituto Electoral de la Ciudad de México conductas contrarias a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reza de la siguiente forma:

*Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.*

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."





Dicho precepto dispone que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema y que los órganos de menor jerarquía cualquiera que fuera el ámbito de competencia deben ajustar sus actuaciones a las disposiciones que sean contrarias a la misma, es el caso que el poder constituyente dispuso que la naturaleza de los organismos autónomos sería el tener la facultad de auto organización, los dotó de **autonomía de funcionamiento**, pues esta facultad es natural e intrínseca a los órganos constitucionales autónomos y los hace independientes de los demás poderes de la unión.

Del artículo 133, se colige que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la norma Suprema de la Unión que contiene los principios y bases torales para los órganos cualquiera que fuera su ámbito sean tomados en cuenta, y confluir en armonía dentro de una sociedad, criterios respaldados en las siguientes:

*Tesis Aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P. XII/2006 que establece: "INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA".*

*Amparo en revisión 120/2002: LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL; SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. Y, TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.*

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

A



Los respaldos previamente señalados no fueron atendibles por el congreso de la Ciudad de México porque lo dispuesto en la Constitución Federal dispone los parámetros y bases para que el órgano constituido en ejercicio de su facultad de autoconfiguración ajuste su actuar a la norma de mayor jerarquía constitucional y en el caso se respete la autonomía del órgano electoral en la Ciudad de México lo cual no aconteció es por ello que el máximo órgano jurisdiccional del país debe enderezar las conductas de los poderes constituidos en el país para con ello cumplir con el Pacto Federal.

### TERCERO.

**NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA.** - Lo constituye el DECRETO POR EL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A),

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUIES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUIES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; instrumento jurídico del cual se demanda su inaplicación, por ser contraria a disposiciones constitucionales y legales.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

**CONCEPTO DE INVALIDEZ.**- El contenido del Decreto que se solicita su invalidez, viola flagrantemente las disposiciones contenidas en los artículos 14; 116, Fracciones II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 46, apartado A, inciso e) y 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como los principios certeza jurídica, equidad, neutralidad, imparcialidad, objetividad, legalidad, proporcionalidad, irretroactividad y debido proceso, que rigen la materia electoral y que en todo momento se deben observar y respetar, preceptos constitucionales que en lo conducente establece:

[Redacted signature area]



## CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

*Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.*

*Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.*

*Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:*

...  
II. ...

...  
*Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.*

*Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables.*

...

## CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

### Artículo 46

#### Organismos Autónomos

##### A. Naturaleza jurídico-política

*Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio*

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



de su presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Estos serán:

...  
e) Instituto Electoral de la Ciudad de México;  
...

El contenido del Decreto que se impugna a través del presente medio de defensa legal, no es acorde a lo regulado en los preceptos constitucionales antes invocados, normatividad constitucional que, conforme interpretación sistemática y funcional se desprende que el **Instituto Electoral de la Ciudad de México es un órgano autónomo**, a quien, en buena lógica jurídica se le debe considerar como una entidad de interés público, que tienen un **régimen especial y autonomía propia en su funcionamiento**, facultad concedida directamente por las Constituciones Federal y Local, así como en la legislación secundaria emanada de ellas.

Bajo estas premisas, dada la especialidad de las funciones el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que, entre otras cosas, tiene el deber garante de **incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, las actividades institucionales, así como los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos**, propuestas que deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos que establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables; situación que a todas luces se deja de atender en el Decreto que se demanda su invalidez.

Conforme a lo anterior, Instituto Electoral de la Ciudad de México en el ejercicio de su autonomía propia en su funcionamiento, el 15 de enero del año 2022, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 83, fracción V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México que le impone la obligación de *"Someter a la aprobación del Consejo General, en la primera quincena de enero de*

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



*cada año, las propuestas del Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral, con base en las asignaciones autorizadas por el Congreso de la Ciudad de México en el Decreto correspondiente*", emitió el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba el ajuste al Programa Operativo Anual y al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, con base en las asignaciones autorizadas por el Congreso de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2022", identificado con el número IECM/ACU-CG-015/2022, documento que se encuentra disponible en la página de internet <https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2022/IECM-ACU-CG-015-2022.pdf>, en el que se estableció:

#### *Antecedentes:*

...  
*XXVI. En sesión del 15 de diciembre de 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, autorizando al Instituto Electoral un presupuesto de \$1,201,084,647.00 (un mil doscientos un millones ochenta y cuatro mil, seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), el cual representa una reducción del 38% del presupuesto solicitado, mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial el 27 de diciembre de 2021.*

#### *Acuerda:*

*PRIMERO. Se aprueba el ajuste al Programa Operativo Anual del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal del año 2022, en los términos de los documentos que como anexo forman parte integral del presente Acuerdo.*

*SEGUNDO. Se aprueba el ajuste al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal del año 2022, en términos de los documentos que como anexo forman parte del presente Acuerdo y que asciende a la cantidad de \$1,201,084,647.00 (un mil doscientos un millones ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.).*

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



Conforme a lo anterior, es por demás evidente que el Congreso de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal del 2022, le autorizó al Instituto Electoral de la Ciudad de México la cantidad de \$1,201,084,647.00, Importe del cual, para ejercerlo, necesariamente se deben cumplir dos premisas fundamentales que a saber son:

- ❖ Congreso de la Ciudad de México, **si y solo si**, debe entregarlo al Instituto Electoral de la Ciudad de México, y
- ❖ En Instituto Electoral de la Ciudad de México, **si y solo si**, debe ejercerlo exclusivamente en los términos que fue etiquetado, conforme al ajuste al Programa Operativo Anual y al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, aprobado en el acuerdo identificado con el numero IECM/ACU-CG-015/2022.

Con base en estas circunstancias, lo establecido en los artículos transitorios SEGUNDO y CUARTO del Decreto que se impugna, en los que se determina que su vigencia es a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, fecha en la que el Instituto Electoral de la Ciudad de México tendrá un plazo de 91 días naturales para adecuar su estructura orgánica y funcional, sujetándose a los principios constitucionales de racionalidad, austeridad, economía, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, previendo un modelo de organización compacto que garantice el debido ejercicio y la probidad en la función pública, a todas luces es inconstitucional.

Lo anterior en virtud de que, pues con el pretexto de una austeridad ahorrativa, además de trastocar el régimen especial y autonomía propia en su funcionamiento que goza el Instituto Electoral de la Ciudad de México, también, **viola flagrantemente le principio jurídico de irretroactividad de la aplicación de la ley**, el cual se refiere

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



a la imposibilidad de aplicar una norma a hechos anteriores a la promulgación de la misma, lo que en buena lógica jurídica también se traduce en **las normas no tengan efectos hacia atrás en el tiempo**, toda vez que la seguridad jurídica de los actos de aplicación de las normas, es que se sus efectos comiencen en el momento de su entrada en vigor.

Lo anterior, en virtud de que, es claro que el Decreto que se demanda su invalidez, no guarda conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera puntual establece que "*A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna*" pues, en franca violación a dicha disposición constitucional, pretende que, con la publicación del Decreto que se impugna en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se deje de atender lo proyectado y presupuestado el Programa Operativo Anual y al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, aprobado en el acuerdo identificado con el número IECM/ACU-CG-015/2022, emitido y aportado el 15 de enero del año 2022, fecha anterior al proceso legislativo del Decreto que se demanda su invalidez.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

Bajo esta perspectiva, es indudable que el Decreto en comento es inconstitucional, pues, pretende que se aplique al contenido del alfanumérico IECM/ACU-CG-015/2022, instrumento jurídico que fue emitido y aprobado con mucho tiempo de anticipación al acto que se impugna, situación que, ante la aplicación del buen derecho, a todas luces se lesiona gravemente las formalidades esenciales que rigen el debido proceso y principalmente el principio jurídico de irretroactividad de la aplicación de la ley, tutelado por el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto es así, en virtud de que, en el acuerdo identificado con el número IECM/ACU-CG-015/2022, para el ejercicio fiscal 2022, el Instituto Electoral de la Ciudad de México,





proyectó una gran variedad de actividades institucionales etiquetando en cada una de ellas el costo correspondiente, programando la ejecución de cada una de ellas a través de los recursos humanos con que se contó desde el inicio del ejercicio fiscal 2022, personal que respetando, observando y acatando los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad contribuyen de manera idónea con el ejercicio de la función electoral a cargo del referido instituto.

En este orden de ideas, las actividades institucionales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, tienen estrecha relación con el ejercicio del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, presupuestado mediante acuerdo identificado con la clave IECM/ACU-CG-015/2022, **ejercicio del gasto que fue etiquetado** de manera general cada área del instituto y de manera particular para las cada una de las actividades de proyectadas por cada una de esas áreas, incluyendo las conocidas como Unidad Técnica de Fiscalización, Centro de Formación y Desarrollo, Unidad de Vinculación con Organismos Externos, Unidad de Género y Derechos Humanos y Unidad Técnica de Archivo, Logística y Atención a Órganos Desconcentrados, que ordena desaparecer el decreto que se demanda su invalidez; premisas que dejan de atenderse con la emisión del Decreto que se impugna, pues, en perjuicio al principio jurídico de Irretroactividad de la aplicación de la ley, tutelado por el artículo 14, de la Carta Magna, pretende que se aplique a un documento emitido con mucho tiempo con anterioridad.

Con base en esta cadena argumentativa, es indiscutible que, el Decreto que se impugna, a todas luces es inconstitucional, pues, trastoca de manera grave el derecho humano de irretroactividad de la ley, tutelado por el artículo 14, de la Constitución Federal, principio jurídico pretende o sustenta estabilidad al ordenamiento jurídico, también, contribuye a establecer la seguridad jurídica, pues, permite que las personas puedan tener confianza en las leyes vigentes y celebren sus acuerdos y negocios en

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



base a ellas, eliminando la incertidumbre que generaría una posible variación de la legislación respecto a hechos ya realizados y que ya no pueden ser cambiados o eliminados.

#### CUARTO.

**NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA.-** Lo constituye el DECRETO POR EL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUES Y XXII SEXIES AL

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; instrumento jurídico del cual se demanda su inaplicación, por ser contraria a disposiciones constitucionales y legales, dado que se atenda de manera directa con la función electoral que se ejerce a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

**CONCEPTO DE INVALIDEZ.-** El contenido del Decreto que se solicita su invalidez, viola flagrantemente las disposiciones contenidas en los artículos 14; 16; 41, Base V, apartado C; y 116, Fracciones II y IV, incisos a), b), c) y p), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, apartado A, inciso e) y 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como los principios certeza jurídica, equidad, neutralidad, imparcialidad, objetividad, legalidad, proporcionalidad y debido proceso, que rigen la materia electoral y que en todo momento se deben observar y respetar, preceptos constitucionales que en lo conducente establecen:

\*En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.”.

*CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS*  
*Artículo 41. ...*

...  
*V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.*



...

*Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:*

- 1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;*
- 2. Educación cívica;*
- 3. Preparación de la jornada electoral;*
- 4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;*
- 5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;*
- 6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;*
- 7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;*
- 8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;*
- 9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;*
- 10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y*
- 11. Las que determine la ley.*

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

*En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá:*



- a) *Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales;*
- b) *Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o*
- c) *Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.*

*Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, en los términos de esta Constitución.*

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

*Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este Servicio.*

*Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.*

*Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:*

*II. ...*

*Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las*



*remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.*

*Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables.*

...  
IV. *De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:*

- a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;*
- b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad;*
- c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes:*
  - ...  
*p) Se fijan las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución.*

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



## CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

### Artículo 46

#### Organismos Autónomos

##### A. Naturaleza jurídico-política

*Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Estos serán:*

...

*e) Instituto Electoral de la Ciudad de México;*

...

### Artículo 50

#### Instituto Electoral de la Ciudad de México

*1. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía, son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.*

*2. Este Instituto contará con un órgano superior de dirección, integrado por una persona Consejera o Consejero Presidente y seis personas Consejeras Electorales, con derecho a voz y voto, designadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se integrará con un Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o local, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. Participarán también como invitadas e invitados permanentes a las sesiones del Consejo, sólo con derecho a voz, una o un diputado de cada grupo parlamentario del Congreso de la Ciudad.*

*3. En el ejercicio de esta función, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.*

*4. El Instituto Electoral de la Ciudad de México ejercerá las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes de la materia.*

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



El contenido del Decreto que se impugna a través del presente medio de defensa legal, no es acorde a lo regulado en los preceptos constitucionales antes invocados, de los cuales, en un interpretación sistemática y funcional se desprende que el Instituto Electoral de la Ciudad de México **es un órgano con autonomía propia en su funcionamiento** que tiene el deber garante de organizar las ejercer la función estatal de realizar las elecciones de candidatos a cargos de elección popular, junto con Instituto Nacional Electoral, así como que, constitucionalmente se determina, tiene a su cargo el garantizar los derecho y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, educación cívica, realizar la preparación de la jornada electoral, organizar la impresión de documentos y la producción de materiales electorales, realizar los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley, emitir las declaraciones de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, realizar los cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo en la Ciudad de México, emitir resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, organizar, desarrollar, computar y emitir la declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

En general, contrario a lo que se determina en el Decreto que se impugna, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, como órgano autónomo en su funcionamiento, constitucionalmente tiene a su cargo la planeación, sustanciación, realización y ejecución de las elecciones de los cargos de Jefatura de Gobierno, Diputaciones Locales, Titulares de las Alcaldías y Concejales, así como de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad de México, que se realizan a través del método de sufragio universal, libre, secreto y directo; bajo esas circunstancias, dicho órgano electoral administrativo, tiene la obligación garante de ejercer su función electoral, observando y respetando los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, todo esto para garantizar





el derecho y la tutela de los derechos y obligaciones contenidas en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, se reitera que, el Decreto que se impugna, deja de considerar que, de conformidad a lo establecido en los artículos 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 46, apartado A, inciso e), de la Constitución Política de la Ciudad de México, **el Instituto Electoral de la Ciudad de México es un órgano autónomo**, por lo que, en buena lógica jurídica se le debe considerar como una entidad de interés público, que tienen un **régimen especial y autonomía propia en su funcionamiento**, facultad concedida directamente por las Constituciones Federal y Local, así como en la legislación secundaria emanada de ellas, característica que también es reconocida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, a través del siguiente criterio de tesis jurisprudencial.

*Partido Acción Nacional*

*vs.*

*Tribunal Electoral del Estado de Puebla*

*Tesis XCIV/2002*

**INSTITUTOS U ORGANISMOS ELECTORALES. GOZAN DE PLENA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL.**

*- Desde un punto de vista técnico jurídico, la autonomía no es más que un grado extremo de descentralización, no meramente de la administración pública sino del Estado. Es decir, de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial que conforman el poder público; en este sentido, en virtud de que la autonomía constitucional contemplada en los artículos 41, párrafo segundo, fracción III, y 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución federal, que se confiere a un organismo público electoral no cabe ubicarlo dentro de la administración pública paraestatal dependiente, por ejemplo, del Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 3o. y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en los numerales 1o., 2o. y 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, ni tampoco dependiente del Ejecutivo del Estado de Puebla, según lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Esto es, si bien puede haber organismos descentralizados (de la*

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



administración pública federal o de cierta entidad federativa) que no sean autónomos, no es posible que haya organismos públicos autónomos (del Estado) que no sean descentralizados, aunque formalmente no se les califique de esta última manera. Ello es así porque, en términos generales, la descentralización es una figura jurídica mediante la cual se retiran, en su caso, determinadas facultades de decisión de un poder o autoridad central para conferirlas a un organismo o autoridad de competencia específica o menos general. En el caso de organismos públicos autónomos electorales, por decisión del Poder Revisor de la Constitución en 1990, ratificada en 1993, 1994 y 1996, la función estatal de organización de las elecciones federales se encomendó al organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, en tanto que atendiendo al resultado de la reforma de 1996 al artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución federal, así como a lo dispuesto en el artículo 3o., párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Puebla, la función estatal de organizar las elecciones en dicha entidad federativa corresponde al organismo público autónomo e independiente, denominado Instituto Electoral del Estado. Mientras que en la mayoría de los casos de descentralización (de la administración pública) sólo se transfieren facultades propiamente administrativas, en el caso de la autonomía constitucional del Instituto Federal Electoral y del Instituto Electoral del Estado de Puebla (como también hipotéticamente podría ocurrir con otros organismos constitucionales públicos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México y las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley) **se faculta a sus órganos internos legalmente competentes para establecer sus propias normas o reglamentos**, dentro del ámbito limitado por el acto constitucional y/o legal a través del cual se les otorgó la autonomía, lo que implica también una descentralización de la facultad reglamentaria, que si bien en el ámbito de la administración pública federal o de cierta entidad federativa compete al respectivo Poder Ejecutivo, en el caso de un organismo constitucional autónomo requiere que se otorgue a un órgano propio interno, tal como ocurre con la facultad administrativa sancionadora o disciplinaria, **para evitar cualquier injerencia gubernamental, que eventualmente pudiera ser atentatoria de la autonomía e independencia constitucionalmente garantizada a dicho Instituto.**

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-244/2001. Partido Acción Nacional. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



## Partido de la Revolución Democrática

*votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Armando I. Maitret Hernández.*

*Notas: El contenido del artículo 41, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta tesis, corresponde al 41, párrafo segundo, base V, apartado A.*

*La Sala Superior en sesión celebrada el veintisiete de agosto de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.*

*Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 157 y 158.*

Conforme a lo anterior, lo determinado en el Decreto que se demanda su invalidez, atenta directamente con la autonomía propia en el funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues debilita de manera considerable la función electoral que se ejerce a través de todo el personal que integran todas y cada una de las áreas de dicho órgano electoral local, pues, a través de ellas, se realizan las interpretaciones de las disposiciones jurídicas que regulan su vida interna del instituto, en relación con el ejercicio de la función electoral, que aseguren o garanticen el puntual respeto de este derecho en su más amplia y acabada expresión.

Bajo esta perspectiva, con el Decreto que se impugna, trae como consecuencia que se haga nugatorio o se menoscabe el ejercicio de la función electoral de la autoridad electoral, pues de manera directa atenta con esa autonomía propia en su funcionamiento, establecida por la norma constitucional y con el pretexto de una supuesta autoridad, trastocar la composición del Instituto Electoral de la Ciudad de México, inmiscuyéndose en la vida interna de dicha autoridad electoral, dado que, de un plumazo y sin que exista una planeación adecuada, cambia la estructura orgánica de dicha autoridad electoral, desapareciendo las áreas técnicas conocidas como Unidad Técnica de Fiscalización, Centro de Formación y Desarrollo, Unidad de Vinculación con Organismos Externos, Unidad de Género y Derechos Humanos y Unidad Técnica de

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



Archivo, Logística y Atención a Órganos Desconcentrados, acto de autoridad que de manera directa lesiona la función y principios rectores de la norma electoral.

Al realizar una interpretación sistemática y funcional al Decreto del que se solicita su invalidez, es dable concluir que a todas luces es Inconstitucional, en virtud de que, en todo momento se deja de ponderar que todas y cada uno de las disposiciones jurídico normativas contenidas en el cúmulo de los artículos que componen el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, son el conjunto de normas electorales que rigen la conducta y la vida interna e institucional el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues, con ellas se garantiza que se realicen elecciones libres, periódicas y auténticas mediante sufragio efectivo, universal, libre, directo, secreto; obligatorio, personal e intransferible, premisas que, junto con los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas, objetividad, paridad e Interculturalidad rigen la función electoral, disposiciones jurídico normativas que se deben atender a cabalidad por las personas capacitadas para cada actividad de la función electoral, con las cuales se asegura el cumplimiento de las obligaciones, por lo que, cualquier cambio en la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, como lo es la que se hace en el Decreto que se impugna, por mínima que sea, afecta en un todo la función electoral, tutelada por el conjunto de normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Conforme a lo anterior, es dable concluir que el Decreto que se impugna, deja de hacerse cargo de que la autonomía propia en su funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, tiene la finalidad de que dicho órgano administrativo deba cumplir sus finalidades atendiendo a lo previsto en las normas constitucionales, así como en las leyes secundarias, reglamentos y lineamientos que de ella emanan, siempre una amplia libertad o capacidad autoorganizativa en el desarrollo de los

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



aspectos declarativos, ideológicos, programáticos, orgánicos, procedimentales y sustantivos para el mejor ejercicio de la función electoral, siempre en favor de los ciudadanos, premisas que tiene relación directa con el ejercicio del control sobre la constitucionalidad y legalidad respecto de la normativa básica de la autonomía propia del funcionamiento de la autoridad administrativa electoral, quien tiene a su cargo el garantizar la armonización entre los principios o valores inmersos a libertad de autoorganización, premisas que se desatienden en el asunto que nos ocupa.

Conforme a lo anterior, es importante destacar que, la emisión del Decreto que se demanda su invalidez, solo es emitido con el pretexto de una austeridad, motivación que a todas luces es contraria a derecho, pues, además de que, no se eliminan las actividades propias de la función electoral que tiene a su cargo el Instituto Electoral de la Ciudad de México, mismas que corresponden a las áreas técnicas de conocidas como Unidad Técnica de Fiscalización, Centro de Formación y Desarrollo, Unidad de Vinculación con Organismos Externos, Unidad de Género y Derechos Humanos y Unidad Técnica de Archivo, Logística y Atención a Órganos Desconcentrados, también dichas actividades institucionales relativas a la función electoral de dicho instituto, son incluidas a otras áreas técnica de la propia autoridad electoral, lo que trae como consecuencia un debilitamiento de dicha institución en el ejercicio de sus funciones, garantes de la función electoral, pues se le obliga a:

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

- ❖ Disminuir considerablemente sus áreas técnicas operativas, que son necesarias e indispensables para del debido y cabal cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias.
- ❖ Disminuir considerablemente el personal profesional capacitado de las áreas técnicas, Unidad Técnica de Fiscalización, Centro de Formación y Desarrollo, Unidad de Vinculación con Organismos Externos, Unidad de Género y Derechos



Humanos y Unidad Técnica de Archivo, Logística y Atención a Órganos Desconcentrados, que desaparece el decreto que se impugna.

- ❖ Disminuir considerablemente el personal profesional capacitado de la Secretaría Ejecutiva, así como de las áreas técnicas, Asociaciones Políticas, Educación Cívica y Construcción Ciudadana, que ha venido desempeñando sus funciones, para incluir a un disminuido personal de las áreas técnicas mencionadas en el punto inmediato anterior, que desaparece el decreto que se impugna.

En este orden de ideas, es dable colegir que el Decreto que se impugna, carece de todo sustento legal, lo que lo hace que adolezca de la debida fundamentación y motivación, derechos humanos tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; siendo éste un elemento suficiente bastante para determinar su invalidez lisa y llana.

La nula fundamentación y motivación del Decreto que se demanda su invalidez, obedece a que de manera subjetiva se pretende sostener como legal con el falso argumento de que conseguir una racionalidad, austeridad, economía, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, previendo un modelo de organización compacto que garantice el debido ejercicio y la probidad en la función pública; manifestación subjetiva que no se encuentra soportada con un razonamiento jurídico en el que se invoquen las circunstancias de hecho del caso concreto en el que además se invoquen los preceptos constitucionales, legales y/o reglamentarios aplicables al asunto en particular.

Por ende, de manera flagrante, se deja de atender lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que impone la obligación a las autoridades señaladas

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



como responsables a que en toda iniciativa de ley, decreto, o proyecto de reglamento y acuerdo que presente la Jefatura de Gobierno deberá contar con UNA EVALUACIÓN DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO realizada por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, razón por la cual, el Congreso de la Ciudad de México, tiene el deber garante de elaborar a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los dictámenes que se consideren necesarios, podrá realizar una valoración del impacto presupuestario de la iniciativa de Ley o Decreto, mismos que se deben realizar con el apoyo de la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas y podrá solicitar opinión a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México sobre el proyecto de dictamen correspondiente; premisas del debido proceso que en el asunto que nos ocupa, no se efectúan.

Bajo estas circunstancias, el Decreto que por esta vía y forma se impugnan, a todas luces, carecen de la debida fundamentación y motivación, pues, como es de verdad sabida y de derecho explorado, toda determinación de autoridad judicial o administrativa no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para emitir su fallo, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad, situación que en la especie no sucede, dado que sin razonamiento jurídico y sin fundamento legal alguno se emiten determinaciones, con las que manera directa lesiona la función electoral que ejerce el Instituto Electoral de la Ciudad de México como órgano autónomo en su funcionamiento y que al final de la cadena violatoria de normas constitucionales realizadas por la autoridades señaladas como responsables, también lesiona de manera grave los derechos humanos político electorales de los

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



ciudadanos tutelados por el artículo 35, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.

Así también, como es sabido, la garantía de fundamentación no sólo lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, pues, también obliga a atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios, por lo que, para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, es necesario que se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación, pues de no ser así, se dejaría al particular en estado de indefensión, premisas que en la especie no se cumple, dado que para imponer las excesivas sanciones al partido que se representa lo hace de manera subjetiva sin emitir algún tipo de razonamiento lógico jurídico en el que apoye su determinación; premisas constitucionales que en el asunto que nos ocupa no se cumplen.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

Esto es así en virtud de que, el Decreto que se demanda su invalidez, en primera instancia, como se argumentó con anterioridad, viola el principio de irretroactividad en la aplicación de la ley, dado que, con su aplicación, destruye de manera directa lo proyectado, presupuestas y etiquetado en el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba el ajuste al Programa Operativo Anual y al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, con base en las asignaciones autorizadas por el Congreso de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2022", identificado con el número IECM/ACU-CG-015/2022, emitido con mucho tiempo de anticipación al acto





que se impugna a través del presente medio de defensa legal, es decir, el día 15 de enero del año 2022.

Y, en segundo lugar, el Decreto que se impugna, no se encuentra soportado en un estudio emitido por alguna institución profesional y capacitada que pudiera determinar, **cuando menos:**

- ❖ **Si existe o no** un exceso en la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien través de sus diversas áreas creadas conforme a la reforma electoral del año 2014, es garante del ejercicio de la función electoral, en beneficio de los derechos humanos político electorales de los ciudadanos tutelados por el artículo 35, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.
- ❖ **Si existe o no** la necesidad jurídica de reducir la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, creadas conforme a la reforma electoral del año 2014.
- ❖ **En su caso**, que se indique de forma clara y puntual la necesidad de reducir la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, estableciendo de manera cuantitativa y cualitativa, las modificaciones estructurales y presupuestarias que deban hacerse sin que se ponga en riesgo el ejercicio de la función electoral y se siga garantizando la tutela de los derechos humanos político electorales de los ciudadanos protegidos por el artículo 35, de la Carta Magna.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

En este sentido, Decreto que se impugna, al no encontrarse soportado en un estudio como el que se comenta y que solamente se intenta sostener con el falso argumento



de que conseguir una racionalidad, austeridad, economía, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, previendo un modelo de organización compacto que garantice el debido ejercicio y la probidad en la función pública y sin que se emita algún razonamiento jurídico en el que se invoquen las circunstancias de hecho del caso concreto en el que además se invoquen los preceptos constitucionales, legales y/o reglamentarios aplicables al asunto en particular que soporten dicha determinación, es indudable que se deja de cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos constitucionales de los que se deriva la consideración jurídica de que la fundamentación y motivación del acto de autoridad se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis o puntos de derecho que se deben analizar, sobre la que se deba pronunciar la autoridad, apoyándose en el o los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios que permiten expedir, emitir o realizar los actos de autoridad y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, situación que en la especie no sucede, dado que sin razonamiento jurídico y sin fundamento legal alguno se emiten determinaciones, con las que manera directa lesiona la función electoral que ejerce el Instituto Electoral de la Ciudad de México como órgano autónomo en su funcionamiento y que al final de la cadena violatoria de normas constitucionales realizadas por la autoridades señaladas como responsables, también lesiona de manera grave los derechos humanos político electorales de los ciudadanos tutelados por el artículo 35, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

A



Conforme a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido los siguientes criterios.

**FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE.**

*La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre él porque considero que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.*

*Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.*

*Amparo en Revisión 220/93. Enrique Crisostomo Rosado y otro. 7 de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Manuel Patiño Vallejo. Secretario: Francisco Fong Hernández.*

*Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo xiv, noviembre de 1994, p. 450.*

*Tesis aislada*

*Materia(s): Común*

*Primera Época*

*Instancia: Primera Sala Ordinaria*

*Tesis: 1a. K XIV/2005*

**FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.**

*La exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. Finalmente, de acuerdo con el criterio*

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la tesis 2a./J. 57/2001, Novena Época, publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, visible en la página 31, cuyo rubro es: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORQUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.", la garantía de fundamentación lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios, por lo que, para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación, pues de no ser así, se dejaría al particular en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho.

**PRIMERA SALA ORDINARIA**

Juicio fiscal 008/2005. Jorge A. Valor. 27 de septiembre de 2005.  
Ponente: Humberto Morales Campa. Secretario: José Luis Flores Martínez.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

*Novena Época*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Tomo: VI, Agosto de 1997*

*Tesis: XIV.2o. J/12*

*Página: 538*

**FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO.** Al establecer el artículo 16 de nuestra Carta Magna que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, no alude únicamente a



las resoluciones definitivas o que pongan fin a un procedimiento, sino que se refiere, en sentido amplio, a cualquier acto de autoridad en ejercicio de sus funciones, como sería, por ejemplo, la simple contestación recaída a cualquier solicitud del gobernado, a la cual la ley no exige de cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación contenidos en tal precepto constitucional.

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.**

Amparo en revisión 155/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Roque C. Rodríguez Reyes). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Luis Manuel Vera Sosa.

Amparo en revisión 158/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Henry de J. Ortegón Aguilar). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Gonzalo Eolo Durán Molina.

Amparo en revisión 161/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Cecilio Chumba y Pérez). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Luis Armando Cortés Escalante.

Amparo en revisión 164/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Rubén A. Arcila Castellanos). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Gonzalo Eolo Durán Molina.

Amparo en revisión 168/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Julio C. Caballero Montero). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Luis Manuel Vera Sosa.

Véase: *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo XV-Febrero, tesis XX.302 K, página 123, de rubro: "ACTOS DE MERO TRÁMITE. AUN CUANDO NO SEAN RESOLUCIONES

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*

Tomo: 64, Abril de 1993

Tesis: VI. 2o. J/248

Página: 43

**FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.** De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir,

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



*que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.*

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.**

*Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.*

*Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. de C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.*

*Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.*

*Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcars.*

*Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 4 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.*

*Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, tesis 73, pág. 52.*

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

Con base en esta cadena argumentativa, es evidente que, el Decreto que se impugna es inconstitucional, pues, además de ser emitido sin la debida fundamentación y motivación, atenta directamente con la autonomía propia en su funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, lo que en consecuencia, también, ponen en riesgo el adecuado desarrollo de todas y cada una de las actividades de dicho órgano electoral, pues se ve disminuida su capacidad para la ejecución y cumplimiento de las



obligaciones impuestas por la norma constitucional y legal, y que son enunciadas en los artículos 41, Base V, apartado C; y 116, Fracciones II y IV, incisos a), b), c) y p), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, apartado A, inciso e) y 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 36 de la Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y que al final de la cadena violatoria de normas constitucionales realizadas por la autoridades señaladas como responsables, también lesiona de manera grave los derechos humanos político electorales de los ciudadanos tutelados por el artículo 35, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.

#### QUINTO.

**NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA.** - Lo constituye el DECRETO POR EL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A),

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUIES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUIES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; instrumento jurídico del cual se demanda su inaplicación, por ser contraria a disposiciones constituciones y legales.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

**CONCEPTO DE INVALIDEZ.-** El contenido del Decreto que se solicita su invalidez, viola flagrantemente las disposiciones contenidas en los artículos 41, Base V, apartado C, y 116, Fracciones II y IV, incisos a), b), c) y p), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, apartado A, inciso e) y 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como los principios certeza jurídica, equidad, neutralidad, imparcialidad, objetividad, legalidad, proporcionalidad y debido proceso, que rigen la materia electoral y que en todo momento se deben observar y respetar, preceptos constitucionales que en lo conducente establecen:







**CONCEPTO DE INVALIDEZ.-** El contenido del Decreto del cual se solicita su invalidez, viola flagrantemente las disposiciones contenidas en el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios certeza jurídica, equidad, neutralidad, imparcialidad, objetividad, legalidad, proporcionalidad, debido proceso y **SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL**, que rigen la materia electoral y que se deben observar y respetar en toda actuación judicial y administrativa; Precepto constitucional que en lo conducente establece:

*Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.*

Amén de lo que se hace valer en los agravios que anteceden, manifestación que se solicita se tome en cuenta en este acto, como si se insertara a la letra en obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesal, contrario a lo determinado en el

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

Decreto que se impugna a través del presente medio de defensa legal, en nuestro país, el control de la constitucionalidad es generalmente asociado al juicio de amparo, el cual por sus características especiales se configura como un medio jurídico que simultáneamente limita o impide los abusos del poder y preserva el ordenamiento jurídico. Pensar en realizar algunas consideraciones sobre el control de la constitucionalidad en México, implica retomar algunos conceptos básicos relativos a la Constitución y al significado de la defensa de la constitucionalidad.

En un análisis a través de la historia del derecho, nos permitiría descubrir desde sus inicios, los intentos de encontrar medios que permitan controlar el ejercicio del poder,



ya que desde tiempos remotos es un hecho conocido que quien detenta el poder, tiende a abusar de él y a desconocer y violar los derechos de aquellos que se encuentran sujetos a su potestad y crear.

Independientemente de intentos aislados de establecer por medio de instituciones jurídicas el control de dicha posibilidad, podemos decir que actualmente el control del ejercicio del poder cuenta con tres supuestos básicos, El primero de ellos es la existencia de un ordenamiento jurídico organizado jerárquicamente en cuya cúspide se encuentra la Constitución como norma suprema que determina los procesos de creación y validez del resto del ordenamiento jurídico, con el cual, se tiene la función configurarse no solamente como norma organizadora del ejercicio del poder y de la vida en sociedad y como garante de derechos fundamentales, sino también como límite del ejercicio del poder, en su cualidad de norma que establece sistemas de control del ejercicio del poder.

El segundo supuesto resulta de la teoría clásica de la división de poderes elaborada por Montesquieu, que pretende lograr un equilibrio y balance del ejercicio del poder mediante su división y repartición entre los tres órganos que realizan las funciones del

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

Estado. Esta teoría, no logra su cometido a menos que se contemple como una distribución funcional, controlable por medios jurídicos que impidan la invasión de esferas competenciales o la realización de actos de autoridad en ausencia de, o excediéndose en el ejercicio de sus facultades.

Y el tercer supuesto, de gran relevancia principalmente para el amparo, es el reconocimiento por los Estados modernos de los derechos fundamentales de los individuos, derechos oponibles frente a la actuación del Estado, que podrían considerarse inherentes a la persona humana en virtud de su dignidad y autonomía



personal. Sin embargo, debe mediar el reconocimiento y tutela de dichos derechos para poder hacerlos exigibles frente a la actividad del Estado.

Es innegable, que el reconocimiento por sí mismo no se convierte en garantía del ejercicio de dichos derechos, ni para impedir los abusos de autoridad. Por ello, deben articularse en el ordenamiento jurídico medios de protección de dichos derechos, que por ser fundamentales y estar contenidos en la Constitución, los convierten en garantías del orden constitucional al mismo tiempo.

Es fundamental que en todo Gobierno que se autodefina como un estado de Derecho, si un ordenamiento tiene pretensiones de validez sistemática, debe procurar evitar la aplicación de normas que atentan contra la norma suprema y el orden jurídico mismo, como lo es en el asunto que nos ocupa.

Conforme a lo anterior, en la especie, el Decreto que se demanda su invalidez, de manera flagrante viola el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la Carta Magna, en virtud de que, su contenido, no es acorde a lo regulado en los artículos artículo 116, Fracciones II y IV, incisos a), b), c) y p); y 41, Base V, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, apartado A, inciso e) y 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

El decreto del que se demanda su inaplicación a todas luces contraviene las disposiciones constitucionales invocadas, lo que a todas luces genera una violación a dichas normas y al principio de Supremacía Constitucional tutelado en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente establece **Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con**

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



***aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."***

Del precepto antes invocado se desprende que el principio de Supremacía Constitucional, consiste en que la constitución federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados suscritos por México con otros países, deben ceñirse a la Constitución Federal, principio del derecho constitucional que postula, originalmente, ubicar a la Constitución en particular en un peldaño jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas, internas y externas, que puedan llegar a regir en ese país; principio constitucional que dejó de atenderse en el asunto que nos ocupa.

En la especie, no debe pasar por desapercibido que, el hecho de que nuestra Carta Magna se divide en dos partes, una dogmática y una orgánica, entendiéndose la primera con el contenido de los derechos fundamentales del hombre, mientras que la segunda tiene como finalidad organizar el poder público, para que el estado y autoridades no puedan ejercitar un poder sin límites sobre las leyes e individuos, es preciso que se encuentre circunscrito a un sistema de competencias, y así evitar el abuso del poder.

En este orden de ideas, de una interpretación sistemática y funcional artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprecia que se prevén diversos principios constitucionales entre ellos el de la supremacía constitucional y el de jerarquía normativa, que son de gran importancia en la aplicación del derecho positivo mexicano, ya que la expresión literal del texto autoriza a pensar a primera vista que no es sólo la Constitución como ley suprema, sino también las leyes del Congreso de la Unión y los tratados, regulación que debe ser acorde y desprenderse

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



de propio texto que la Constitución quien es superior a las leyes federales, porque éstas para formar parte de la ley suprema deben “emanar” de aquélla, esto es, deben tener su fuente en la Constitución, que necesitan “estar de acuerdo” con la Constitución, situación que no sucede en el asunto que nos ocupa, dado que el Decreto del que se demanda a todas luces viola principio de Supremacía Constitucional tutelado en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior en virtud de que, el Decreto que se impugna a través del presente medio de defensa legal, no es acorde a lo establecido en los artículos 116, Fracciones II y IV, Incisos a), b), c) y p); y 41, Base V, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, apartado A, inciso e) y 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México, pues, de los que se desprende que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, como órgano con autonomía propia en su funcionamiento, tiene el deber garante de organizar las ejercer la función estatal de realizar las elecciones de candidatos a cargos de elección popular, junto con Instituto Nacional Electoral, así como que, constitucionalmente se determina que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, tiene a su cargo el garantizar los derecho y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, educación cívica, realizar la preparación de la jornada electoral, organizar la impresión de documentos y la producción de materiales electorales, realizar los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley, emitir las declaraciones de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, realizar los cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo en la Ciudad de México, emitir resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, organizar, desarrollar, computar y emitir la declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana.

En general, el Decreto que se impugna, olvida por completo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, como órgano autónomo en su funcionamiento,

“En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.”.



constitucionalmente tiene a su cargo la planeación, sustanciación, realización y ejecución de las elecciones de los cargos de Jefatura de Gobierno, Diputaciones Locales, Titulares de las Alcaldías y Concejales, así como de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad, que se realizan a través del método de sufragio universal, libre, secreto y directo; bajo esas circunstancias, dicho órgano electoral administrativo, tiene la obligación garante de ejercer su función electoral, observando y respetando los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, todo esto para garantizar el derecho y la tutela de los derechos y obligaciones contenidas en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Bajo estas premisas, el Decreto que se impugna, a todas luces viola el principio de supremacía constitucional, tutelado por el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que, de manera flagrante:

- ❖ Desconoce las facultades del Instituto Electoral de la Ciudad de México, concedidas por la norma constitucional tanto federal como local.
- ❖ Desconoce que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, es una entidad de interés público, que tienen un régimen especial y autonomía propia en su funcionamiento, característica concedida por la norma constitucional tanto federal como local.
- ❖ Invade y desconoce las facultades del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a organizarse de manera internamente para cubrir con su obligación constitucional relativa al ejercicio de la función electoral, concedidas por la norma constitucional tanto federal como local

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



En este orden de ideas, como es de verdad sabido y de derecho explorado, el principio de supremacía constitucional es medio por el cual se dispone que la Constitución es la ley suprema, es la norma cúspide de todo el orden jurídico, es el alma y la savia que nutre y vivifica el derecho, es la base de todas las instituciones y el ideario de un pueblo, por ello, es dable arribar a la conclusión de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma básica, fundamental y la base de todo el ordenamiento jurídico, por consiguiente, cualquier norma que contenga disposiciones que la contradigan no debe existir, premisas de legalidad y de certeza jurídica que en todo momento se dejan de observar al momento de emitir y publicar el Decreto del que se demanda su invalidez lisa y llana.

Por su parte Fix-Zamudio, Héctor y Salvador Valencia Carmona en su obra titulada "Derecho Constitucional Mexicano y Comparado", 2ª ed. México, editorial Porrúa; Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001. p. 68 sostienen que el principio de supremacía constitucional descansa en la idea de que por representar la Constitución la unidad del sistema normativo y estar situada en el punto más elevado de éste, contiene las normas primarias que deben regir para todos dentro de un país, sean gobernantes o gobernados; dichas normas primarias constituyen al propio tiempo la fuente de validez de todas las demás normas que por eso se han llamado secundarias y que componen el derecho positivo en general.

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el siguiente criterio jurisprudencial

Número de registro: 172667  
Tesis: Tesis aislada P. VIII/2007  
[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Abril de 2007; Pág.  
6

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



### **SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.**

*A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las Leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de "supremacía constitucional" implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la "Ley Suprema de la Unión", esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales.*

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

*Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número VIII/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete. Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.*

En este sentido, como es sabido, el término supremacía proviene de la raíz inglesa *supremacy*, que significa superioridad de grado, jerarquía o autoridad, por lo que el principio "*supremacía constitucional*" se refiere a que la Constitución es jerárquicamente superior a cualquier otra norma de orden jurídico, por ello, la





**Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, conforme a lo establecido en su artículo 133, es la Ley Suprema, y **está situada por encima de las demás normas jurídicas del país** y de los tratados internacionales celebrados con otros países; premisas de legalidad y de certeza jurídica que en todo momento se dejan de observar al momento de emitir y publicar el decreto del que se demanda su invalidez lisa y llana.

Bajo esta premisa, una de las consecuencias más importantes del principio de supremacía constitucional es que **todas las normas, lineamientos de nuestro país deben ser acordes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que si una disposición de una ley es contraria a lo establecido por la Carta Magna**, como lo es el DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES SOBRE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, **lo establecido en la Constitución Federal, debe prevalecer sobre aquélla debido a su superioridad jerárquica**; en virtud de que es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico de un Estado, legitimando la actividad de los órganos estatales y dotándolos de competencia, además de que una de las características de la normativa de la Constitución Federal es que constituye el parámetro de validez de las demás normas del sistema jurídico, por lo que la supremacía constitucional implica la subordinación del orden jurídico a la Constitución; Sobre el particular, son aplicables las siguientes tesis y jurisprudencias de observancia general emitidas por esta H. Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



**INAPLICACIÓN DE LEYES ELECTORALES. LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DEBEN DECLARARLA, CUANDO LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES INTERPRETEN PRECEPTOS LEGALES QUE RESULTEN CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL O A LOS TRATADOS INTERNACIONALES.**

- De lo dispuesto en el artículo 99, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al conocer de planteamientos de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de preceptos legales aplicados a situaciones concretas, tienen la facultad de inaplicarlos cuando contravengan la Norma Fundamental o un tratado internacional, y sus resoluciones se limitarán al caso específico. En este contexto, en el supuesto de que una autoridad jurisdiccional electoral estatal realice la interpretación de una norma jurídica local y determine que excede los límites constitucionales o convencionales, y tal circunstancia se exponga ante las referidas Salas en un medio de impugnación federal, éstas después de analizar la disposición legal en comento, a efecto de apreciar si existe dicha contravención constitucional o convencional establecida por el tribunal local, deberán declarar, en su caso, la inaplicación de la porción normativa en cuestión.

Quinta Época:

Julio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-3236/2012.—Actor: Santiago López Acosta.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato.—23 de enero de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Juan Manuel Arreola Zavala.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de noviembre de dos mil trece, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 102 y 103.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

**PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.**- De conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico



"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

*mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.*

*Tercera Época:*

*Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos.*

*Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-460/2000. Partido Acción Nacional. 29 de diciembre de 2000. Unanimidad de votos.*

*Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-009/2001. Partido de Baja California. 26 de febrero de 2001. Unanimidad de votos.*

*Notas: El contenido de los artículos 41, fracción IV, y 116, fracción IV, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados en esta jurisprudencia, corresponde respectivamente, con los diversos 41, párrafo segundo, base VI, y 116, fracción IV, inciso I), del ordenamiento vigente.*

*La Sala Superior en sesión celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil uno, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.*

*Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 24 y 25.*

Por último, y por así convenir a los intereses que se representan, desde este momento se ofrecen las siguientes:

## PRUEBAS

- I. INSTRUMENTAL PÚBLICA.** - Consistente en el "DECRETO POR EL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33; 36; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES I, IV Y V ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59; EL PRIMER PÁRRAFO



DEL ART. 60; EL ARTÍCULO 61; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63; EL ARTÍCULO 64; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 67; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 80; LOS INCISOS N) Y Ñ) DE LA FRACCIÓN II, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 83; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 94; PRIMER PÁRRAFO, LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 95; EL ARTÍCULO 103; EL ARTÍCULO 107; LAS FRACCIONES I, II, IV, VII, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 109; TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 162; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 251; EL ARTÍCULO 265; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 273; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 323; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348; EL ARTÍCULO 350; 351; PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 352; PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 353; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 383; EL ARTÍCULO 406; Y PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 408. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS, UN PÁRRAFO Y LOS INCISOS A), B), C), D), E) Y F) AL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS, LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I) Y J) A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 63; LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 67; LOS INCISOS O), P) Y Q) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; LAS FRACCIONES XIX BIS, XIX TER Y XIX QUÁTER AL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES XXIV BIS, XXIV TER Y XXIV QUÁTER AL ARTÍCULO 88; LAS FRACCIONES XXII BIS, XXII TER, XXII QUÁTER, XXII QUINQUIES Y XXII SEXIES AL ARTÍCULO 94; LAS FRACCIONES XV BIS CON LOS INCISOS A) Y B), XV TER, XV QUÁTER, XV QUINQUIES, XV SEXIES, XV SEPTIES, XV OCTIES Y XV NONIES DEL ARTÍCULO 95; SE AGREGAN LOS INCISOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 103. SE DEROGA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 50; LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTÍCULO 59; SE DEROGAN LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 60; EL ARTÍCULO 65; EL ARTÍCULO 68; EL INCISO N) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 83; EL SEGUNDO PÁRRAFO

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."



DEL ARTÍCULO 84; LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 86; LAS FRACCIONES III, V Y VI, ASÍ COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98; LA FRACCIÓN II Y DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 102, LOS PÁRRAFOS 2, 3, 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 107; EL ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 109. TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, publicado en la página de internet [https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal\\_old/uploads/gacetas/8724b308265dc871df88e2ae5016ab16.pdf](https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8724b308265dc871df88e2ae5016ab16.pdf), de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 2 de junio de 2022, con el número de No. 864 Bis.

**II. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES** Consistente en las constancias que obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo que beneficie a la parte que represento.

**III. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. -** Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento.

“En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.”

Los medios de prueba que se ofrecen se relacionan con todos y cada uno de los hechos que se mencionan y agravios que se hacen valer en el presente medio de defensa legal, con los cuales se acredita la ilegalidad de los actos que se impugnan en el presente medio de defensa legal.

Por lo expuesto y fundado;

De ustedes Ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;



Atentamente solicito:

**PRIMERO.** - Tener por presentado en tiempo y forma el presente medio de impugnación y por reconocida la personalidad de quién suscribe.

**SEGUNDO.** - En su oportunidad, dar vista a las autoridades responsables para que rindan el informe a que se refiere el artículo 64 la citada Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución Federal, desahogando el procedimiento respectivo.

**TERCERO.** - Una vez agotada toda secuela procesal, emitir resolución en la que declare fundada la acción de inconstitucionalidad, y como consecuencia, se invalide la reforma realizada al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México que se impugna.

"En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."

**DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS.**

**JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA.**  
Presidente de la Dirección Nacional Ejecutiva  
del Partido de la Revolución Democrática.

011557

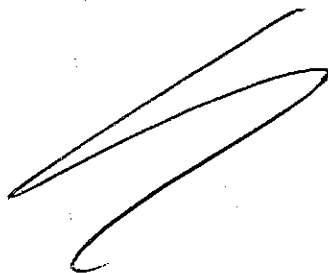
SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACION

2022 JUL 1 AM 8 32

OFICINA DE CERTIFICACION  
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibido por buzer Judicial -  
en fecha JUN 30-22- en 154  
hojas segun su ultimo folio.  
Con.

- Certificación de registro en Oficia  
- Gaceta Simple de gaceta oficial de -  
Ciudad de México, de 2-junio-2022  
en 24 páginas





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTES DE JUSTICIA DE LA UNIÓN

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

~~Segunda Instancia~~

Acordón de Insanctificabilidad  
Partido de la Revolución Democrática

NOMBRE DEL PROMOVENTE:

Jesus Zarambano

Gajalva

NÚMERO DE COPIAS:

1

NÚMERO DE ANEXOS:

2

FOLIO:

27496



fb2338c085fa06486e6c2dc8f11f6bcac82798a8a62b58e0faf650affc5dd6a8

**AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**

Evidencia criptográfica.